

2021

EL AÑO EN EL QUE NO VOLVIMOS A LA NORMALIDAD



JUAN TORRES LÓPEZ

2021
El año en el que
no volvimos
a la normalidad
(Recopilación de artículos)

Juan Torres López

Copyright © 2022 Juan Torres López

Todos los derechos reservados.

INDICE

PRESENTACIÓN	9
EL AÑO EN EL QUE NO APRENDIMOS LO QUE DEBIMOS HABER APRENDIDO HACE TIEMPO.....	11
EL FUTURO DE LA EMPRESA ESPAÑOLA	15
DISCURSOS VACÍOS SOBRE INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS	21
LA GESTIÓN DE LAS VACUNAS COMO SÍNTOMA.....	24
DONDE DIJE DIGO, DIGO DEUDA	27
INNOVAR O MORIR. EL COMPLICADO FUTURO DE LA HOSTELERÍA.....	31
LOS CULPABLES NO SON LAS FARMACÉUTICAS SINO LA COMISIÓN, EL PARLAMENTO Y LOS GOBIERNOS EUROPEOS	35
LO QUE HUNDE A LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS Y NO MENCIONAN QUIENES DICEN DEFENDERLAS	44
LO QUE NOS ESPERA (A ESTE PASO) CUANDO ACABE LA PANDEMIA.....	53
ESTAMOS TONTOS	58
LOS PRIVILEGIOS QUE EUROPA DIO A LAS GRANDES EMPRESAS HIPOTECAN AHORA SU POLÍTICA ENERGÉTICA..	62
MUJERES Y ECONOMÍA ACADÉMICA: LA DISCRIMINACIÓN QUE NO CESA.....	66
LA CREACIÓN ARTIFICIAL DE LA ESCASEZ: EL CASO DE LAS VACUNAS	72
EUROPA NO FUNCIONA Y ALEMANIA JUEGA CON FUEGO....	77
BIDEN ACABA CON EL ANARCOLIBERALISMO Y TIENE UNA BUENA RAZÓN PARA HACERLO	82
LUCES Y SOMBRAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN	86

¿PARA QUÉ SIRVE BAJAR IMPUESTOS A LOS RICOS, COMO PROPONEN EL PP Y VOX?	91
NO. NI VICENÇ NAVARRO NI YO HEMOS ESCRITO EL DISCURSO DE BIDEN. ES SOLO QUE LLEVÁBAMOS RAZÓN ..	100
HABLÓ EL BANCO DE ESPAÑA, LA INSTITUCIÓN QUE MÁS DINERO NOS CUESTA A LOS ESPAÑOLES	103
ESPAÑA 2050: UNA BUENA IDEA, UN MAL COMIENZO	108
UNA AGENDA INÉDITA QUE ACABA CON CUARENTA AÑOS DE MENTIRAS.....	119
EL BANCO DE ESPAÑA VUELVE A ENGAÑAR A LOS ESPAÑOLES	122
LA DEUDA, UNA BOMBA A DESACTIVAR POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS.....	126
EL VERDADERO PELIGRO DE LA INFLACIÓN QUE SE AVECINA.....	129
EL BLUF DE LAS AUDITORÍAS DEL GOBIERNO ANDALUZ	135
EL GOBIERNO ANDALUZ HA MENTIDO AL INFORMAR SOBRE LAS AUDITORÍAS.....	140
IZQUIERDAS ELECTROCUTADAS	145
EL GRAN ENGAÑO QUE HAY DETRÁS DEL RECIBO DE LA LUZ	151
MAFIOSA RESPUESTA DE LAS ELÉCTRICAS A LAS MEDIDAS OBLIGADAS Y SENSATAS DEL GOBIERNO	156
EUROPA ES RESPONSABLE DEL PRECIO DE LA LUZ Y DEBE ACTUAR CON URGENCIA	167
VIENE OTRA CRISIS (¿LA GRANDE?) Y NO SE LE DA RESPUESTA	173
EL BANCO DE SUECIA PONE EN SU SITIO A LA DERECHA, LA PATRONAL Y AL BANCO DE ESPAÑA.....	183
ECONOMÍA MUNDIAL: EL RIESGO DE UNA TORMENTA PERFECTA	190

CRIPTOMONEDAS: SOLO ESPECULACIÓN QUE ACELERA EL DESASTRE CLIMÁTICO.....	195
¿QUIÉN CREA LOS EMPLEOS Y A QUIÉN HAY QUE PROTEGER PARA CREARLOS?.....	201
LOS HALCONES VUELVEN A VOLAR PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SIEMPRE.....	206
LOS BANCOS CENTRALES EN EVIDENCIA	212
LA MAYOR DE LAS MENTIRAS DE NUESTRO TIEMPO.....	216
LA ECONOMÍA EN 2022: MÁS NUBES QUE CLAROS	220

PRESENTACIÓN

En las páginas que siguen se encuentran la mayoría de los artículos de opinión que he publicado a lo largo de 2021. Son los dedicados a comentar la actualidad económica, puesto que he eliminado otros dedicados a comentar algunos hechos políticos y, sobre todo, los que publiqué con Emelina Fernández sobre temas de comunicación y que quizá vean de nuevo la luz en una publicación independiente. Aunque hay claramente diferentes grupos de temas (economía nacional, internacional, Europa, finanzas, factura de la luz, Andalucía, comunicación...) he preferido dejarlos en el orden en que fui publicándolos porque me parece que así se sigue más fácilmente no solo la secuencia temporal, sino también el interés dominante en cada momento.

Todos los artículos son, digámoslo así, "de batalla", concebidos para denunciar, desvelar o informar desde mi punto de vista, como no puede ser de otro modo. Es imposible que siendo publicados semanalmente lleven detrás una investigación o documentación profundas. Son artículos de opinión y no otra cosa, aunque en gran parte tienen la base que les proporciona el estudio que hay detrás de los libros de más profundidad que he publicado en los últimos años.

Tengo desde hace muchos la convicción de que no poseo la verdad absoluta, aunque lógicamente creo que lo que digo es lo que responde a la realidad, tal y como yo la percibo. No pretendo convencer a nada ni tengo la menor intención de hacer creer que mis afirmaciones son las correctas. Yo expreso lo que pienso y me limito a compartir mis reflexiones. Si acaso, tan solo busco sembrar la duda, inquietar, llamar a la reflexión, facilitar que la gente descubra las cosas con su propia cabeza. Y, sobre todo, que perciba las injusticias, el daño que produce la desigualdad y el egoísmo humano y se indigne y rebele.

Como he dicho, ni creo que yo tenga la verdad, ni pienso que lo que escribo tenga más valor que el que tiene, el de ofrecer datos, versiones e interpretaciones de la realidad críticas y diferentes a las que predominan en el discurso mayoritario. Si resultan de alguna utilidad a quien me lea ya me sentiré satisfecho y feliz.

Agradezco a los medios en donde he publicado estos artículos (Público y El Diario) que me permitan su difusión en esta obra y los ofrezco ahora invitando

a difundirlos en la medida y la forma en que mejor parezca, simplemente mencionando el lugar de publicación y, a ser posible, la autoría.

Sevilla, enero de 2022

Juan Torres López

EL AÑO EN EL QUE NO APRENDIMOS LO QUE DEBIMOS HABER APRENDIDO HACE TIEMPO

Publicado en Público.es el 1 de enero de 2021

Aunque 2020 ha sido un año aciago parece que termina con esperanza gracias a la distribución de las vacunas contra la Covid-19.

La rapidez con la que se están consiguiendo es extraordinaria, a la altura de lo inusual que están siendo esta pandemia y sus efectos económicos. Hemos de felicitarnos, pero no podemos olvidar, como señalan algunos informes, que los países más pobres solo podrán disponer de alguna vacuna, con suerte, a partir de 2022. Y no sólo eso. Es muy ingenuo creer que con ella se resuelven todos los problemas que genera la pandemia, que las economías se van a recuperar rápidamente y que entraremos enseguida en una nueva etapa de prosperidad.

Si bien es cierto que la mayoría de los gobiernos han realizado un esfuerzo improbable para combatir los efectos del coronavirus no lo es menos que se han dejado sin resolver, e incluso sin plantear, algunos problemas que pueden terminar por ser incluso más letales que las propias pandemias para el futuro del planeta.

Quizá no esté de más, ahora que se hace balance y se tienen buenas intenciones, volver a poner los más importantes sobre la mesa.

A pesar del golpetazo en la cara que ha supuesto la pandemia, no parece que hayamos aprendido que no se puede jugar con la naturaleza, que ésta no es nuestra y que, aunque lo fuera, no podemos alterar sus leyes y procesos. La salvaguarda de la vida en el planeta y de los equilibrios medioambientales que la hacen posible debería ser un principio esencial que impidiera que se supedita a los intereses comerciales, pero seguimos sin actuar así. La reciente apertura de

mercados de futuros del agua es una buena prueba de que la humanidad no se ha dado cuenta todavía de que los recursos naturales no son mercancías sino comunes cuyo uso no puede estar regulado por los mercados.

No parece que hayamos aprendido que la economía y la vida social no pueden guiarse tan sólo por la satisfacción de los intereses particulares de los grupos de población más poderosos, y que es imprescindible que se dediquen recursos suficientes para que se pueda garantizar la provisión de bienes públicos esenciales como la investigación, la sanidad, el cuidado o la seguridad. Que una pandemia ampliamente anunciada haya impactado en todos los países con tanta improvisación y en medio de carencias fundamentales es una prueba evidente de que las prioridades de atención e inversión en nuestro mundo están colocadas completamente al revés.

No queremos aprender que la desigualdad es un peligro letal que produce crisis económicas recurrentes, además de creciente insatisfacción. ¿Cómo se puede justificar que la ayuda que han recibido todas las familias estadounidenses por la crisis de la Covid-19 (465.000 millones de dólares) sea prácticamente la misma que el incremento de patrimonio de las 16 personas más ricas de aquel país (471.000 millones¹)

Tampoco parece que queramos aprender que es completamente insostenible que el motor que empuja a las economías sea el negocio de la banca, es decir, la deuda. Es una barbaridad que, incluso en momentos de emergencia como los que vivimos, no se esté siendo capaz de poner en marcha mecanismos de respuesta y financiación que no supongan su incremento, en beneficio exclusivo del negocio bancario. Una lección básica que no hemos aprendido y cuyo desconocimiento lo vamos a pagar bien caro cuando, al salir de esta crisis de la Covid-19, entremos en otra provocada por el desbordamiento de la deuda gubernamental y privada.

No aprendemos tampoco que las finanzas deben ser un instrumento al servicio de las empresas y los hogares, de la actividad productiva y del consumo, y no un fin en sí mismo que lo único que consigue es que el 1% más rico de la población ponga ceros sin parar en sus cuentas bancarias. El haber aprovechado

¹ 10 Stats That Will Blow Your Mind. En: bit.ly/3nDzQ81

la pandemia para seguir capitalizando artificialmente a las bolsas, permitiendo que los grandes fondos de inversión y las grandes empresas obtengan beneficios descomunales con el dinero público y manipulando sus activos con el único fin de ganar dinero especulando con ellos, es también una prueba palpable de la irracionalidad con la que funciona la economía mundial.

No hemos entendido que los problemas globales necesitan soluciones globales coordinadas y que, cuando la vida y el patrimonio de las personas están en peligro por emergencia como las que estamos viviendo, es imprescindible la cooperación y la ayuda mutua, la solidaridad y el esfuerzo en común. La competencia entre los gobiernos a la hora de disponer de recursos sanitarios básicos, la negativa de algunos de ellos a vender mascarillas o respiradores cuando otros países los necesitaban, el egoísmo de los países ricos a la hora de planificar la distribución de la vacuna y el desconcierto o la simple ausencia de gobernanza global, en medio de una pandemia de consecuencias tan dramáticas, muestra que nuestro planeta está realmente a la deriva.

La pandemia nos ha mostrado, sin que tampoco parezca que lo hayamos entendido, que no se puede dejar al albur de lógicas mercantiles globales la disposición de recursos esenciales básicos, sanitarios, tecnológicos, alimenticios, o incluso culturales que se pueden obtener con más eficiencia, menos coste energético y mayor seguridad en la economía de proximidad, en el interior de las naciones.

Seguimos sin entender y aceptar que la democracia no es tal cuando se queda a las puertas de las cuestiones económicas, que sin democracia económica no hay democracia efectiva ni real.

Que la pandemia haya sido el caldo de cultivo para violar derechos humanos, para fortalecer el poder de los grandes grupos mediáticos, o el de la proliferación de la mentira y la desinformación estratégicamente difundidas, muestra también que no hemos querido entender que la libertad en la que supuestamente están instaladas las sociedades más avanzadas del planeta es una falacia porque no está garantizada la rendición de cuentas, la pluralidad en la emisión de la información, la retroactividad y la comunicación auténtica que es algo muy distinto a la difusión de mensajes en un solo sentido, como ocurre bajo el imperio actual de los grandes conglomerados informativos al servicio de los grandes grupos de poder económico y financiero.

Hemos de tener esperanza y confiar en que las cosas vayan a mejor en 2021

pero, si seguimos sin abordar los grandes retos estructurales de nuestro tiempo, el mundo va a tener, en un futuro muy próximo, problemas aún más graves que los que hemos vivido en el año que se acaba.

EL FUTURO DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

Publicado en Público.es el 8 de enero de 2020

El enorme protagonismo de los problemas sanitarios y humanos y el de los económicos y políticos más generales que ha provocado la Covid-19 está dejando en un segundo plano un drama que se avecina en España, aunque también en otros países de nuestro entorno. Me refiero al que se cierne sobre miles de negocios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas o de empresarios individuales que, de momento, están sobreviviendo pero que van a desaparecer sin remedio cuando, antes o después, se acaben las ayudas de Estado.

Los datos estadísticos son engañosos. Según los que proporciona la Seguridad Social, a finales de noviembre pasado había 31.000 empresas menos que enero de 2020. Un número elevado, sin duda, pero muy por debajo del que se habría registrado si muchas más no siguieran funcionando por pura inercia pero sin suficiente actividad ni ingresos, solo gracias a los avales, los ERTES o a la prórroga concedida por el gobierno para presentar obligatoriamente concursos de acreedores o de extinción cuando carecen de liquidez o son insolventes.

Las estimaciones del Banco de España son más preocupantes: una de cada cuatro empresas españolas estaría ya en quiebra técnica; cuatro de cada diez tendrían serios problemas de liquidez o insolvencia y no podrían hacer frente a sus costes financieros; la mitad (o casi tres cuartas partes en los sectores más afectados por la crisis) habrán cerrado 2020 con pérdidas; y entre un seis y un diez por ciento tendrían riesgo cierto de desaparecer. Una estimación esta última que incluso parece muy optimista considerando las anteriores.

Una encuesta europea reciente señalaba que sólo el 6% de las pequeñas y

medianas empresas españolas había mejorado ingresos desde marzo pasado y que el 80% había empeorado su situación. Y, para que no nos dejemos llevar por el consuelo de los tontos creyendo que lo que nos pasa es mal de muchos, diré que el estudio indicaba también que nuestras pymes eran las que más problemas tenían para hacer frente a los alquileres, para mantener el empleo y las cadenas de suministro o para pagar los suministros de insumos esenciales en su respectiva actividad.

Los dirigentes empresariales, sobre todo en los sectores más afectados, piden continuamente ayudas y con más o menos dificultad o celeridad las están recibiendo por parte del Estado. Pero nos estamos engañando.

Para salvar a los miles de empresas españolas que se encuentran ahogadas, para que no se pierdan para siempre su patrimonio y el empleo que generan, no basta con mantenerlas vivas artificialmente, a base de ayudas y de incrementos de su deuda con los bancos, por muy rentable que sea para estos últimos seguir proporcionándole cada día nueva financiación, sabiendo que siempre los salva el Estado cuando prestan por encima de sus posibilidades.

La razón de por qué nos estamos engañando es muy sencilla. La Covid-19 no está provocando tan solo una interrupción en la actividad, no es un simple accidente en mitad de la carretera que nos obliga a detenernos durante un rato más o menos largo. Además de eso, que ya es mucho, la pandemia que vivimos ha reescrito las reglas y los procesos que mueven la economía de todos los países sin excepción. La de 2022 será muy diferente a la que había a finales de 2019 y quien se limite a esperar que se recobre la actividad anterior se estrellará sin remedio contra la realidad.

Incluso la reactivación tras el confinamiento ha causado problemas a las empresas que se han beneficiado de ella. Se ha producido una avalancha de lo que se están llamando “compras de venganza”, como desquite por el sufrimiento que se ha pasado en los meses anteriores o para dar salida al ahorro acumulado. Producen un incremento muy grande en el consumo, en las ventas o en el empleo pero de forma tan acelerada y desproporcionada que han llegado a colapsar incluso a muchas grandes empresas porque en la normalidad anterior no estaban acostumbradas ni tenían medios de cambiar de escala en tan gran medida y a tan gran velocidad como ha sido necesario.

Se está empezando ya a producir y seguirá cada vez con más fuerza, un

incremento extraordinario de la productividad en casi todos los sectores que va a alterar las estrategias de competitividad y de posicionamiento en los mercados. Pero sólo se podrá disfrutar de la mayor productividad si se innovan los procesos, si se cambia la organización y si los recursos se utilizan de otro modo. No va a bastar, ni mucho menos, con la continua intensificación del tiempo de trabajo a la que viene recurriendo la empresa española gracias a la gran asimetría en el poder de negociación que consolidaron las últimas reformas laborales. Y el parasitismo tecnológico propio de la gran mayoría de nuestras empresas ya no será una vía de escape sino una autopista que llevará directamente a la extinción.

Los estudios que se vienen realizando muestran también que se están produciendo cambios en los comportamientos de los consumidores que cada día que pasa tienden a consolidarse con más fuerza como estructurales y no como simples respuestas momentáneas a la pandemia. Y en España deberíamos tener muy presente que se constata, además, que los cambios que tienden a consolidarse son mucho más fuertes y visibles en actividades de servicios personales, restauración u hostelería, es decir, en las que tienen mucho peso, como es bien sabido, en nuestra economía.

La Covid-19 trae consigo también una auténtica “bio-revolución” que algunos estudios señalan que va a modificar las formas y los procesos de producción y utilización del 60% de los insumos productivos. Y cada día se da más por sentado en los informes prospectivos que la “economía sin contacto” ha llegado para quedarse y no sólo en algunos sectores específicos de consumo social sino en el conjunto de las actividades económicas. O que, a partir de ahora, se va a primar la seguridad en los aprovisionamientos frente al ahorro de costes de la globalización.

A estos cambios directamente provocados por la pandemia hay que unir los que ya se habían ido abriendo paso en los años anteriores: la nueva revolución tecnológica, los que vienen de la mano de la digitalización, la automatización a gran escala o el big data, las nuevas formas de financiación y medios de pago... Y, por último, quizá el más sutil de todos ellos pero posiblemente el más determinante del comportamiento empresarial: la certeza de que entramos en una fase histórica en la que la excepcionalidad y lo extraordinario van a ser lo normal y, por tanto, en la que el peligro más grande al que se enfrentan los negocios es el derivado del conservadurismo, la inflexibilidad, la inercia y la uniformidad o especialización a ultranza.

En este panorama, me parece que el futuro de las empresas españolas es muy negro porque están cometiendo tres errores muy graves.

El primero es el de no haberse dado cuenta de que la prioridad debía haber sido desde el principio combatir la pandemia. Todos los estudios están demostrando que la adversidad para las empresas crece proporcionalmente al número de muertes y contagios y en la misma medida en que empeora la experiencia personal de la gente, es decir, cuanto más se alarga en el tiempo la pandemia. La inmensa mayoría de las empresas españolas y sus dirigentes han vuelto a caer en lo que Paul Samuelson, el economista más reconocido de la segunda mitad del siglo pasado, llamaba “la falacia de la composición”: creer que lo que es bueno para cada una de ellas es lo mejor para todas. Una falacia que lleva a promover políticas generales (como las de supeditar la lucha contra la pandemia al salvamento de la economía) que al final hunden a casi todos.

Si se quiere salvar a la empresa española, lo prioritario debe ser atajar cuanto antes y a cualquier precio la pandemia y mantener vivas a las empresas por cualquier medio pero solo a cambio de que se reinventen con planes de readaptación a una situación posterior que no va a tener mucho que ver con la que tenían antes de la Covid-19. Es una obviedad: las empresas que más ayudas necesitan son las de actividades más afectadas pero, precisamente por eso, las que más han de cambiar si no quieren desaparecer automáticamente a poco que la pandemia vaya desvaneciéndose.

El segundo error que lastra el futuro de la inmensa mayoría de las empresas españolas es el de haber asumido como suya la estrategia de las grandes empresas que disponen de clientelas y mercados cautivos y, sobre todo, de lo que realmente marca las diferencias en el mundo de los negocios: el poder, la influencia política y mediática. Su posición dominante les permite obtener beneficios extraordinarios en cualquiera que sea la situación de los mercados, y más concretamente en uno interno deprimido en donde una menor masa salarial global significa menos coste pero no menos ventas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas españolas que no disponen del poder de negociación y decisión ni de la influencia de las muy grandes, las que no tienen cautiva a una parte sustancial del mercado, necesitarían, por el contrario, una estrategia de fortalecimiento del mercado interno, aumentar “la tarta”. Para ellas, a diferencia de lo que ocurre con las grandes y aunque no sepan a veces reconocerlo, menos masa salarial supone menos ventas y menor empuje e

incentivo para innovar y, por tanto, peores condiciones de existencia y la necesidad de salir adelante atándose ellas mismas la soga al cuello, es decir, bajando aún más los salarios y renunciando a los incrementos de productividad.

El tercer error que hipoteca a las empresas españolas es el de creerse las tonterías que dicen los economistas de mayor influencia que proclaman la inutilidad del Estado y defienden su jibarización continuada, algo que solo beneficia justamente a las grandes empresas rentistas que promocionan y financian esos discursos.

En conclusión y por utilizar una expresión muy nuestra, si se quiere salvar a los miles de empresas que están en riesgo cierto de desaparecer en cuanto acabe el apoyo del Estado, se debería coger al toro por los cuernos. Hay que plantearse para qué sirve mantener artificialmente a las que con toda seguridad van a cerrar si no se reinventan con toda urgencia, tendrían que vincularse las ayudas que reciben a estrategias de readaptación sin escatimar recursos, incentivos y apoyos de todo tipo para que ese proceso se lleve a cabo de la forma más efectiva, más rápida y mejor posible.

En lugar de reclamar que el sector público dé pasos atrás, para que tan solo se beneficien de ello algunas grandes empresas oligopolistas, la inmensa mayoría de las empresas españolas tendrían que luchar por establecer un nuevo tipo de asociación público-privada que no pueda basarse en un Estado mínimo, por un lado, y en un oligopolio empresarial todopoderoso, por otro. El mejor clima para los negocios y el desarrollo de la actividad empresarial es el que fomenta el poder adquisitivo y no el que lo destruye, el que impulsa de verdad la competencia y combate la concentración del poder sobre el mercado, el que proporciona financiación sin crear empresas y hogares esclavos de la deuda, el que garantiza que el Estado proporcione los recursos y bienes públicos que los mercados no pueden proveer, y el que destina recursos suficientes para hacer frente a la incertidumbre, la excepcionalidad y la emergencia para que no solo puedan enfrentarlas con seguridad y éxito los más grandes y poderosos.

Lo que estamos viendo alrededor de la normativa que ya ha empezado a generar el gobierno para el reparto de los fondos para la reestructuración es lo mismo de siempre: toman posiciones de ventaja las grandes empresas de siempre, lo que equivale a decir el gran poder económico y financiero, pero no la inmensa mayoría de las empresas españolas, las más afectadas.

Las grandes que controlan los mercados e imponen sus privilegios e

ineficiencias, no solo a los consumidores sino también al resto de las empresas, buscan la continuidad, la inercia, mantener las asimetrías e imperfección en los mercados, que no cambien el statu quo, que todo siga igual que siempre... Es decir, lo peor que puede pasarle en esta coyuntura a la gran mayoría de las empresas españolas y mucho más a las que han sido afectada en mayor medida por la pandemia.

O las empresas españolas siguen confiando en el paso que le marcan las más grandes que dominan las patronales y los foros y centros de decisión, creyendo con ingenuidad que se salvarán individualmente de la debacle que saben que se avecina para la generalidad, o hacen suya una estrategia diferente de refortalecimiento del mercado interno y de creación de nuevos tipos de negocios con la complicidad del sector público y de las clases trabajadoras y profesionales. Algo que solo puede ser posible en el marco de un nuevo contrato social que establezca nuevas condiciones de actividad y de reparto de los costes y beneficios, única forma de evitar la mediocridad o el fracaso seguro de la mayoría en la nueva era en la que ya estamos entrando.

DISCURSOS VACÍOS SOBRE INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS

Publicado en LaVozdelSur.es el 11 de enero de 2021

Uno de los mantras que más se repiten a los jóvenes y a la población en general en los últimos años es que hay que ser emprendedores y crear empresas para poder salir adelante y crear riqueza.

Yo estoy de acuerdo. Las sociedades no pueden sufrir mayor tragedia que la que hace que su población sea pasiva e incapaz de crear riqueza por sí misma. El progreso humano consiste realmente en adquirir cada día más capacidades y autonomía para satisfacer mejor las necesidades, con más eficiencia y equidad y respetando las leyes naturales.

En Andalucía tenemos mucho que aprender al respecto. Las clases adineradas han sido casi siempre rentistas, limitándose a generar riqueza a base de utilizar su fuerza o su poder para luego dedicarla al lujo, sin acrecentar el capital ni mejorar el modelo productivo. Y la sumisión y la pasividad se ha enquistado con demasiada fuerza en las clases trabajadoras, condenadas así durante siglos a la pobreza y a la falta de ilustración.

Es verdad que en los últimos decenios hemos mejorado y basta ver a nuestro alrededor cómo ya somos capaces de desarrollar muchas actividades de vanguardia en casi todos los sectores económicos. Pero es insuficiente.

Andalucía necesita más innovación, necesita que desde el primero al último de sus ciudadanos se convierta en un generador autónomo de riqueza, lo que no quiere decir que lo haga individual ni aislado, porque la riqueza auténtica y más valiosa es la que nace de la inteligencia colectiva, de la cooperación y de las redes y sinergias de todo tipo entre todas las personas y las organizaciones que creamos para obtenerla.

Por eso creo que nunca se insiste demasiado en la necesidad de convertir a cada persona en emprendedora, en fuente de nuevas ideas y de actividad productiva. Me parece perfecto que se anime a los jóvenes a que sean emprendedores y a que creen ellos mismos sus empresas pues no hay otra manera de producir los bienes y servicios que los seres humanos necesitamos para garantizarnos nuestro sustento de la mejor forma posible.

Apoyo siempre esos discursos y los traslado a mis estudiantes pero me resulta inevitable señalar que son discursos que la mayoría de las veces quedan vacíos, cuando los pronuncian quienes, teniendo en sus manos que las cosas vayan de otro modo, se empeñan en mantener el statu quo que durante decenios nos ha empobrecido.

Está bien decirle a los jóvenes que han de ser emprendedores y crear empresas pero ese discurso no va a ningún lado si no tiene en cuenta que para ello hace falta capital que, en la mayoría de las ocasiones, no está a su disposición.

Si queremos que nuestros jóvenes (y también los más mayores) creen empresas debemos insistirle en lo imprescindible que es eso, desde luego que sí, pero también hemos de garantizar que tengan los recursos de capital necesarios para que eso sea posible. No todos los jóvenes tienen dinero en sus bolsillos, ni familias que les pueden financiar los primeros pasos.

Fomentar el emprendimiento no puede consistir sólo en decir que hay que ser emprendedores. Para que ese discurso sea efectivo debe ir acompañado de los recursos que lo hagan posible y mucho más en nuestro tiempo, cuando la banca se ha desnaturalizado y da prioridad a un tipo muy diferente de negocios.

Uno de los mayores desastres económicos de nuestro tiempo es que los bancos han dejado de ser las fuentes de financiación de la innovación de base, de los negocios que se inician con más riesgo, como es lógico que ocurra cuando se trata del emprendizaje que hacen personas que se inician en el complicado mundo de la empresa.

Si de verdad se quiere que en Andalucía avance la creación de nuevas empresas, más innovadoras y más sólidas, se debería disponer de una banca especializada en ese tipo de actividad y que esté en condiciones de asumir el riesgo que conlleva, algo que hoy día no puede hacer la privada porque ha adquirido una escala sistémica que la hace materialmente incompatible con lo pequeño, lo

incierto y más arriesgado.

Andalucía debería disponer de un sistema financiero de servicio público dedicado específicamente a financiar la innovación inicial y el emprendimiento, la creación de nuevos negocios por quienes no disponen inicialmente de suficiente capital.

En lugar de hacer eso, quienes dirigieron las cajas de ahorro se dedicaron a clonar el negocio de la banca privada, financiando burbujas, pelletazos y negocios fáciles, cuando no directamente corruptos. Ahora, en consecuencia, se necesita algo nuevo y sin lo cual es imposible que Andalucía levante cabeza.

Pero para emprender y crear empresas tampoco basta solo con capital, por muy importante que este sea. Hacen falta valores, cultura emprendedora y ánimo innovador, algo de lo que tampoco disponemos en la medida necesaria.

Estudios muy solventes y reconocidos, como los del biólogo evolutivo Joseph Henrich, han demostrado que la innovación surge y se consolida allí donde se promueve la curiosidad, el respeto al saber y a lo extraño, el cosmopolitismo, la rendición de cuentas que obliga a juzgarse a sí mismo antes que a los demás, la humildad que permite abrazar la novedad y lo extraño y no rechazarlos, el asociacionismo civil, la responsabilidad, la tolerancia y la capacidad para el diálogo.

Oír decir políticos o dirigentes empresariales que hay que emprender para innovar y crear empresas cuando su comportamiento no refleja ninguno de estos valores, o cuando no hacen nada para promoverlos en la educación, en los medios de comunicación o en la vida diaria es una expresión lamentable de cinismo, un discurso inútil, frustrante y vacío al que hay que darle la vuelta cuanto antes para llenarlo de contenido.

LA GESTIÓN DE LAS VACUNAS COMO SÍNTOMA

Publicado en LaVozdelsur.es el 18 de enero de 2021

Hace meses que se sabía que en cualquier momento iban a estar disponibles las vacunas contra la Covid-19 y que habría que distribuir las y utilizarlas de la manera más rápida posible en millones de personas. No han aparecido de un día para otro, así que resulta completamente injustificado que cuando han llegado se carezca del operativo necesario para vacunar a la población.

Es cierto que las administraciones públicas no están diseñadas para responder con celeridad porque han de actuar sometidas a procedimientos y protocolos estrictos que garanticen la transparencia, la equidad y el control previo y posterior de sus decisiones. Pero, justamente por eso, deben garantizar que existan siempre recursos extraordinarios dispuestos para hacer frente a los casos excepcionales que pueden darse. Y los gobernantes son quienes tienen la responsabilidad de que así sea.

Ante la Covid-19 estamos sufriendo las consecuencias de dos graves circunstancias que han contravenido esa prevención inexcusable.

La primera es que llevamos años debilitando los servicios públicos que resultan imprescindibles ante emergencias como las que estamos viviendo, desde los sanitarios, a los de cuidados pasando por los de seguridad o incluso por los servicios de extinción de incendios y salvamentos, los populares bomberos que en decenas de ciudades han tenido que movilizarse en los últimos años para reclamar recursos que les permitan llevar a cabo con eficacia y dignidad su trabajo.

Dedicamos miles de millones a los ejércitos para disponer de aviones, tanques o barcos de guerra que prácticamente no se usan sino en maniobras mientras

que al mismo tiempo se escatima mucho menos dinero para dotar de medios a los servicios que no han dejado ni un solo día de enfrentarse a peligros reales que nos cuestan miles de muertes, y muchas más en una pandemia. Una alteración criminal de las prioridades sobre la que la ciudadanía no reflexiona porque si lo hiciera no tardaría mucho en levantarse contra ella, al darse cuenta de que su dinero se dedica a beneficiar tan solo a unas pocas grandes empresas y grupos financieros y a los políticos sin escrúpulos que se enriquecen a su costa.

La segunda circunstancia tiene que ver con la forma en que se ejerce hoy día la representación política y el gobierno de los pueblos, incluso en las democracias más avanzadas. Los aparatos de los partidos políticos están copados por profesionales de la política, cuya formación, capacidades y conocimientos tienen que ver con el manejo de los resortes del poder pero no con la gestión de los asuntos diarios de la vida de las gentes, de las ciudades, de la economía, la ciencia o de la vida social en general. Lo diré de una manera más clara: salvando, eso sí, muchas excepciones que son valiosísimas, lo normal es que nuestros gobernantes o legisladores sean personas de muy poca experiencia de gestión porque no suelen tener ni la más mínima experiencia de actividad profesional.

La desastrosa gestión de las vacunas en Andalucía y en otros tantos lugares tiene que ver con esa incompetencia manifiesta de nuestros políticos. No se puede entender de otro modo que no se haya previsto la instalación de centros de vacunación, la contratación de personal, incluso voluntario, para poder ponerlas durante 24 horas, incluso sin necesidad de bajarse del coche, como en algunos lugares de Estados Unidos.

A esas dos circunstancias en Andalucía tenemos que añadir una sospecha adicional. Como se sabe, el gobierno de la Junta de Andalucía ha otorgado sin concurso previo al laboratorio Bidafarma, donde trabaja la esposa del presidente, la gestión del almacenamiento, la custodia y el transporte de las dosis de vacunas en nuestra comunidad. Imagino que el Parlamento tomará medidas cuando pueda ser para dilucidar si esa empresa y el propio gobierno al decidirlo tiene también otro tipo de responsabilidad, más grave aún, en la mala gestión que se viene haciendo de una vacunación que se nos está diciendo continuamente que es imprescindible para acabar cuanto antes con la pandemia y con los daños catastróficos que está produciendo sobre la salud y el patrimonio de miles de personas y empresas.

Es mentira que la continua privatización de los servicios públicos esté

proporcionando más eficacia y menos costes a la sociedad. La pandemia está dejando esto bien claro que es al revés. Y la mala gestión de las vacunas, en concreto, es el síntoma evidente de que la suma de incompetencia, corrupción y sometimiento al interés de las grandes empresas es una combinación más letal que el peor de los virus que puedan atacarnos.

DONDE DIJE DIGO, DIGO DEUDA

Publicado en Público.es el 22 de enero de 2021

En los últimos años, la economía dominante ha venido imponiendo algunos dogmas que no tenían la más mínima evidencia empírica tras ellos pero que, eso sí, permitían justificar políticas económicas que han producido la concentración del ingreso y la riqueza quizá más grande de la historia.

La mejor prueba de su falsedad la proporcionan sus propios defensores que no han dudado en saltárselos a la torera cuando les ha interesado hacer lo contrario de lo que pregonaban para defender los intereses del gran poder económico.

Los economistas y políticos neoliberales han asegurado en las últimas décadas que todo incremento del déficit público era negativo y perjudicial para la economía. Incluso elaboraron una teoría, la llamada del crowding out, que sostenía que hay que frenar el gasto público, incluso en inversión, porque la pública expulsa a la privada, frenando así la generación de actividad y el crecimiento económico. Una teoría, como tantas otras neoliberales, que sólo se ha podido comprobar que sea cierta si se dan circunstancias muy concretas y puntuales, pero nunca con la generalidad suficiente como para poder afirmar que es una auténtica teoría o proposición científica.

Lo curioso del caso, como decía, es que sus propios defensores han dejado de lado esa supuesta verdad para defender que los déficits públicos son necesarios si lo se trataba de salvar sus intereses. El primero en demostrar esa doble moral fue Ronald Reagan que gobernaba diciendo que había que reducir al Estado a la mínima expresión pero que terminó su mandato con un déficit público récord. Se decía entonces que practicaba keynesianismo reaccionario porque, en realidad, no había renunciado a la intervención y al gasto público sino que los había dedicado a incrementar el armamentismo y las ayudas a grandes

empresas reduciendo al mismo tiempo los impuestos a éstas últimas y a las grandes fortunas.

Eso mismo hicieron más tarde otros muchos gobiernos que se llamaban liberales. Por ejemplo, cuando estalló la crisis de las hipotecas basura o en los últimos meses, cuando los economistas liberales, las grandes empresas, los organismos internacionales más ortodoxos y los financieros, vuelven a reclamar que los gobiernos gasten lo que haga falta sin importar el nivel que pueda alcanzar la deuda pública o privada.

Ahora, mientras que casi todos los informes coinciden en que la Covid-19 producirá el mayor incremento de deuda pública de la historia, quienes han estado diciendo que incluso sus ligeros incrementos eran fatales no solo no ponen límites a su crecimiento sino que reclaman que no se detenga para salvar a las economías.

Otro de los mitos a los que se le da la vuelta cuando interesa es el que afirma que la creación de dinero por los bancos centrales siempre produce subida de precios, por lo que hay que evitar que los bancos centrales financien a los gobiernos. Un verdadero mito porque los datos no pueden ser más elocuentes: eso solo ocurriría si el dinero que crean va a los bancos comerciales, si estos lo prestan, si quienes lo reciben los gastan en su totalidad y si cuando van a gastarlo no hay oferta suficiente de bienes y servicios. Una serie de circunstancias que la experiencia demuestra que no se da necesariamente. Tanto en la crisis de 2007-2008 como en la actual, hemos podido comprobar que el incremento espectacular del dinero creado por los bancos centrales (en seis meses de 2008 la Reserva Federal creó tanto como en los últimos sesenta años) no sólo no aumentó los precios sino que éstos incluso han disminuido en algún momento.

En realidad, los neoliberales establecieron el principio (falso) de que los bancos centrales no deben financiar a los gobiernos diciendo que eso genera inflación para dificultar así la financiación del gasto público del bienestar social, pero justifican que lo hagan, incluso en magnitudes muchísimo más elevadas como ahora, porque les interesa que el gasto público se dedique a salvar a los bancos y a las grandes empresas y fortunas.

La teoría económica de los neoliberales es de quita y pon, como un metro de goma que permitiera medir siempre la distancia que a uno le convenga. Una misma acción del gobierno se rechaza como negativa si ayuda a los débiles y se

defiende como imprescindible si beneficia a los más ricos y poderosos.

Lo cierto es que, tanto el incremento desorbitado del gasto público que ahora se reclama y justifica como la intervención masiva de los bancos centrales, tienen efectos muy negativos y costes muy grandes por la forma en que se financia y realiza: aumentando la deuda sin tomar medidas para que esta sea sostenible y para que sus costes futuros se repartan con equidad. Algo que es normal porque la historia muestra que los ricos, a diferencia de los más pobres, son quienes nunca pagan por completo sus deudas o quienes siempre disfrutan de mejores condiciones para hacerlo.

El incremento del gasto público en estos momentos de pandemia es obligado (como en realidad también lo es para financiar la vida y el bienestar de los seres humanos en su totalidad) y, en consecuencia, es inevitable y necesario que aumente la deuda. Y no sólo la pública sino también la de muchas empresas que entran en una especie de paréntesis por el cierre o disminución de tantas actividades. Pero una cosa es que eso sea inevitable y otra que el incremento de la deuda se genere de la forma en que se está generando, como un negocio más de la banca, de los grandes fondos de inversión y empresas y de las mayores fortunas del mundo. La financiación necesaria para salvar la vida de las personas y el patrimonio y la actividad de millones de empresas no puede seguir siendo la fuente inagotable de enriquecimiento de quienes ya lo tienen caso todo.

Los datos son elocuentes: la deuda mundial es casi 2,8 veces mayor que la cantidad de dinero que hay en el mundo, materialmente impagable por tanto. Y el 65% de los 9,86 billones de euros que aumentó la deuda pública en la eurozona de 1995 a 2019 corresponden a intereses bancarios. Una sinrazón a la que hay que poner fin.

Los neoliberales que ahora defienden que el aumento de la deuda es imprescindible y que no debemos preocuparnos porque se produzca para salvar a las economías están volviendo a engañar a la gente. Tal y como se está generando esa deuda y en las condiciones que (como siempre) van a imponer para pagarla lo que se está creando es un nuevo yugo, una mayor esclavitud que imposibilitará el progreso económico y la vida decente de los pueblos. Es la hora de someter la deuda a juicio, de acabar con ella como un negocio, de estructurarla a lo largo del tiempo para que no sea una hipoteca paralizante para los más pobres y de poner a cero la que ha sido el resultado de los privilegios, del robo y de la injusticia.

La crisis económica que produce una emergencia sanitaria se combate poniendo dinero sobre la mesa pero si no se quiere morir de la que produce la avaricia sin límite hay que evitar que el negocio de la deuda nos envenene a todos. Nunca como ahora ha sido tan cierto lo que escribía Thomas Piketty en *El capital* del siglo XXI: “Una deuda es normalmente una promesa corrompida por las matemáticas y la violencia (...) Nada es más importante en estos momentos que hacer borrón y cuenta nueva, romper con la moralidad tradicional y volver a empezar”.

INNOVAR O MORIR. EL COMPLICADO FUTURO DE LA HOSTELERÍA

Publicado en Lavozdelsur.es el 25 de enero de 2021

No hace falta insistir sobre el peso tan grande que tiene el sector hostelero en la economía andaluza. Antes de la crisis, había unos 55.000 establecimientos que aportaban más o menos el 6% de toda la producción regional y ocupaban a unas 315.000 personas. Unos porcentajes y magnitudes algo más elevadas que las del conjunto nacional, pues en este caso el sector representaba en el mismo momento un 4,7% del PIB español. Su importancia para la economía andaluza está, pues, fuera de toda duda.

Por otro lado, también es sabido que se trata del sector que ha sufrido, junto al comercio, la mayor pérdida de empleo como consecuencia de la pandemia. Aunque todavía es pronto para saber qué está sucediendo con toda precisión, se puede estimar que nuestra hostelería ha perdido en 2020 más del 60% de su facturación, la mitad del empleo y que quizá la mitad de los establecimientos hayan cerrado sus puertas, muchos de ellos quizá para siempre.

Es lógico que la patronal y los trabajadores del sector reclamen ayudas que eviten una crisis que si no se aborda con urgencia puede ocasionar un daño terrible en el futuro, la pérdida de un inmenso capital material y financiero y recursos humanos que en los últimos años habían alcanzado un nivel de cualificación, formación y calidad muy elevadas. Pero, sentado ese principio, creo que hay que ser inteligentes y tener claro que hay que acertar en el tipo de ayudas que se presten al sector hostelero si no se quiere que solo sirvan para crear bares y restaurantes zombis, endeudados hasta las cejas y condenados a morir, algo más tarde, pero con toda seguridad.

Lo primero que hay que saber es que el interés principal del sector debería ser que se acabe cuanto antes con la pandemia. Los estudios prospectivos que se

vienen realizando indican claramente que los factores que más peligrosamente pueden afectarle son más potentes y dañinos a medida que aumenta el número de muertes y cuanto más cerca percibe la gente el peligro que le supone la pandemia.

En segundo lugar, se debería huir de planteamientos simplistas. Ni se trata de defender a capa y espada que el sector se mantenga abierto a toda costa y sea cual sea la evolución de la pandemia, ni está fundamentado que lo que haya que hacer sea cerrarlo a cal y canto. Una investigación publicada el pasado mes de noviembre en la revistas Nature² demuestra que hay que analizar con detalle los casos y atinar, porque se puede conseguir una disminución muy alta en los contagios simplemente graduando las horas de apertura y el porcentaje de utilización de los espacios considerados superpropagadores: “restringir la ocupación máxima en cada punto de interés es más efectivo que reducir uniformemente la movilidad”.

En tercer lugar, no se puede olvidar que, se quiera o no, la pandemia va a cambiar el mundo, los modos de producir, de consumir y de relacionarse y vivir. Y será inevitable que eso afecte también y muy directamente a la hostelería, en cualquiera de sus diferentes actividades. No nos engañemos, ayudar a que se mantengan vivos los establecimientos sin incentivar y ayudar a que se adapten a los cambios que vienen es tirar el dinero.

La hostelería post-pandémica será muy diferente a la que hemos conocido. Numerosos estudios están avanzando las tendencias que vienen y que, con toda seguridad, se van a consolidar en un periodo de tiempo bastante breve. Entre otras:

- Modificación de los espacios físicos pues es muy posible que servicios como los bufés, las mesas y menú comunes y, por supuesto, las tradicionales barras, desaparezcan para siempre.
- Generalización de los servicios sin contacto, lo que obligará a utilizar nuevas tecnologías dentro y fuera de los establecimientos y todo tipo de plataformas de distribución, lo que producirá un notable incremento de la productividad

² Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W. et al. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87 (2021). En bit.ly/3nCN5FP

que obligará a una nueva utilización de la fuerza de trabajo.

- Necesidad de mucha mayor creatividad e innovación para hacer frente al cambio en los hábitos de consumo y alimentación, a la necesidad de ofrecer nuevos servicios y menús y a la mayor demanda de seguridad, limpieza y transparencia que reclamará la clientela y la nueva regulación administrativa que habrá que imponer tras la pandemia para prevenir otras nuevas.

- Consolidación de la oferta de “desperdicio cero” e incluso, por equiparación con lo ocurrido en otras industrias, de las formas de producir “just-in-time”, es decir, justo a tiempo, elaborada muy poco antes de que se use, solo en la cantidad necesaria y de forma personalizada.

- Todo lo anterior hará imprescindible establecer un nuevo tipo de relación de las empresas hosteleras con su clientela: más personal, estrecho, dependiente de su imagen de marca, del servicio específico que ofrezcan y de su ajuste con los nuevos patrones de consumo que empiezan a consolidarse.

- Generación de valor mediante sinergias, formación de redes y colaboración entre empresas que permitan incluso compartir clientelas y combinar marcas.

- Predominio y puesta en valor, en mucha mayor medida que ahora, del aprovisionamiento de proximidad.

- La demanda de servicios hosteleros se hará, como decimos los economistas, más elástica respecto al precio, lo que quiere decir que los consumidores serán más sensibles y modificarán su cantidad demandada en mayor medida cuando varíe. Eso hará que las empresas hosteleras que no sean capaces de adaptarse en los cambios anteriores para poder ser realmente competitivas perderán la posición en el mercado y van a estar condenadas a desaparecer o a ocupar segmentos cada vez más reducidos y de muy escasa capacidad para generar ingreso.

En Andalucía, como en España en general, estamos acostumbrados a que el principio que guíe la concesión de ayudas sea “démela usted que yo sé mejor que nadie cómo debo usarla”. Un principio que también vamos a tener que abandonar. Europa impondrá condiciones muy severas, unas -como siempre- por razones puramente ideológicas que ya se han mostrado equivocadas, pero otras -relativas a la eficacia con que se usan los recursos- muy necesarias. Esta vez todo va a ser diferente y solo se llevará sorpresas quien quiera llevárselas.

Si no se quiere permitir que se deteriore para siempre un sector de actividad económica tan importante para Andalucía lo que hay que reclamar es que las medidas políticas no sean improvisadas ni una mera respuesta a intereses cortoplacistas, sino basadas en estudios rigurosos de la situación, que se orienten principalmente a acabar cuanto antes con la pandemia y, por supuesto, ayudas suficientes y urgentes pero que no vayan destinadas a mantener artificial e inútilmente la vida de las empresas sino a darles posibilidades y recursos para que se adapten a los tiempos que vienen.

LOS CULPABLES NO SON LAS FARMACÉUTICAS SINO LA COMISIÓN, EL PARLAMENTO Y LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Publicado en Público.es el 29 de enero de 2021

Voy a comenzar este artículo por lo que había pensado que fuese mi conclusión final:

- Un informe de la Cámara Internacional de Comercio³ estima que si los países continúan aplicando un enfoque descoordinado para la distribución de vacunas y los gobiernos no garantizan el acceso de las economías en desarrollo a las vacunas COVID-19, el mundo corre el riesgo de pérdidas del PIB mundial solo en 2021 de hasta 9,2 billones de dólares.
- Dicho informe calcula que la financiación que faltaría poner para proporcionar una vacuna a toda la población del mundo que la necesita sería de unos 27.200 millones de dólares. Es decir, 338 veces menos del daño que produciría no hacerlo.
- Por cada uno de los 27.200 millones de dólares necesarios, las economías podrían recibir un retorno de 166 dólares.
- Esos 27.200 millones de dólares representan el 3% de los 750.000 millones de euros que la Unión Europea tiene previsto dedicar a combatir la pandemia y sus efectos económicos.

³ Cem Çakmaklı, Selva Demiralp, Sebnem Kalemli-Ozcan, Sevcin Yeşiltaş, Muhammed A. Yıldırım. The economic case for global vaccination: An Epidemiological Model with International Production Networks. En bit.ly/3ruInLn

A la vista de estos datos, que la Comisión Europea se empeñe en mantener la estrategia de mercado que está siguiendo, que el Parlamento Europeo no se levante y reclame sensatez y que los gobiernos sigan poniendo en peligro a su población y arruinando a sus economías a mí no parece que sea insensato, sino criminal. Y ahora, explicaré por qué me lo parece.

El proceso de vacunación está siendo un desastre en la Unión Europea y la Comisión se empeña ahora en hacernos creer que la culpa es de un laboratorio que incumple los contratos.

No voy a defender aquí a AstraZéneca, cuya historia está plagada de fraudes, incumplimientos y malas prácticas asociadas a su posición cuasi monopolista en los mercados⁴. **Error! Bookmark not defined.** Solo quiero señalar que, a mi juicio, los responsables del desastre en el que se hallan los países europeos no son los laboratorios sino las instituciones europeas que han planteado mal, desde el principio, la lucha contra una pandemia que va a terminar provocando, como se sabía que iba a ocurrir, la crisis económica más grave de la historia contemporánea.

La Unión Europea en su conjunto no ha sabido o no ha querido asumir que la pandemia de la Covid-19 es un problema mundial y que como tal debería haberse enfrentado. Se ha sumado al “sálvese quien pueda” de los países más ricos, en lugar de entender que una emergencia planetaria como la que vivimos requiere medidas de cooperación global y que solo con eficacia, cooperación, solidaridad y equidad se puede combatir realmente a un virus que no entiende de fronteras.

La Unión Europea ha actuado desde el inicio de la pandemia anteponiendo los intereses financieros a los sanitarios y permitiendo que la respuesta viniera de empresas que, legítimamente, se deben a sus accionistas y al cumplimiento de sus objetivos comerciales. Tratando equivocadamente de ahorrar recursos, la Comisión Europea se hizo cargo del aprovisionamiento de las vacunas y ahí ha cometido también errores garrafales que al final provocarán despilfarro, retraso en la respuesta sanitaria y mayores costes en vidas y en dinero a todas las economías europeas. Aunque, en realidad, ni siquiera se respetó ese principio y se dejó que grandes países, como Alemania, mantuvieran estrategias particulares de compra. No se supo gestionar la adopción de acuerdos con celeridad y eficacia y su burocracia retrasó la aprobación y la compra de las vacunas. Sin

llegar a los 450 millones de habitantes, los propios responsables de la Comisión afirman haber confirmado la compra de unas 2.300 millones de dosis y, sin embargo, ahora no hay disponibles para seguir con el proceso, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

A la Unión Europea, como a otros pocos países ricos, se le ha llenado el ojo antes que la tripa y ahora resulta que solo diez de ellos disponen del 75% de la producción de las vacunas. Un completo sinsentido que dará lugar a que la pandemia y sus tremendos efectos económicos se sigan extendiendo.

La Unión Europea ha procedido con oscurantismo a la hora de contratar. Salvo en un solo caso, no se han hecho públicos los contratos a pesar de suscribirlos con dinero público; y solo por error o filtraciones se saben los precios de las vacunas o que se ha renunciado a exigir responsabilidad a las empresas. Una auténtica barbaridad cuando, al mismo tiempo, se ha permitido que el proceso de obtención de las vacunas haya sido irregular y en muchas ocasiones dictado por los intereses financieros de los laboratorios.

Se ha tomado el pelo a la ciudadanía, como hizo la comisaria de Salud en el Parlamento Europeo cuando afirmó que “la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado”⁴. Una mentira vergonzosa porque el mercado en el que se producen y distribuyen las vacunas contra la Covid-19 es justamente lo contrario, muy poco competitivo. Es, en realidad, oligopolista e incluso monopolista en algunos casos o desde ciertos puntos de vista.

Por tanto, lo inteligente, lo razonable, lo más justo, lo incluso menos costoso y, por supuesto, lo más seguro para la vida de las personas, hubiera sido corregir a ese mercado no competitivo, domeñarlo, someter a las fuerzas que no actúan con la auténtica competencia que hace eficientes a los mercados, y no aceptar las condiciones ineficientes y peligrosas para la salud que imponen quienes se están saltando a la torera las leyes que se supone que deben guiar el funcionamiento de los mercados para que estos funcionen adecuadamente.

Las autoridades de la Unión Europea ha dado por bueno que empresas como Pfizer vayan a tener unos márgenes de beneficio de entre el 60% y el 80% con

⁴ Guillermo D. Olmo. Vacunas contra el coronavirus: a qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas. En [bbc.in/34UEzLP](https://www.bbc.com/es/investigacion/34UEzLP)

su vacuna⁵ y, en general, que todas ellas hagan el mayor negocio de su historia gracias a la investigación básica que han realizado instituciones públicas⁶ y con el dinero de los gobiernos que ahora no les reclaman el valor generado por sus inversiones⁷. Sencillamente hablando, es una falsedad que las vacunas contra la Covid-19 solo hayan sido posibles gracias al esfuerzo inversor de los laboratorios farmacéuticos y al monopolio que les conceden las patentes.

Como expliqué hace unos meses⁸ el régimen de propiedad y las condiciones de los mercados actuales no facilita la innovación, ni mejora la cobertura de la salud en el mundo sino que las empeora, entre otras razones, porque las empresas dedican más recursos a obtener rentabilidad financiera que a innovar: en 2017, 2018 y 2019 dedicaron 28.600 millones de dólares a recompras de acciones y 10.000 millones a I+D⁹.

Las autoridades de la Unión Europea han renunciado a considerar la solución de la pandemia, las vacunas, como lo que debería ser: un bien público al que debieran acceder de modo gratuito y equitativo todas las personas del mundo, puesto que la Covid-19 es un mal global. Por el contrario, han permitido que se conviertan en una mercancía más, impidiendo así su uso generalizado, eficiente, menos costoso, y seguro.

La Unión Europea, es decir, la Comisión que tomó decisiones ejecutivas erróneas, el Parlamento que no fue capaz de imponer principios morales y medidas políticas alternativas, y los gobiernos de todos los países que no han sabido coordinarse con eficacia, ni anteponer los intereses generales y el cuidado de la salud a los mercantiles de las grandes empresas, son los responsables de lo

⁵ Arlene Weintraub. Pfizer CEO says it's 'radical' to suggest pharma should forgo profits on COVID-19 vaccine: report. En bit.ly/327IHqO

⁶ Zain Rizvi. Leading COVID-19 Vaccine Candidates Depend on NIH Technology. En bit.ly/3nD02iZ

⁷ Zain Rizvi. How the COVID-19 Outbreak Shows the Limits of Pharma's Monopoly Model. En bit.ly/3A7DgVm

⁸ Juan Torres, La covid-19 y la propiedad de las vacunas y medicamentos. En bit.ly/3rw0TmE

⁹ Sell, S.K. What COVID-19 Reveals About Twenty-First Century Capitalism: Adversity and Opportunity. *Development* 63, 150–156 (2020). En: bit.ly/3KwHefg

que está sucediendo en Europa.

La Unión Europea ha renunciado a actuar como un motor de progreso y ha sucumbido una vez más -cuando la enfermedad y la muerte de millones de personas y una gigantesca crisis económica reclaman más que nunca una política para el bien común- a las lógicas del capitalismo financiarizado, especulativo y monopolista de nuestro tiempo. Es una vergüenza y una ignominia que, en lugar de estar preocupadas por adoptar soluciones inmediatas, eficaces, seguras y justas en Europa y de contribuir a que ocurra lo mismo en el resto del mundo, las autoridades europeas no den tregua y estén más dedicadas a recordar los recortes en bienestar, pensiones, cuidados, educación o salud que deberán hacer los gobiernos cuando todo esto concluya.

La Unión Europea es responsable de lo que está sucediendo con la pandemia en Europa y en concreto del fracaso en la estrategia de vacunación porque renunció a lo que podría haber hecho y que está contemplado y asumido por la Organización Mundial de la Salud, la expropiación de las patentes cuyo monopolio afecta a la Covid-19. Como vienen solicitando cientos de autoridades, premios Nobel, científicos y organizaciones de todo tipo¹⁰, para combatir la pandemia se necesitaba la puesta en común de todas las patentes, datos, conocimientos y tecnologías disponibles en el planeta; un plan de producción y distribución global con transparencia y a precios reales; y la garantía de que la vacuna se proporcionaría gratuitamente a todas las personas y dando prioridad a quienes están más expuestas, a las más vulnerables y a los países con menos capacidad para salvar vidas.

La Unión Europea es responsable y ahora no puede culpabilizar a terceros. Se sabía que una estrategia de mercado como la que adoptaron sus dirigentes iba a tener las consecuencias que estamos sufriendo. Hasta uno de los más grandes defensores del mercado, Milton Friedman, reconocía que “por supuesto, la existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de un gobierno. Por el contrario, el gobierno es esencial como foro para determinar las reglas del juego y como árbitro para aplicar las reglas que se decidan.”

El problema de la Unión Europea es que se empeña en que esas reglas no sean otras que la que desean los oligopolios y monopolios que dominan los mercados, y los convierten en fuentes de ineficiencia, inseguridad, inmoralidad

¹⁰ Uniting behind a people's vaccine against COVID-19. En bit.ly/3Igsa2

e injusticia que matan a la gente.

ANDALUCÍA (Y ESPAÑA) EN UN MUNDO PATAS ARRIBA

Publicado en Lavozdelsur.es el 8 de febrero de 2021

Andalucía lleva tiempo en un grave proceso de divergencia con su entorno, claramente reflejado en la evolución del PIB per cápita, y del que apenas se habla.

Las razones que lo producen son variadas y sin duda complejas pero con toda seguridad tienen que ver con un hecho básico al que ya me he referido en un artículo anterior¹¹: el gran e indudable avance de los últimos cuarenta años se ha producido sin haber modificado sustancialmente los rasgos estructurales más profundos de nuestra economía, e incluso de nuestra sociedad y cultura.

En este periodo han entrado muchos recursos en Andalucía y también hemos generado los nuestros propios pero, como ha puesto de relieve en diversas ocasiones Manuel Delgado, nuestra economía sigue teniendo prácticamente las mismas fuentes de escaso valor que hace sesenta años. Con el agravante de que ahora se encuentran más concentradas en pocas manos y colonizadas por capital extranjero que, lógicamente, define su estrategia y condiciona su actividad en Andalucía en función de lo que sucede fuera de nuestra tierra, tratando de maximizar su rentabilidad a escala transnacional.

Es verdad que en todo este tiempo también ha sido una constante el tratar de salir de esa especie de maldición histórica que nos confina en la periferia pero lo cierto es que no solo no se ha sido capaz de cambiar la dirección sino que,

¹¹ Juan Torres. Andalucía necesita ir por otra vía sin poder salirse de la que lleva. En bit.ly/3GDNM9t

como decía al principio, estamos yendo hacia atrás y nos alejamos del centro de Europa e incluso del resto de las comunidades españolas.

Andalucía no se puede limitar a hacer lo que hacen los demás ni a repetir lo que hemos hecho siempre. Por decirlo de una manera gráfica, hemos de “salirnos del molde” y, sobre todo, hacer lo imposible para convertirnos en una (nueva) economía industrial. No hay otro motor con capacidad suficiente para sostener el impulso que necesitamos.

Solo la industrialización tiene la capacidad de generar riqueza suficiente y sostenible, desarrollo económico, liderazgo tecnológico y ventajas e influencia en el comercio, los mercados y la política. Reorientar la economía hacia la producción de bienes cada vez más complejos y de mayor productividad es lo único que hace posible ganar posiciones y no ir hacia atrás, tal y como le está sucediendo a Andalucía (y a España en su conjunto, respecto al resto de Europa).

Andalucía ha demostrado que tiene capacidad para atraer capital industrial pero sin haber sido capaz de generar los enlaces que permiten que el valor generado se ancle y difunda por el resto de la economía. Hemos creado enclaves pero no redes ni entramado industrial. Hemos tenido industria pero no nos hemos industrializado.

Para lograrlo se necesita atraer capital y generar ahorro, lo que supone renuncia y estar dispuesto a romper con el pasado. Andalucía necesita la generosidad de una generación para renunciar a parte de su bienestar y lo que hemos hecho ha sido sacar adelante a una y media a costa de sacrificar (al paso que vamos) a las venideras. Es decir, todo lo contrario. Y eso en gran parte ha ocurrido porque el bienestar que hemos ido alcanzando en estos últimos cuarenta años lo hemos construido a base de satisfacer intereses creados, pasados, cuando lo imprescindible para consolidar el futuro es pensar siempre en los venideros.

Andalucía tendría que ponerse patas arriba, invertir nuestras prioridades y convencerse de que es imprescindible tomar otro camino, pues el que llevamos nos conduce a tierra de nadie y cada vez con menos impulso.

El ingeniero que diseñó el revolucionario método de producción de Toyota, Taiichi Ohno, decía que “pensar al revés es la puerta al mundo de las innovaciones”. Y ese debería ser ahora el gran reto de Andalucía, de nuestros

gobernantes y de todas y todos los andaluces: pensar al revés.

Es justo lo contrario de lo que hemos venido haciendo, cuando nos hemos dedicado a tratar de emular el modelo que nos venía de fuera, sus lógicas y vectores de fuerza, lo que solo ha conseguido reforzar nuestra posición atrasada, la subordinación y lo que traerá con toda seguridad, si no cambiamos, el empeoramiento de nuestra situación a medida que vaya pasando el tiempo.

Es cierto que pensar al revés no es fácil. Lo hacen día a día miles de andaluzas y andaluces que resuelven problemas complejos y que innovan, pero es cierto que no lo hacemos habitualmente la mayoría de nosotros, y así nos va.

Ahora bien, si tratar de hacerlo en otros momentos quizá hubiera sido una tarea imposible, en la situación que estamos viviendo resulta que es un reto inexcusable para sobrevivir y salir adelante, porque la crisis en la que estamos inmersos es la que nos va a poner todo patas arriba, nos guste o no. Y no se va a poder hacer frente al nuevo mundo pensando y actuando como en el de antes.

Es nuestra gran oportunidad. Se están poniendo en cuestión el enmarcado de la globalización, las pautas de producción y consumo, la conformación de las cadenas de suministro, la organización empresarial, el uso del trabajo y de los datos, el concepto de cercanía y de distancia sobre el que se ha construido nuestra civilización, nuestra percepción de la seguridad y las fronteras entre lo establecido y lo incierto. Todas las piezas del gran damero global se van a mover y van a cambiar las reglas y preferencias de sus movimientos.

Si queremos que Andalucía no entre en un nuevo periodo de declive histórico hay que evitar que se enfrente a esta catarsis inevitable como si nada nuevo estuviera ocurriendo. Hay que ayudar a que emerjan entre nosotros proyectos rompedores, hacer que despierte la sociedad civil, dar salida y facilitar que se pongan en marcha todo tipo de ideas innovadoras, nuevas redes, hacer nuestros desafíos de nuevo cuño, complicidades del más amplio espectro, propiciar el liderazgo protagonista de las nuevas generaciones y asumir un compromiso efectivo con las que vienen.

O Andalucía y España se ponen en ebullición o languidecen para mucho tiempo.

LO QUE HUNDE A LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS Y NO MENCIONAN QUIENES DICEN DEFENDERLAS

Publicado en Público.es el 5 de febrero de 2021

Los políticos y economistas de derechas suelen autocalificarse como los grandes defensores de las empresas pero la realidad es que las políticas que vienen defendiendo y aplicando en los últimos años son destructoras de actividad económica y una amenaza para la gran mayoría de los negocios y empresas.

La realidad es que impulsan políticas que solo benefician a las grandes empresas y al sector financiero pero no a las pequeñas y a las medias, ni a las microempresas o a las de titularidad individual.

Las pymes y las microempresas tienen que ser competitivas día a día en los mercados, tratando de reducir costes de cualquier forma y soportando las condiciones que les ponen las grandes cuando son sus proveedoras o clientes. Por el contrario, las empresas poderosas que dominan los mercados operan en el mundo de la política y actúan como verdaderas rentistas, gracias a los privilegios que pueden conseguir comprando voluntades y consiguiendo que en los boletines oficiales se escriba siguiendo sus dictados. No hay una gran empresa que carezca de un departamento específico y bien dotado dirigido a lograr ese objetivo, algo que está completamente vedado para las más pequeñas.

La peor amenaza que recae sobre la inmensa mayoría de las empresas es la puesta en práctica de los dos grandes mantras de las políticas neoliberales de los últimos años y que vienen provocando el freno de la actividad económica y el incremento constante de la deuda pública y empresarial: moderar salarios y rebajar impuestos.

El primero de ellos se ha conseguido gracias a las reformas laborales que reducen el poder de negociación de los trabajadores y al desempleo y el empleo precario que generan las políticas de los últimos años. Pero, en contra de lo que se quiere hacer creer, la constante pérdida de peso de la masa salarial en el conjunto de las rentas no beneficia a todas las empresas sino solo a las más grandes.

La razón es sencilla: la inmensa mayor parte de los salarios se destinan directamente al consumo, es decir, a generar ingresos para las empresas. Las rentas del capital, por el contrario, se ahorran en su gran medida (no generan ingresos para otras empresas) y se dedican en menor proporción a ampliar capital productivo y en mayor a la inversión financiera cuanto menos rentabilidad haya en la economía real, precisamente como consecuencia de la caída en las ventas que provoca la devaluación salarial.

Además, las grandes empresas oligopolistas tienen más posibilidades de fidelizar clientelas o suelen proporcionar bienes más necesarios, de modo que venden con más independencia de la renta familiar, al contrario de lo que ocurre a las pequeñas y medianas empresas.

Es por todo ello -aunque parezca paradójico- que la estrategia de moderación salarial perjudica a la mayoría de las empresas porque supone menos ingresos para la inmensa mayoría de ellas.

El segundo mantra de los economistas y políticos de derechas es que la mejor manera de ayudar a las empresas es bajar impuestos. Algo completamente falso: piensen en lo que ocurriría si se eliminaran todos ellos pero, al mismo tiempo, no hubiera clientes a las puertas de las empresas. O, si las pequeñas de menor dimensión tuvieran que financiar con sus propios recursos el acceso a infraestructuras y, en general, al capital social de financiación pública que es imprescindible para la vida económica.

Lo que ayuda de verdad a las empresas no es que haya menos impuestos sino la promoción de la actividad económica que pone clientes en sus puertas porque genera ingresos para el consumo y la inversión.

Para colmo, detrás de la reclamación de bajada de impuestos de las derechas hay truco en contra de las empresas de menor dimensión.

Hablan mucho de reducir las cargas impositivas de las empresas pero, cuando realizan reformas fiscales, resulta que no las bajan para todas ellas sino, de

nuevo, solo para las más grandes. Y, al mismo tiempo, nunca hablan de otras cargas que suponen un lastre mucho más pesado y letal para la inmensa mayoría de las empresas.

En España, las pequeñas y medianas empresas terminan dedicando a impuestos casi tres veces más beneficios que las grandes. No porque haya tipos discriminatorios sino porque los impuestos están diseñados en beneficio de estas últimas, bien por el tipo de deducciones o desgravaciones que contemplan o porque pueden disponer de mejores equipos contables y de costosas asesorías para evitar pagarlos.

La elusión fiscal de las grandes empresas y grupos empresariales españoles (unos 350.000 millones de euros de sus dividendos y plusvalías no tributan en el impuesto de sociedades, según los técnicos del Ministerio de Hacienda¹²) es, en realidad, uno de los “impuestos invisibles” que soportan las pequeñas y medianas empresas y de los que nunca hablan quienes dicen que quieren rebajar la carga que soportan.

Tampoco hablan de otras cargas que frenan su actividad como directa consecuencia de los privilegios que, por el contrario, conceden día a día a las grandes empresas.

Uno de ellos es el constante incumplimiento de la ley por parte de estas últimas a la hora de realizar los pagos a proveedores, lo que supone un coste extra para las pequeñas y medianas empresas. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las grandes empresas del IBEX tuvieron un plazo medio de pago a proveedores de 183 días (123 más del legal) en el primer semestre de 2020.

Según esta plataforma, si las empresas del IBEX pagaran en plazo se inyectarían 56.488 millones de euros¹³, salvando a muchas pymes y autónomos; mientras que, al no hacerlo, se pone en riesgo de quiebra a medio millón de empresas españolas.

Si los políticos y economistas de la derecha que se proclaman liberales quieren

¹² Gestha señala que las empresas ingresan 21.000 millones al año menos. En bit.ly/33MZnVe

¹³ En bit.ly/3tD0MbO

apoyar a todas las empresas y no solo a las más grandes y rentistas deberían proponer un fuerte régimen sancionador que evite estos retardos.

Otro de estos “impuestos invisibles” que recaen sobre las pequeñas y medianas empresas es el de la dificultad que tienen (por no decir que práctica imposibilidad) para acceder a la contratación pública, a pesar de lo que estableció la ley de 2018. Si se quisiera ayudarlas de verdad, también se avanzaría mucho más en este aspecto, abriendo vías de acceso privilegiado no para las grandes sino para las más pequeñas y medianas de nuestras empresas.

Se podrían señalar otras cargas de este tipo, en forma de discriminaciones bien directas o como consecuencia de tratar igual a las desiguales, que suponen un lastre incluso peor que los impuestos para el 99% de las empresas que generan el 54% del empleo y el 63% del valor añadido bruto de nuestra economía. Entre otros, los topes máximos de las cotizaciones sociales que benefician a las más grandes, en las que suelen estar los niveles salariales superiores; el alto coste de los suministros a causa de la estructura oligopolista de los mercados que no se quiere corregir; o las dificultades de acceso a la financiación especializada para el tipo de negocio que suelen llevar a cabo.

Es cierto que la gran mayoría de las empresas españolas es de pequeña o mediana dimensión y que las economías más fuertes son las que tienen grandes empresas pero es completamente irreal pensar que todas las economías pueden ser potencias mundiales y grandes o multinacionales la mayoría de las empresas.

Decir que los problemas de las pequeñas y medianas empresas españolas se deben a que son de pequeña o mediana dimensión es un absurdo que oculta la realidad poco competitiva de nuestros mercados, su concentración ineficiente y costosa y las políticas de privilegios hacia las grandes que se vienen realizando.

La estrategia adecuada es la de convertir a las pymes españolas e incluso a las microempresas o a los propios trabajadores autónomos (a los reales, no a los falsos) en fuentes de valor, promoviendo cooperación y sinergias, redes, mercados auténticamente competitivos, y proporcionándoles las normas y el medio ambiente que les permita innovar en un mercado interno potente, vertebrado y autosostenido.

Los políticos y los economistas que diseñan las políticas económicas dominantes en los últimos años no defienden a las empresas sino a un capitalismo oligopólico, financiarizado y volcado en la especulación y en la

extracción de rentas mediante la ocupación del poder político que es, en realidad, el gran enemigo de las que realmente son eficientes y productivas y, sobre todo, de las de pequeña y mediana dimensión.

LA DESFACHATEZ DE CHRISTINE LAGARDE Y DE LUIS DE GUINDOS CUANDO HABLAN DE DEUDA PÚBLICA

Publicado en Público.es el 7 de febrero de 2021

Un grupo de unos 100 economistas acabamos de subscribir una propuesta de reestructuración de la deuda pública que está en manos del Banco Central Europeo¹⁴. La sometemos a discusión presentando las razones que nos hacen creer que es razonable, justa, legítima y legal aunque, a pesar de ello, no nos sorprende que algunos medios la presenten como una entelequia e incluso que desprecien a quienes la presentamos.

Lo chocante, sin embargo, es que altos funcionarios y autoridades entren en el debate limitándose a descalificar la propuesta sin aportar ningún tipo de razón, tal y como ha ocurrido con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos.

Lagarde ha sido muy directa y contundente, hasta el punto de que el diario El Mundo afirmaba que había “abroncado” a quienes realizamos la propuesta. Concretamente, la presidenta del Banco Central Europeo afirmó: “si la energía

¹⁴ Thomas Piketty, Cristina Narbona, Nacho Álvarez y Steve Keen. Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos. En bit.ly/3A9xO4l

que se gasta en pedir la cancelación de la deuda por parte del BCE se dedicara a un debate sobre el uso de esta deuda, ¡sería mucho más útil!”.

Es una declaración triplemente desafortunada. Una auténtica desfachatez.

En primer lugar, porque Christine Lagarde fue la responsable de la economía y las finanzas francesas en el periodo (2007-2011) en que más creció la deuda pública de ese país desde el final de la segunda guerra mundial: en sus cuatro años de gobierno subió lo mismo (23,3 puntos porcentuales del PIB) que en los quince anteriores. ¿Cómo se atreve Christine Lagarde a dar lecciones sobre control del gasto público a los demás?

En segundo lugar, es también vergonzoso que sea la presidenta del Banco Central Europeo quien responsabilice a los demás del incremento del gasto público sabiendo que este justamente se disparó porque esa institución fue incapaz de desempeñar correctamente la función que tiene encomendada: la supervisión del sistema financiero.

La falta de pericia de sus autoridades y responsables, o quién sabe si su complicidad con las entidades privadas, le impidieron detectar los fraudes, las malas prácticas y los engaños que cometieron docenas de bancos en los años anteriores a la crisis de 2007-2008 y que han costado billones de euros a los gobiernos europeos. ¿Cómo se atreve la presidenta de una institución tan torpe y corresponsable del mayor incremento de la deuda pública europea a dar lecciones a los demás sobre el origen de esta última?

En tercer lugar, las declaraciones de la responsable de la máxima autoridad financiera europea son también una desfachatez porque ocultan (puesto que es imposible que Lagarde no lo sepa) cuál es la auténtica razón que ha provocado el gran incremento de la deuda pública europea en los últimos años.

Los datos de la oficina europea de estadística, Eurostat, no dejan lugar a dudas: en 1995, los 19 países de la eurozona acumulaban 4,1 billones de euros de deuda pública y 10 billones a finales de 2019. Y ese incremento de 5,9 billones de euros ha ido de la mano del pago de 6,4 billones de euros en intereses, el 108%.

La señora Lagarde, como los demás responsables del Banco Central Europeo, lo saben perfectamente: la razón del gran e indeseable incremento de la deuda pública europea desde los años ochenta del siglo pasado se debe a la factura

añadida que se ha de pagar al haberse prohibido que el banco central financie al gobierno para que lo haga la banca privada, quien así pasó a ganar esa fabulosa cantidad de dinero en forma de intereses.

Esa es la razón, por cierto, de que una ministra de economía y finanzas como Lagarde, bajo cuyo mandato se produce el mayor endeudamiento de la historia reciente en su país, sea considerada como una gran dirigente económica y pase a ocupar sucesivos puestos de aún mayor responsabilidad. Y es que, efectivamente, lo hizo magníficamente bien: el aumento de la deuda que provocó es el gran negocio que la banca privada desea que le pongan en bandeja las autoridades políticas a su servicio, como lo es la actual presidenta del Banco Central Europeo.

Pero si las declaraciones de Lagarde son una desfachatez, no se quedan atrás las del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Por un lado, ha afirmado que la propuesta de reestructuración que proponemos es ilegal. Algo que resulta cuanto menos sorprendente cuando estamos hablando de una institución a quien el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe expresamente financiar a los gobiernos y que, sin embargo, posee en sus balances casi la tercera parte de la deuda pública europea, después de haberla comprado a su libre albedrío en los mercados.

De Guindos conoce perfectamente las condiciones (ya de por sí retorcidas) que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció para que el programa de compra de activos del Banco Central Europeo se pudiera considerar compatible con esa prohibición. Y sabe igualmente que esas condiciones no se han dado ni se dan cuando el BCE ha estado interviniendo en los últimos meses para evitar el colapso financiero en la eurozona.

¿Cómo tiene, entonces, Luis de Guindos la osadía de descalificar una propuesta diciendo que es ilegal, no solo cuando el BCE sí está actuando ilegalmente, sino cuando la propuesta de reestructuración que hemos hecho ni tan siquiera tiene por qué implicar financiación adicional, sino simplemente la conversión de deuda a más corto plazo en otra perpetua?

El segundo argumento del vicepresidente del Banco Central Europeo ("la cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto") tiene todavía menos enjundia.

Es imposible que de Guindos desconozca un hecho indiscutible: todas las crisis de deuda que ha habido a lo largo la historia sin excepción (y la pandemia de la Covid-19 va a provocar una y bien grande, sin lugar a dudas) se han resuelto con algún tipo de reestructuración o quita. Por tanto, el sentido económico y financiero que Luis de Guindos no ve en la medida que hemos propuesto es bastante obvio: proporcionar la única solución posible para detener un incremento de la deuda que, por definición, no puede ser indefinido.

Lo que se está proponiendo es una alternativa realista a la crisis de deuda que se avecina como consecuencia del incremento inevitable del gasto público ocasionado por la Covid-19. Es menos contrario a la legalidad que lo que está haciendo desde años el Banco Central Europeo. No implica un privilegio para los gobiernos, sino que los obligaría a realizar, a cambio, inversiones productivas en el contexto de políticas generales que podría supervisar el propio BCE. Es la única forma de permitir que, una vez superada la pandemia, la economía no se paralice por falta de demanda, al tener que dedicar los recursos disponibles al pago de la deuda; y, en fin, es una propuesta que evita que la pandemia de ahora la paguen las generaciones futuras.

Hay que ser conscientes, eso sí, de que la propuesta tiene dos serios inconvenientes: sustituye a la deuda (el negocio de los bancos) por la inversión productiva (el negocio de todos) como motor de la economía; y atenta contra los mitos económicos que quienes se benefician de ellos han conseguido convertir en dogmas. Es lógico, pues, que el poder financiero y sus acólitos carguen contra la propuesta, por muy rigurosa, justa y sensata que sea.

LO QUE NOS ESPERA (A ESTE PASO) CUANDO ACABE LA PANDEMIA

Publicado en Público.es el 12 de febrero de 2021

Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas neoliberales que se venían aplicando en los últimos cuarenta años. Hasta los acérrimos defensores de la privatización y los recortes de gasto social han reclamado intervención pública masiva, “cueste lo que cueste”, para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar.

Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como en la anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una segunda recesión. Pero es seguro que, una vez que pase lo peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo el neoliberalismo: la lucha para aumentar el beneficio del capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés social.

El problema con el que ahora nos vamos a encontrar unos y otros es que las condiciones para recuperar el beneficio serán muy complicadas, como también será más difícil todavía imponer políticas alternativas para lograr un mejor desempeño económico y una distribución más equitativa de la riqueza. Será así, por dos grandes razones. La primera, relacionada con las secuelas que dejará la Covid-19 sobre el conjunto de las economías y, la segunda, con las dos posibles vías para aumentar el beneficio en el capitalismo de nuestros días.

La pandemia va a dejar, al menos, cuatro grandes problemas que van a complicar cualquier tipo de estrategia económica que se quiera llevar a cabo.

1) Un incremento brutal de la deuda, tanto pública como privada. La primera supondrá un aumento de entre 20 y 50 puntos del PIB en la inmensa mayoría de las economías y el de la segunda es, de momento, incalculable.

Ese incremento obligará o bien a realizar amplios programas de reestructuración y quitas o a aplicar gigantescos recortes de gasto público. Lo primero, como es bien sabido, produce una urticaria fatal en el poder establecido porque atenta contra el fuero del capital financiero, aunque solo de esa manera se pueda salvar el huevo del capital en su conjunto. Por tanto, poner generalizadamente en cuestión el principio de que las deudas se pagan en su totalidad, como sería necesario hacer, no se va a consentir salvo que haya un movimiento internacional de gran fuerza que imponga la razón en todo el planeta. Si no se produce, veremos el mayor proceso de privatización y desmantelamiento del sector público de la historia y un recorte sin precedentes de los derechos sociales, ya de por sí mermados por el neoliberalismo. Lo cual, no solo producirá un incremento global del malestar social sino nuevas caídas de la actividad económica ocasionadas por falta de demanda efectiva.

El incremento de la deuda de las empresas, por su parte, va a producir una escalada de quiebras y una pérdida de solvencia de la banca que contribuirá a aumentar la debilidad de las economías si no se ponen en marcha programas de ayudas e inversión pública que sirvan de estímulo para la inversión privada y si no se disponen, al mismo tiempo, de nuevas y más seguras y efectivas fuentes de financiación de la actividad empresarial.

2) La pandemia va a dejar también muchos problemas en el funcionamiento de los mercados. Se resentirá la oferta porque quedarán afectados la capacidad de producción de bienes y servicios y los canales de distribución y aprovisionamiento en muchos sectores de actividad económica. Y también la demanda si ahora ocurre lo mismo que en otras grandes crisis: una mayor tendencia al ahorro por la incertidumbre generalizada y el temor al futuro.

Es muy posible que las perturbaciones en esas dos fuerzas de los mercados se traduzcan en tensiones al alza de los precios que obliguen, por una parte, a reducir los costes salariales y, por otra, en subidas de los tipos de interés. Y si fuese así, llegaría con seguridad una nueva fase de frenazo de la actividad económica y desempleo masivo.

3) Las compras masivas de títulos financieros que vienen realizando los bancos

centrales está provocando burbujas impresionantes en todas las bolsas del mundo que pueden ir estallando a medida que los programas de expansión monetaria se vayan acabando, porque tendrán que acabar antes o después. La volatilidad y el peligro de otra gran perturbación financiera son la tercera dificultad a la que se enfrentarán las economías tras la pandemia.

4) Finalmente, los efectos tan desiguales que tiene esta crisis en los sectores económicos y en las diferentes economías, y la recuperación tan diferenciada que se producirá van a provocar un efecto generalizado de fragmentación y desconexión entre actividades, áreas económicas, países y grupos de población que serán muy negativos para el comercio internacional y para la economía mundial en su conjunto.

Como dije, a estas dificultades de entorno se añadirá otro problema. Para aumentar el beneficio del capital solo caben dos posibilidades en nuestro sistema económico: incrementar la productividad de los factores productivos (capital, trabajo y recursos naturales) o la explotación del trabajo, es decir, intensificar el tiempo de trabajo no pagado a los asalariados.

Dicho de una forma coloquial, la primera vía permite aumentar en mayor medida el tamaño de la tarta y de esa forma es más fácil lograr una distribución más beneficiosa para el capital con menos costes asociados porque, gracias a que hay más que repartir, los salarios también se pueden ver beneficiados. Es lo que ocurrió en los años posteriores a la segunda guerra mundial, precisamente por eso llamados los “años gloriosos del capitalismo”.

Es sabido que estamos viviendo ya una nueva revolución tecnológica que permitirá que la productividad se dispare en muchas actividades económicas gracias a la digitalización, el big data y la inteligencia artificial. Pero, para que se produzcan aumentos generalizados de la productividad en toda la economía y no sólo en empresas o sectores puntuales, es imprescindible que se registre un incremento muy grande y generalizado de la inversión. Algo que es muy difícil que se dé solo de la mano del capital privado, justamente por las circunstancias que he señalado antes y por el gran atractivo que sigue teniendo la especulación financiera, pues ofrece mayor y más rápida rentabilidad.

Sin una masiva inversión pública, viviremos aumentos espectaculares de productividad en algunos sectores, pero no de la forma generalizada en que sería necesaria para recuperar el beneficio sin empobrecer todavía más el trabajo en la mayoría de las actividades económicas.

Por lo tanto, nos enfrentamos a la posibilidad de vivir en los años venideros la fase de mayor precarización y pérdida de derechos laborales de la historia del capitalismo contemporáneo. Y no exagero, pues ya son muchas las voces que comienzan a reclamar el aumento de las horas de trabajo, el fin del descanso dominical, la sustitución del contrato laboral tradicional por el de "cero horas", para proporcionar el trabajo sólo en los momentos en que lo requiera la empresa, o incluso la creación de territorios de potestad empresarial con sus propias leyes e instituciones de gobierno, a semejanza de los que ahora conforman las administraciones públicas.

Para evitar un escenario como el que acabo de describir brevemente sería necesario permitir que los estados tengan manos libres para promover la inversión y el apoyo que permita la generalización del aumento de productividad. Para lo cual es imprescindible dar una solución al crecimiento de la deuda y reformar el funcionamiento de las administraciones públicas, para lograr que se gaste bien y para acabar con su servidumbre hacia las grandes empresas que dominan el mercado y las instituciones. Es imprescindible que se diseñen programas de ayudas a las empresas para que estas puedan aumentar su dotación de capital e innovación, rebajando su endeudamiento. Hay que evitar de una vez que el capital financiero imponga la deuda como motor de la actividad económica reformando el sistema bancario y acabando con el privilegio que le proporciona el sistema de reserva fraccionaria. Hay que asumir que los beneficios del incremento de la productividad deben distribuirse con equidad, llegando a pactos de rentas. Y, tal y como ha demostrado esta pandemia que no será la última, se deben mejorar los sistemas de gestión del riesgo, fortaleciendo los servicios públicos y los recursos comunes imprescindibles para dar respuesta a los males o problemas que nos afectan a todos por igual.

No hay razones, desgraciadamente, para ser muy optimista sobre la posibilidad de que se pongan en marcha estas vías alternativas que sirvan de contrapeso frente a la voracidad que los grandes grupos económicos y financieros han demostrado tener en las últimas décadas. Las derechas de todo el mundo tienen muy claro cuál es su papel para apoyarlos. Las izquierdas, sin embargo, carecen de proyecto común o, mejor dicho, han pasado a defender proyectos que satisfacen intereses cada día menos "sociales" y más reducidos y singulares, de tribu, cuando no puramente individuales. Han dejado a un lado lo que les dio sentido históricamente y lo único que les puede proporcionar fuerza y capacidad

de transformación: la defensa de los intereses mayoritarios, la asunción del “sentido común” de la gente corriente.

ESTAMOS TONTOS

Publicado en Público.es el 19 de febrero de 2021

Casi todo el mundo analiza la pandemia para tratar de obtener enseñanzas de lo que nos está ocurriendo y no son pocas las que nos proporciona. Sea cual sea el enfoque desde el que se analiza, los intereses que se defiendan, la ideología o los prejuicios que tengamos a la hora de interpretar lo que está ocurriendo, el nivel de nuestro conocimiento, el país en el que vivamos o los ingresos o riqueza de los que disfrutemos... cada uno de nosotros extrae conclusiones de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y con mucha más razón lo hacen también los dirigentes políticos, los responsables sanitarios, los científicos que tratan de saber lo que ocurre con el virus, los economistas que deben encontrar formas de financiar lo que se nos viene encima y de evitar que se destruyan las fuentes de ingresos de las que dependen la salud y la vida de docenas de millones de personas.

Unas personas habrán decidido que tras la enfermedad vivirán de otro modo porque dan un valor diferente a las cosas. Otras preferirán seguir igual. Habrá quien ahora defienda con más ahínco el fortalecimiento de los servicios públicos y esté dispuesto a hacerlos valer mientras que otra gente seguirá pensando que lo mejor es que cada uno sea libre para protegerse sin que los gobiernos expolien a la gente, como dicen los liberales, a base de impuestos y políticas redistributivas. Habrá empresarios que se reinventen y traten de sobrevivir a la crisis con innovación y cambios y otros que no serán capaces de entender que el mundo está cambiando de cabo a rabo....

Yo he tratado también de obtener y he obtenido conclusiones diversas sobre la pandemia y sus efectos en la economía y en la sociedad, pero últimamente tiendo a sintetizar todas ellas en una sola: estamos tontos. No de cualquier clase,

sino de los que hablaba Ramón y Cajal, "tontos entontecidos".

Pondré a continuación algunos ejemplos extraídos de la vida económica que me han hecho llegar a semejante conclusión en los últimos meses.

– Vivimos una desgracia global que afecta o puede afectar más o menos por igual a cualquier persona y a todas las naciones y sucede, además, que el comportamiento de cada una de ellas afecta al resto. Sin embargo, en lugar de establecer inmediatamente una instancia de decisión global para poder adoptar medidas coordinadas y políticas comunes, y en lugar de cooperar y poner a disposición global los recursos imprescindibles para acabar con la pandemia, lo que hacemos es actuar cada uno por un lado.

Estamos tontos cuando permitimos que cada país actúe por su cuenta contra una emergencia sanitaria global.

– Parece evidente que la única manera de salir cuanto antes de la pandemia y de comenzar a normalizar la vida social y económica es la vacunación masiva. Es obvio, pues, que se debería garantizar que su producción y distribución queden garantizadas. Sin embargo, la realidad es que apenas se puede vacunar porque no se dispone de ellas al haber dado preferencia al interés privado de la industria farmacéutica.

No estoy hablando de nacionalizar o de expropiar a las empresas que las han descubierto. Ni mucho menos. Simplemente señalo que es evidente que si los gobiernos u organismos internacionales hubieran comprado a su justo precio las licencias de las diferentes vacunas y hubieran dispuesto las inversiones y recursos necesarios para producirlas y distribuirlas masiva y coordinadamente, ahora se estaría llevando a cabo la vacunación generalizada.

Estamos tontos si nos creemos que las empresas pueden multiplicar por miles y de la noche a la mañana su escala de producción. Es decir, que podrán proporcionar a su tiempo las miles de millones de vacunas necesarias para la inmunización masiva con el ritmo y la lógica con la que, lógicamente, puede operar la empresa privada.

– Los países más avanzados y ricos están comprando varias veces más unidades de los muchos millones de vacunas que necesitan para asegurarse así la inmunización y poder recuperar cuanto antes sus economías mientras que se desentienden de su suministro a los países más pobres, a los cuales ni llegan en cantidad ahora, ni van a poder llegar hasta que no pase mucho tiempo.

Estamos tontos quienes vivimos en los países ricos si pensamos que esa estrategia puede salvar nuestras economías. Es evidente que todas ellas, sus empresas y sus inversiones, están interrelacionadas con las demás y también con las de los países empobrecidos, porque dependen de cadenas de suministros globales y de exportaciones e importaciones con el resto del mundo.

– Basta con contemplar lo que ocurre en el mundo para comprobar que quienes apoyan a los partidos que no gobiernan atacan sin piedad a los que han de tomar las decisiones contra la pandemia. Y lo curioso es que lo hacen con los mismos argumentos en todos los lugares.

Con independencia de reconocer que diferentes personas u organizaciones pueden tener distinto nivel de habilidad, cualificación y acierto, me parece que estamos tontos si creemos que los errores y limitaciones a la hora de afrontar esta pandemia dependen de la ideología de cada cual y que -en lugar de generar la mayor ayuda y complicidad posible con quien ha tenido que asumir el gobierno en una etapa como esta- lo que nos conviene es quitar a unos para poner a otros y, mientras tanto, atacar a cualquier precio y sin límites a quien gobierna para facilitar su derribo.

Estamos tontos cuando, en medio de una pandemia, permitimos que se fomenta o nosotros mismos impulsamos la polarización y al enfrentamiento civil, en lugar de ayudar y de facilitar la cooperación y la complicidad social.

– Nadie en su sano juicio pone ya en duda que esta pandemia obliga a que los gobiernos realicen todo el gasto necesario para evitar el colapso de la economía y el cierre definitivo de millones de empresas. Y es evidente que ninguno de ellos disponía de los recursos necesarios para hacerlo sin disponer de financiación ajena. Por eso estamos alcanzando ya los niveles de deuda pública y privada más elevados de la historia y a una velocidad nunca vista.

Estamos tontos cuando permitimos que la financiación de esta emergencia se convierta en una losa que paralizará las economías durante decenios al salir de la pandemia, teniendo a nuestra disposición, como tenemos, fórmulas que podrían proporcionar todos los recursos necesarios para evitarlo. No me estoy refiriendo a no pagar las deudas sino a algo más sencillo: a no generarla sin necesidad.

Estamos tontos al no recurrir a los bancos centrales que pueden proporcionar

financiación a los gobiernos (con todo el control necesario para que el gasto sea el preciso y no haya derroche ni corruptelas) sin generar deuda y cuando permitimos, en su lugar, que se aproveche una desgracia mundial para fortalecer el negocio bancario.

– Los estudios más rigurosos y el análisis de otras pandemias demuestran sin lugar a dudas que la normalización social y la recuperación de las economías se alcanza antes cuanto más pronto se imponen las restricciones a los comportamientos que propagan la pandemia y cuanto más tiempo se mantienen, hasta garantizar que se detenga por completo la propagación de los contagios.

Estamos tontos cuando decidimos que la forma de ayudar a las empresas y a la economía en general es relajar los controles y reducir los movimientos y el contacto social, es decir, alargando la duración de la pandemia y provocando que se produzcan oleadas sucesivas de contagios.

– Sabemos que muchísimas personas con empleos precarios o muy pocos ingresos no pueden dejar de acudir a sus puestos de trabajo para no perderlos aunque estén contagiados y, por tanto, que son potentes focos de difusión de la pandemia porque, además, sus empleos suelen ser los que llevan consigo mayor necesidad de contacto con otras personas.

Estamos tontos cuando nos oponemos al incremento de las ayudas a esas personas y cuando permitimos que se mantengan o aumenten ese tipo de empleos y condiciones de trabajo en medio de una pandemia.

– Me parece, en fin, que estamos tontos cuando, en lugar de hablar de temas, contradicciones y decisiones contra el sentido común como estos que he mencionado, nos dedicamos a discutir banalidades o cuestiones claramente de segundo o tercer orden, o permitimos que nuestros representantes o las autoridades lo hagan.

Veán ustedes de qué se habla en las tertulias, qué se escribe en las portadas de los periódicos, las noticias y los programas que salen en la televisión, sobre qué se debate en los parlamentos y cuáles parecen ser las prioridades de los partidos y me dicen si llevo o no razón cuando digo que estamos tontos. Tontos, además, cada día más fácilmente entontecidos.

LOS PRIVILEGIOS QUE EUROPA DIO A LAS GRANDES EMPRESAS HIPOTECAN AHORA SU POLÍTICA ENERGÉTICA

Publicado en Público.es el 26 de febrero de 2021

En el último siglo se han firmado 2.896 acuerdos internacionales de comercio e inversión¹⁵. Como analicé en estas mismas páginas hace unos meses¹⁶, todos ellos conceden a los inversores extranjeros un privilegio extraordinario: el derecho a demandar a los estados, en tribunales de arbitraje privados, para reclamar compensación si se consideran dañados por cualquier tipo de medida que tomen los gobiernos, y no solo por el dinero invertido sino también por las pérdidas de ganancias futuras.

Siempre que se suscriben este tipo de acuerdos, los gobiernos y los organismos internacionales afirman que están dirigidos a fomentar el libre comercio, a favorecer la inversión y a evitar el poder desmesurado de los gobiernos que frena el progreso económico. La realidad, sin embargo es otra muy distinta. Un buen número de estudios científicos, como el realizado por el International Institute for Sustainable Development en 2017¹⁷ demostraba que no hay evidencias empíricas que avalen esa hipótesis.

Una prueba del auténtico efecto que tienen ese tipo de acuerdos la proporciona

¹⁵ bit.ly/3Kl3mJc

¹⁶ Juan Torres. Tratados indignos en tiempos de pandemia. En bit.ly/3qD3Jar

¹⁷ IISD REPORT. Assessing the Impacts of Investment Treaties: Overview of the evidence. En bit.ly/3qDIyVD

lo que está ocurriendo con el Tratado sobre la Carta de la Energía que fue firmado en 1994 a iniciativa de las comunidades europeas.

Su objetivo formal era el de establecer y mejorar el marco jurídico para la cooperación en los asuntos energéticos fijados por la Carta Europea de la Energía y serviría como instrumento para la pomposamente llamada protección multilateral de la inversión y para proporcionar una regla general para la solución vinculante de las controversias internacionales. Lo que en realidad hay detrás de él y sus verdaderas consecuencias las estamos comprobando ahora claramente.

Desde que se firmó el acuerdo, muchas grandes empresas han invertido en fuentes de energía que han resultado ser muy dañinas para el medio ambiente, de modo que los gobiernos han tenido que establecer sin más remedio estrategias orientadas a sustituirlas lo más rápidamente posible.

Como consecuencia de estas políticas de transición energética que se van abriendo paso, las inversiones en la obtención o distribución de carbón, petróleo o gas se encuentran lógicamente amenazadas y muchas empresas han empezado a presentar demandas con los gobiernos acogiéndose a la Carta de la Energía.

En 2009, la empresa sueca Vattenfal reclamó 1.400 millones de euros al gobierno alemán por las pérdidas estimadas que le suponía la regulación más estricta de la industria del carbón y en 2011 volvió a hacerlo, reclamando una compensación que ya va por 6.100 millones de euros, al sentirse afectada por su política de eliminación gradual de la energía nuclear. Algo parecido ocurrió en 2015 cuando la compañía británica Rockhopper demandó al gobierno italiano por haberle negado una concesión para extraer petróleo en parajes turísticos de la costa del mar Adriático. En 2017, el gobierno francés elaboró un proyecto de ley para prohibir la extracción de combustible fósil a partir de 2030. Bastó una carta de un despacho de abogados advirtiendo de que el proyecto violaba el Tratado para que se cambiara el texto de la ley y, de momento, seguirá autorizándose hasta 2040. Y hace unos días, la empresa alemana RWE demandó al gobierno de Países Bajos por la pérdida de 1.400 millones de euros de "ganancias potenciales" debido a su decisión de eliminar el carbón como fuente del suministro eléctrico.

Son casos, entre otros, que todavía se pueden considerar aislados pero el problema radica en que, si la Unión Europea prosigue con su estrategia de

transición energética y de acción contra la emergencia climática, no habrá más remedio que ir eliminando el negocio de las fuentes de energía fósil, lo cual producirá inevitablemente una pérdida enorme de beneficios a muchas empresas que podrán recurrir a los tribunales privados de arbitraje. Y la cantidad de dinero que puede estar en juego es astronómica.

Según un informe de Investigate Europe publicado el pasado día 23¹⁸, la infraestructura fósil de empresas susceptible de ser protegida por la Carta de la Energía tiene un valor de 344.600 millones de dólares en la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza (8.300 millones en España). Una cantidad, como indica el informe, que equivale a más de dos años del gasto total de la Comisión Europea, incluidos todos los paquetes de ayuda de Covid-19, todos los subsidios agrícolas y los fondos estructurales. Y eso, sin contar las ganancias que las empresas dejarían de percibir en el futuro y que podrían incluir en sus demandas.

La situación es incuestionable: mientras sigan vigentes los privilegios que ella misma concedió a las grandes empresas de la energía fósil, es imposible que se pueda llevar a cabo la política de transición que se propone llevar a cabo la Unión Europea.

Esos privilegios que concede la Carta de la Energía son hoy día incompatibles con la legislación y la política europeas en materia de inversiones y de acción climática y, por supuesto, con otros tratados de defensa del medio ambiente que la Unión Europea ha suscrito en los últimos años. Incluso la existencia de tribunales de arbitraje privados para dirimir conflictos en el seno de la Unión (el 74% de las disputas planteadas son entre empresas y gobiernos europeos) es algo que se puede poner claramente en cuestión.

La Comisión Europea y el Parlamento han manifestado en varias ocasiones que el acuerdo es obsoleto e insostenible pero lo cierto es que sigue ahí. Las propuestas de reforma no podrán salir adelante porque el Tratado requiere unanimidad para tomar decisiones, con la clara intención de hacer que los privilegios sean prácticamente inalterables. Y ni siquiera salir del Tratado, como hizo Italia en 2016, es algo completamente efectivo (aunque ciertamente protege en cierta medida) porque otra barbaridad que contempla en su cláusula de extinción es la de permitir que las empresas puedan demandar a un país hasta

¹⁸ bit.ly/3FGeoW6

20 años después de haberse retirado del tratado.

La Unión Europea dice que quiere limitar la emisión de CO2, impulsar la transición hacia el uso de energías verdes y combatir el cambio climático, pero sigue protegiendo con privilegios a las empresas más contaminantes y permite que estas los defiendan en tribunales secretos y claramente viciados a su favor por intereses particulares.

Y lo que es peor: incluso en el caso, de momento complicado y remoto, de que se pudieran eludir por completo las consecuencias del Tratado sobre la Carta de la Energía para que Europa pudiera poner en marcha la acción por el clima que dice pretender ¿qué ocurre con las demás docenas de tratados y acuerdos del mismo tipo que se han suscrito hasta ahora?

Como demuestra el caso que he comentado, las autoridades de la Unión Europea y nuestros representantes en el Parlamento Europeo están engañando a la gente: ponen una vela retórica a dios -diciéndole que trabajan para el bien común- y otra inmensa al diablo -cuando conceden privilegios desorbitados a las grandes empresas para que sus intereses particulares se impongan sobre los de toda la sociedad. Es imposible servir a ambos al mismo tiempo y los dirigentes y parlamentarios europeos lo saben perfectamente.

Si de verdad quisieran defender el bien común y los intereses de la mayoría de la sociedad, el bienestar social y el futuro del planeta, pondrían fin a esta locura. Harían una revisión inmediata, con el mayor rigor y completa transparencia, de las consecuencias reales que han tenido todos los acuerdos y tratados internacionales de comercio e inversión que ha suscrito, los denunciarían y pedirían responsabilidades.

MUJERES Y ECONOMÍA ACADÉMICA: LA DISCRIMINACIÓN QUE NO CESA

Publicado en Público.es el 5 de marzo de 2021

Ahora que se acerca otro 8M vendrá bien proporcionar algunos datos e ideas sobre la discriminación que sufren las mujeres economistas en el mundo académico. Una cuestión relevante teniendo en cuenta la gran influencia que tiene este campo del conocimiento sobre la marcha de la vida económica, política y social de nuestro tiempo. Y, sobre todo, porque cada vez se oye más que no hay nada parecido a la desigualdad de género (es decir, a las diferencias entre mujeres y hombres que no se deben a su condición natural sino a prejuicios y estereotipos), que si acaso se producen esas diferencias se debe a que la productividad o las habilidades son distintas y que, además, la discriminación que pueda existir, como dicen los liberales, es más bien un incentivo para el progreso social.

Los estudios empíricos que se vienen realizando desde hace años ponen claramente de manifiesto todo lo contrario.

A) Las mujeres sí están claramente subrepresentadas en la económica académica.

Algunos estudios estiman que las mujeres solo representan el 19% de todos los titulados en Economía que hay en el mundo. Un porcentaje que es algo mayor en Estados Unidos (30%) o en los países europeos (el 40% en España). Sin embargo, el camino que han de seguir quienes desean avanzar en la carrera académica se compara con una tubería con agujeros, pues se van quedando por el camino: en Estados Unidos solo el 14% llegan a ser catedráticas y en Europa

los porcentajes son muy variados, desde el 56% de Rumania al 6% de Chequia o el 23% de España, según los datos que ofrece el estudio *Women in Economics*¹⁹.

Esa menor presencia de las mujeres se registra también en la literatura económica. Los artículos publicados por mujeres son el 11% del total en las cinco principales revistas de economía desde 1990, el 12% desde 2000 y el 14% desde 2010²⁰. Y en el Research Papers in Economics, una base de datos de publicaciones económicas, los trabajos de mujeres representan alrededor del 25%.

Además, como se demostraba en un artículo del Journal of Economic Perspectives de 2019²¹, el progreso que se había producido hace tiempo se ha estancado en los últimos veinticinco años.

B) El menor peso de las mujeres en la economía académica se produce por discriminación.

Multitud de estudios científicos que han tratado de explicar esa menor representación de las mujeres en los niveles académicos más elevados en el campo de la Economía ponen de relieve que es un fenómeno que no tiene que ver con ningún tipo de condición "natural" u objetiva sino que lo provoca la discriminación que sufren las mujeres debido a estereotipos y prejuicios asentados en la cultura masculina que predomina entre los economistas de la academia y que se manifiesta, sobre todo, a la hora de evaluarlas y seleccionarl

Incluso diversos estudios han demostrado que no son diferencias de productividad y ni siquiera la mayor dedicación de las mujeres a la vida familiar la única razón de ello, en contra de lo que pudiera pensarse o de lo que ocurre en otros campos de actividad. Aunque en estos momentos hay una manifestación de discriminación muy clara por esa razón: las mujeres están escribiendo menos investigaciones sobre la Covid-19 que los hombres, seguramente por el bloqueo que les supone atender en mayor medida que los

¹⁹ Women in European Economics. A Real-Time Monitoring Tool. En bit.ly/3FxuscE

²⁰ Erin Hengel, Eunyoung Moon. Do Top Economics Journals Hold Female-Authored Papers to Higher Standards? En bit.ly/3IeOaLR

²¹ bit.ly/3FC74un

hombres a su situación familiar²².

En el último artículo citado y en muchos otros se demuestra que las mujeres economistas son sometidas a estándares de evaluación más estrictos que los aplicados a los hombres.

Los datos son muy concluyentes al respecto y en algunos casos muy significativos.

Se ha demostrado que las mujeres han de enfrentarse a listones más altos a la hora de publicar sus artículos²³.

Un estudio de Laura Hospido y Carlos Sanz, economistas del Banco de España, demostró que las investigaciones realizadas por mujeres tienen un 6,9% menos de probabilidad de ser elegidas en conferencias o congresos que los presentados por hombres²⁴. Otro también reciente²⁵ mostraba que a las mujeres se les hace un 12% más de preguntas que a los hombres en los encuentros académicos y que, además, son más hostiles. Y una curiosa investigación sobre el lenguaje utilizado en foros de empleo de economistas²⁶, demostró en 2017 que los términos que más se utilizan cuando se trata de mujeres tienen que ver con aspectos personales y superficiales: se utilizan un 43% menos de términos académicos o profesionales y un 192% más de los relativos a su información personal o atributos físicos que cuando se habla de hombres. Y en el reciente libro de Shelly Lundberg (*Women in Economics*) se pueden encontrar bastante más

²² Noriko Amano-Patiño, Elisa Faraglia, Chryssi Giannitsarou, Zeina Hasna. Who is doing new research in the time of COVID-19? Not the female economists. En bit.ly/3GJV8bt

²³ Heather Sarsons, Klarita Gërkhani, Ernesto Reuben, and Arthur Schram. Gender Differences in Recognition for Group Work. En bit.ly/3iIMLUv; Erin Hengel. Publishing while female. Are women held to higher standards? Evidence from peer review. En bit.ly/3FF1jFN

²⁴ Laura Hospido, Carlos Sanz. Gender Gaps in the Evaluation of Research: Evidence from Submissions to Economics Conferencies. En bit.ly/3FAiDIT

²⁵ Pascaline Dupas, Alicia Sasser Modestino, Muriel Niederle, Justin Wolfers & The Seminar Dynamics Collective. Gender and the Dynamics of Economics Seminars. En bit.ly/3fxCuHZ

²⁶ Alice H. Wu. Gender Stereotyping in Academia: Evidence from Economics Job Market Rumors Forum. En bit.ly/3tGNpHt

ejemplos y datos de este tipo de discriminación.

La discriminación que sufren las mujeres economistas en la vida académica se refleja también en una gran encuesta que realizó hace poco la American Economic Association²⁷. Sus resultados no dejan lugar a dudas:

- El 75% de las mujeres economistas encuestadas dijeron no sentirse valoradas en el campo de la economía, frente al 53% de los hombres.

- El 69% afirmaron no sentir valorado su trabajo por sus colegas, frente al 43% de los hombres.

- El 48% reconocieron haberse sentido discriminadas por su sexo, frente al 3% de los hombres. Y mientras que el 45% de ellas afirmaron haber sido testigos de esa discriminación, solo el 34% de los hombres lo fueron.

- El 22% sufrieron discriminación por razones de matrimonio o cuidado familiar, frente al 4% de los hombres.

- El 37% fue discriminada en sus compensaciones económicas, frente al 11% de los hombres.

- El 48% se abstuvo en alguna ocasión de intervenir o expresar sus puntos de vista en sus instituciones y el 46% en reuniones académicas para evitar ser discriminada, frente a 24% y el 8%, respectivamente, de los hombres.

- El 48% ha evitado asistir en algún momento a actos tras las clases o eventos académicos para evitar discriminación o situaciones embarazosas, frente al 18% de los hombres.

Finalmente, también se ha demostrado que los periodistas recurren en menor medida a las mujeres economistas más conocidas cuando desean conocer la opinión de personas expertas²⁸, de modo que sus posiciones se invisibilizan aún más.

C) La subrepresentación académica y la discriminación contra las mujeres en

²⁷ bit.ly/3FEDqog

²⁸ Dan Diamond. Why Reporters Like Me Ignore Famous Female Economists. Forbes. En bit.ly/3Kk6bu5

economía sí importa.

Son muchas las razones que se podrían aducir para señalar que la situación que sumariamente he descrito tiene bastante relevancia porque la Economía es una rama del conocimiento de gran influencia social. Decía Keynes que personas prácticas que se creen exentas de cualquier influencia intelectual son, por lo general, esclavas de algún economista muerto.

El desarrollo del pensamiento y el análisis económico protagonizado casi exclusivamente por hombres durante muchísimos años y en gran medida en la actualidad, como acabamos de ver, está ligado a una representación del mundo muy específica. No es casualidad que el sujeto de referencia de la teoría económica sea un *homo oeconomicus*, el proveedor de recursos, quien se mueve en la esfera pública con libertad, racionalidad, egoísmo y buscando tan solo la máxima utilidad personal (no crea, quien no haya estudiado economía que exagero, como puede comprobarse en cualquier manual elemental).

Como bien dicen muchas mujeres economistas, costaría trabajo sostener que el ser humano se desenvuelve en la realidad de ese modo racional y coherente si se tuviera en cuenta, por ejemplo, que casi la mitad de los embarazos que se producen en el mundo son indeseados, es decir, si se tuviera un punto de vista más femenino de las cuestiones fundamentales de la vida humana.

Tampoco es casualidad que los valores de los hombres economistas sean tan marcados y diferentes a los de otros campos del conocimiento.

Como se ha podido comprobar, por ejemplo, son menos proclives a hacer donativos y obras de caridad que los de otras disciplinas²⁹; mantienen en mayor medida posiciones mucho más contrarias, por ejemplo, a dar propinas³⁰; son menos cooperativos que otros colegas en las negociaciones; y desprecian más los argumentos centrados en la búsqueda equidad en la distribución de recursos. Es anecdótico pero tiene su gracia que uno de ellos, Joel Waldfogel, publicara en 1993 un artículo, nada más y nada menos que en la *American Economic*

²⁹ Robert H. Frank, Thomas Gilovich, and Dennis T. Regan. Does Studying Economics Inhibit Cooperation? En bit.ly/3GJyCzu

³⁰ Emily Oster. An economist's guide to the unfortunate logic of tipping. En bit.ly/33J5Ss0

Review, para demostrar que los regalos de Navidad son ineficientes y que generaban 4.000 millones de dólares de pérdidas irrecuperables³¹.

El predominio de los hombres en la academia obliga lógicamente a que las mujeres que desean ascender en su carrera académica deban someterse a los criterios establecidos por ellos, a los perfiles masculinos estandarizados y estereotipados, contribuyendo así a reproducir un modo de evaluar y de promover el conocimiento que tantas veces se ha revelado como irrealista y desacertado. Es más, tiene un efecto perverso porque lo que suele ocurrir, desgraciadamente, es que la mayoría de las mujeres tienen que reforzar ese tipo de prejuicios y estereotipos para poder ascender.

En fin, la escasa y discriminada presencia de mujeres en la economía académica tiene costes no solo para ellas, sino para la sociedad en su conjunto porque frena la innovación intelectual y lleva a soslayar enfoques y temas de estudio que tendrían que estar mucho más presentes en el análisis económico. Es, por tanto, una de las circunstancias que ha provocado que la economía se haya convertido en "una verdadera desgracia", como dijo Claudia Sahm, una antigua economista de la Reserva Federal que se atrevió a denunciar el acoso sistemático y la discriminación que sufrió así como la "cultura tóxica" del mundo de la investigación económica³².

³¹ Joel Waldfogel. The Deadweight Loss of Christmas. The American Economic Review. Vol. 83, No. 5 (Dec., 1993), pp. 1328-1336

³² Claudia Sahm. Economics truly is a disgrace. En bit.ly/33uqhBo

LA CREACIÓN ARTIFICIAL DE LA ESCASEZ: EL CASO DE LAS VACUNAS

Publicado en Público.es el 12 de marzo de 2021

El desaparecido economista y catedrático de la Universidad de Salamanca David Anisi escribió en 1995 un libro titulado Creadores de escasez. Del bienestar al miedo (Alianza Editorial). En él explicaba que, en contra de lo que se creía, la crisis que se produjo a partir de los años 70 no había sido lo que obligó a cuestionar el Estado de Bienestar, sino que fue al revés: la puesta en cuestión de este último originó la crisis.

Como explicaba Anisi, "había llegado el momento de disciplinar a los trabajadores. Y así se hizo".

Para ello se recurrió a la forma siempre más efectiva, generar el desempleo. Quien carece de ingresos y medios de vida no tiene más remedio que aceptar lo que sea para salir adelante y se convierte así en un ser personal, mental y socialmente frágil, fácilmente manipulable y disciplinado.

Para provocar deliberadamente el desempleo que disciplinara a las clases trabajadoras se aplicaron políticas basadas en la creación artificial de escasez, aumentando los tipos de interés (lo que frenaba la inversión productiva pero al mismo enriquecía así a los poseedores del dinero), recortando salarios (lo que reducía el consumo pero aumentaba los beneficios de las grandes empresas que tienen mercados cautivos) y provocando déficits públicos y mucha deuda (ralentizando así la economía pero aumentando el negocio del capital financiero).

El efecto de esas políticas es el mismo que tiene el ir pisando el freno constantemente en un vehículo: disminuye la velocidad de cruce, se gasta mucha más energía y se deteriora el conjunto de la maquinaria. En una economía, la consecuencia es que disminuye la tasa de crecimiento de la actividad económica y aumenta el desempleo. Dos efectos que se agravan cuando todo eso ocurre, como ocurrió en los años ochenta y noventa del siglo pasado, en medio de una revolución tecnológica. Cuando esta se produce, aumenta la productividad y si este aumento no va acompañado de una reducción de la jornada laboral y de políticas expansivas del gasto, el efecto del frenazo es mucho mayor.

Eso fue lo que vienen provocando las políticas neoliberales y por eso decimos que crean escasez artificialmente. Destrozan a toda la economía y disminuyen la provisión de bienes y servicios pero benefician mucho, como he dicho, a los propietarios del capital financiero (que se enriquecen más cuanto mayor es la deuda) y a las grandes empresas que dominan los mercados y tienen clientes cautivos o una masa de liquidez muy grande con la que se enriquecen en los mercados financieros.

Puede parecer que esta tesis que acabo de exponer es demasiado perversa como para ser verdad pero, si no la creen, lean lo que escribió en la página 183 de su libro *El final de la edad dorada* (Ed. Taurus 1996) quien había sido un poderoso ministro de Economía de Felipe González, Carlos Solchaga: "La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública". No se puede reconocer más explícita y claramente.

Efectivamente, el capitalismo de nuestros días es un creador artificial de escasez y una manifestación sangrante de ello la estamos contemplando en estos momentos en el caso de las vacunas.

Cuando se extendió la pandemia, las autoridades mundiales reconocieron lo elemental y lógico: su remedio no podía ser otro que una vacunación masiva y muy rápida de la mayor parte de la población mundial.

La presidenta de la Comisión Europea reclamó que las vacunas se convirtieran en un bien público porque "la Unión Europea había invertido muchos miles de millones en desarrollar las primeras". El Fondo Monetario Internacional pedía en su informe de enero pasado una "distribución universal de vacunas ... a

precios asequibles para todos".

Sin embargo, no es eso lo que está ocurriendo, sino todo lo contrario: los gobiernos de los países ricos se niegan a que las vacunas se puedan producir y distribuir masivamente y a precios asequibles en todos los países del mundo, como sería imprescindible para acabar con la pandemia. Se sigue creando escasez aunque ahora no sea para disciplinar a las clases trabajadoras sino para salvaguardar el beneficio y el poder de las grandes empresas farmacéuticas, de cuya naturaleza y estrategia escribía hace unos días el profesor Vicenç Navarro³³.

Para desarrollar vacunas de distribución universal, como pide el FMI, es preciso la colaboración de científicos y productores de todo el planeta pero eso solo es posible si se ponen a disposición de todos ellos el conocimiento y las técnicas que las hacen posible, algo que es imposible mientras no se suspendan las patentes y derechos de propiedad intelectual.

Es lo que están pidiendo desde hace meses la gran mayoría de países del, líderes políticos, organizaciones de todo tipo, centros de investigación, personalidades, dirigentes de iglesias... Y es lo que desea la inmensa mayoría de la población allí donde se le ha preguntado (el 73% en el Reino Unido).

Pero, en contra de esa opinión mayoritaria, los gobiernos de los países ricos (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido, Brasil, Canadá, Noruega y algunos pocos más) se oponen constantemente a ello.

Con tal de salvaguardar los intereses comerciales de las grandes empresas farmacéuticas que producen las vacunas (como igual podría decirse de otros bienes, dispositivos o instrumentos de diagnóstico que están siendo imprescindibles en la pandemia), se está dando lugar a una carencia generalizada de vacunas, sencillamente, porque no se está aprovechando toda la capacidad potencial de fabricación de vacunas. Los datos son inapelables:

– Solo se está utilizando un 43% de la capacidad que hay en el mundo para

³³ Vicenç Navarro. Por qué la Unión Europea tiene un grave problema de falta de vacunas. En bit.ly/33NxTPi

producir las vacunas ya aprobadas³⁴.

– Las tres fabricantes más grandes de vacunas solo están produciendo para el 1,5% de la población mundial, un volumen muy por debajo de su capacidad potencial al no tener acceso a las licencias³⁵.

– A pesar de la escasez, cuando algunos fabricantes se ofrecen a producirlas no reciben respuesta de las empresas que, con el beneplácito de los gobiernos, dominan el mercado. Eso ha pasado con la danesa Bavarian Nordic que podría fabricar casi 250 millones de vacunas³⁶.

– Algo parecido ocurre en países como India: una de sus fabricantes está produciendo millones de vacunas pero hay al menos otras veinte fábricas, y otras muchas en todo el mundo, que podrían estar produciéndolas si tuvieran acceso a las licencias³⁷.

La consecuencia de todo esto es doblemente absurda y me atrevería a decir que criminal.

En primer lugar, miles de millones de personas de los países más pobres se quedan al margen de la vacunación que les puede evitar la enfermedad. Los países ricos (16% de la población mundial) acumulan las vacunas (60%) mientras que los más pobres están desabastecidos. El Reino Unido había distribuido más de 31 dosis por cada 100 personas y Estados Unidos más de 22 a finales de febrero, Asia en su conjunto un poco más de dos y África menos 0,55 de media en los países donde habían llegado³⁸. A la tercera parte de la humanidad no le ha llegado ni una dosis y, según The Economist, más de 85 países no vacunarán lo suficiente hasta 2023³⁹ mientras que los gobiernos de los países ricos han comprado tres veces más unidades de las que necesita su población (cinco en Canadá)

³⁴ bit.ly/32ahFzf

³⁵ Oxfam. En: bit.ly/3rwmGuq

³⁶ bit.ly/3nDRtVg

³⁷ bit.ly/3rwmGuq

³⁸ bit.ly/3qCXxPs

³⁹ bit.ly/353fcaT

Esto no es solamente un genocidio sino que se trata, para colmo, de una completa estupidez. La acumulación de vacunas en los países ricos no va a terminar con la pandemia porque esta es global y las mutaciones pueden venir de cualquier país donde la vacuna no haya llegado. Y es también una política estúpida porque, como expliqué en un artículo anterior, financiar la vacunación en todos los países del mundo supone 338 veces menos dinero que el que costará el daño de no hacerlo. Una prueba más de que las decisiones económicas que se toman no persiguen la eficiencia ni el ahorro sino el enriquecimiento de unos pocos.

La política de los países ricos es igualmente absurda porque, a la postre, va a crear racionamiento también en su interior, como está ocurriendo en la Unión Europea. Y es también una estupidez responder a la escasez que ellos mismos han provocado restringiendo las exportaciones porque así ni mejorará el aprovisionamiento interior ni el global, se provocarán respuestas del mismo tipo que perturbarán las cadenas de aprovisionamiento.

La pandemia no se está combatiendo como los propios líderes mundiales decían que había que combatirla porque no son capaces o no desean poner límite a la avaricia de unos pocos. Se está provocando una crisis económica gigantesca y la pérdida de millones de empresas y empleos por salvaguardar los privilegios de los grandes monopolios. Van a morir innecesariamente millones de personas porque se da prioridad a los intereses comerciales.

Terminaré citando a un autor maldito porque creo que llevaba toda la razón. Me refiero a Federico Engels quien decía en su obra *La situación de la clase obrera en Inglaterra* que cuando las personas mueren como "víctimas de nuestro desorden social y de las clases que tienen interés en ese desorden" se comete un "asesinato social".

Eso es lo que ahora está sucediendo con las vacunas y por eso resulta cada vez más necesario que se definan y persigan los crímenes económicos contra la humanidad.

EUROPA NO FUNCIONA Y ALEMANIA JUEGA CON FUEGO

Publicado en Público el 27 de marzo de 2021

La decisión del Tribunal Constitucional alemán prohibiendo que el Jefe del Estado ratifique el acuerdo de ampliación presupuestaria para financiar el fondo de recuperación europeo es muy importante, mucho más de lo que parece.

Mientras se mantenga, suspende la emisión de deuda y, por tanto, la distribución de los subsidios y ayudas que estaban previstas por valor de 750.000 millones de euros, algo verdaderamente grave, porque puede suponer que no empiecen a recibirse, si es que llegan a hacerse efectivos, hasta 2022. Pero es más relevante aún porque vuelve a manifestar abiertamente dos grandes problemas que las autoridades europeas no parece que quieran afrontar.

En primer lugar, la decisión del Constitucional es una prueba más de que la Unión Europea no funciona o de que, si lo hace, es a trancas y barrancas y saltándose continuamente sus propias normas de actuación.

En la situación sanitaria, social y económica más grave de su historia, la Unión Europea se muestra incapaz de actuar con eficacia y dar la talla a la hora de vacunar, ayudar y promover las inversiones necesarias.

En Estados Unidos se han administrado ya alrededor de 30 dosis por cada 100 habitantes y el gigantesco plan de rescate de Biden que moviliza 1,9 billones de dólares ya está aprobado y en marcha. En la Unión Europea, por el contrario, solo ha habido alguna dosis de vacuna para el diez la población, solo trece países de los veintisiete países de la Unión han aprobado el procedimiento de puesta

en marcha del Fondo de recuperación y ninguno ha presentado hasta el momento su plan nacional de reformas e inversiones.

Y lo que es peor, el procedimiento establecido para impulsar la recuperación va a suponer un incremento tan brutal de la deuda que obligará a que la mayoría de los países realicen ajustes sin precedentes dando lugar -si no se toman otras medidas- a una nueva recesión cuando salgamos de la pandemia.

Sin embargo, la decisión del Constitucional alemán revela un segundo problema aún más preocupante que la paralización de los planes de recuperación y la forma en que se han diseñado: el modelo de la unión monetaria europea que impuso Alemania en su propio beneficio es insostenible por una sencilla razón. Para mantenerlo, resulta obligado realizar operaciones que son contrarias a la letra de los Tratados y a la retórica que los dirigentes alemanes han sembrado entre sus conciudadanos para convencerlos de las bondades del euro.

El problema tiene que ver con un postulado de la teoría económica que es algo complejo pero que voy a tratar de resumir de la manera más sencilla y rápida posible.

Alemania (y otros países del centro de Europa, como Países Bajos) ha sido siempre un país con grandes superávits comerciales gracias a su enorme potencia industrial y comercial.

Cuando disponía de moneda propia no podía mantener esa situación permanentemente porque, cuando eso ocurría, el marco se apreciaba constantemente y entonces se encarecían sus ventas al exterior. De 1980 a 2000 el marco se apreciaba constantemente (casi dobló su cotización respecto a la peseta) y eso hizo que su superávit tan solo pasara del 0,57% al 2,8% en ese periodo.

Sin embargo, la pertenencia a una unión monetaria en situación de mayor poderío económico y político le reporta un gran beneficio: como el superávit de Alemania tiene que ir de la mano del déficit de otros países de la unión con los que comercia, resulta que el efecto depresor del superávit global de la unión (en su mayor parte, consecuencia del alemán) se distribuye y Alemania lo paga en mucha menor parte que si tuviera moneda propia (su superávit comercial fue del 6,6% en 2019, un porcentaje que nunca llegó a tener antes del euro).

El problema aparece en los países más débiles económicamente y que tienen déficits, como España. Con moneda propia, resuelven la situación mediante la depreciación de la moneda. Es la competitividad de los pobres, ciertamente, pero la vía, al fin y al cabo, que les permite salir adelante sin incrementar su desequilibrio.

La apreciación de la moneda de países con superávit y la depreciación de los que tenían déficits era lo que explicaba que, antes del euro, España y Alemania tuvieran niveles de deuda más o menos equivalentes.

Cuando se crea una unión monetaria con países que siguen esas dos tendencias contrapuestas el problema que se plantea está claro: los que tienen superávit van a poder seguir teniéndolo pero los que registran déficit ya no solo no van a poder depreciar la moneda sino que van a tener que cargar con una apreciada que agudizará su desequilibrio. Entonces, solo caben tres posibilidades: o se establece un mecanismo de redistribución muy potente (como el que hay en Estados Unidos que es otra unión monetaria) para equilibrar, o los países deficitarios aumentan su desequilibrio comercial o asumen unos ajustes de salarios y gasto permanentes que dispara el endeudamiento. Es lo que le ha ocurrido a España desde que está en el euro: ha aumentado su déficit comercial (del 2,8% del PIB en 2000 al 9,23% en 2007, cuando comienza a endeudarse) y la deuda (del 35,8% del PIB en 2007 al 95,5% en 2019).

Alemania nunca quiso que la unión monetaria del euro dispusiera de un mecanismo de redistribución potente, es decir, de una política presupuestaria y fiscal común. Por un lado, pensaba que podría imponer a los países deficitarios suficiente disciplina para que no se endeudaran en demasía. Y, por otro, la necesidad de ese endeudamiento de los deficitarios era una buena ocasión para que los bancos alemanes hicieran negocio colocando en ellos su superávit en forma de créditos.

Sin embargo, la situación se le fue de las manos a Alemania, como es bien sabido, cuando la crisis de 2008 disparó la deuda, lo mismo que ha sucedido ahora (en mayor medida) con la pandemia.

En 2008, Alemania pudo convencer al resto de sus socios europeos de que la causa de los problemas que se estaban viviendo era su enorme deuda, cuando en realidad eso era la consecuencia, y estableció las políticas de austeridad. Pero estas, como era lógico que ocurriera, no solo no limitaron la deuda sino que la aumentaron, hasta el punto de poner en peligro la estabilidad general de euro.

Sin querer modificar el encuadre general de la unión solo quedaba una salida, la intervención del Banco Central Europeo para impedir que siguiera subiendo la prima de riesgo.

Así se llegó al momento culminante. El 26 de julio de 2012, Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, declaró con firmeza: "haré todo lo que sea necesario para evitar la ruptura del euro y, créanme, será suficiente".

Efectivamente, lo hizo y lo hizo bien, pero saltándose a la torera el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe expresamente que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos.

Desde entonces, el Banco Central Europeo ha sido quien ha tenido que salvar la situación actuando como lo que debe ser un banco central normal y corriente, la fuente de financiación de los gobiernos cuando resulta necesario. Algo que se ha acentuado en la pandemia cuando esta necesidad, como es bien sabido, se ha hecho imperiosa. La prueba evidente de ello es que el Banco Central Europeo ha pasado a poseer entre el 20% y el 33% de la deuda de los grandes países de la Unión.

Todo esto demuestra que Alemania está jugando con fuego en la Unión Monetaria. Quiere aprovecharse de ella pero no está dispuesta a establecer los mecanismos de reequilibrio sin los cuales, o los países gracias a los que tiene superávits se van al garete, o se hace precisa una intervención del Banco Central Europeo que es contraria a los Tratados y, además, insostenible porque no puede seguir dándose ilimitadamente.

Para poder justificar esa posición tan inestable y contradictoria, los dirigentes alemanes han tenido que sembrar un discurso bien conocido: los países del sur son unos manirroto que no saben administrar sus recursos y a los que, por tanto, hay que disciplinar y atar en corto para que no derrochen el dinero.

Un discurso absurdo y que ahora se le vuelve en contra. Absurdo porque nadie puede entender que una nación tan inteligente y poderosa como Alemania se haya podido asociar y unir su destino con países tan nefastos, que nada le proporcionan y que le cuestan tanto dinero. Y un discurso que se vuelve en contra de Alemania cuando se llega a una situación extrema, como la de ahora.

Alemania es, en realidad, la primera interesada en que esos países deficitarios, como España, se mantengan en el euro y por eso no se contempla en las leyes que un país se pueda salir de la unión monetaria. Es la única manera, como he dicho, de que pueda seguir manteniendo superávits, pero eso no se puede conseguir sin violar las condiciones de partida, las reglas del juego que la propia Alemania impuso.

La decisión del Constitucional alemán es un nuevo aviso: la cuerda se está tensando demasiado y no se puede seguir disimulando por más tiempo que el Banco Central Europeo está haciendo una política económica que de ninguna manera entra en las competencias que le dan los Tratados, por muy conveniente y adecuada que esté siendo para salvar al euro.

Lo que nos dice la decisión que acaba de tomar el Tribunal Constitucional está muy claro: el modelo actual del euro tiene las horas contadas. O se reforma en profundidad para convertirse en una auténtica unión monetaria, o explota, bien como consecuencia de sentencias constitucionales, bien por la crisis y la divergencia brutal que va a provocar entre los diferentes países que la forman.

BIDEN ACABA CON EL ANARCOLIBERALISMO Y TIENE UNA BUENA RAZÓN PARA HACERLO

Publicado en Público.es el 9 de abril de 2021

Un par de discursos de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, han bastado para tirar por la borda las proclamas anarcoliberales de los últimos cuarenta años.

En el Senado, Yellen advirtió que "la recesión será larga y dolorosa si no hay un mayor estímulo fiscal" y, en el Congreso, anunció las subidas previstas en los impuestos sobre sociedades (del 21% al 28%) y en los que gravan los beneficios obtenidos en el exterior (del 13% al 21%), así como la necesidad de establecer un impuesto mínimo común en todos los países sobre las ganancias de las multinacionales. Todo ello -dijo- para frenar la carrera global a la baja y "hacia el abismo" de los impuestos en los últimos treinta años. Días antes, Biden había presentado el último plan de estímulo dedicado a inversiones en infraestructuras por un valor de 1,9 billones de dólares, elevando así a la fabulosa suma de 5,8 billones el dinero que la administración estadounidense lleva gastado para combatir la crisis. Todo lo contrario de lo que los anarcoliberales, desde Reagan hasta Trump, vienen diciendo que hay que hacer para arreglar cualquier tipo de problema económico: recortar gasto y bajar impuestos.

Lo importancia de estas medidas va más allá de su magnitud, muy grande en gasto pero no tanto en materia impositiva, pues la del tipo del impuesto sobre sociedades se quedará a siete puntos del 35% que tenía cuando Trump lo redujo al 21%. Lo importante, a mi juicio, es el cambio en la filosofía que hay detrás de ellas y, sobre todo, el reconocimiento de que ese mantra anarcoliberal no ha funcionado en absoluto y que es inapropiado para hacer frente a los desafíos a

los que se enfrenta Estados Unidos para poder mantener su poder imperial sobre el resto del mundo.

Como el propio presidente Biden recordó hace unos días, 52 de las mayores empresas de Estados Unidos no habían pagado en impuestos ni un centavo en los últimos tres años pero eso no había conseguido recuperar su inversión ni que creasen más empleo. Y lo único que han logrado los programas de recortes de los últimos decenios ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad y deteriorar la base material de la economía y los servicios públicos que son imprescindibles, no solo para mantener niveles mínimos de bienestar para toda la población, sino para que las propias empresas privadas puedan funcionar con un mínimo de eficiencia.

Ha tenido que producirse una pandemia para que se den cuenta pero bienvenido sea, aunque llegue tarde, este cambio de paradigma.

Lo bueno, además, es que Estados Unidos no se puede permitir poner en práctica esa nueva estrategia fiscal, imprescindible para financiar el enorme gasto público previsto, sin lograr, al mismo tiempo, otros dos objetivos. Por un lado, que se asuma esa filosofía en los demás países y se establezcan un estándar mundial común, y de ahí su propuesta de impuesto mínimo global sobre el beneficio de las sociedades. Por otro, cambiar la percepción que se ha sembrado en la ciudadanía sobre la fiscalidad a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años. No es posible consolidar los cambios que necesita llevar a cabo la administración Biden, o los parecidos que se propongan a partir de ahora otros gobiernos, sin acabar con la demonización de los impuestos y de la inversión pública, y eso obliga a realizar un discurso político muy diferente al que hemos venido oyendo en los últimos decenios.

Ahora bien, ni Yellen, ni Biden, ni los dirigentes del Fondo Monetario Internacional que igualmente reclaman más impuestos sobre los ricos y empresas para hacer frente a la crisis y que ahora dicen "estar a favor de un impuesto mínimo de sociedades a nivel global", se han hecho de izquierdas, bolivarianos o comunistas. Es verdad que asumen lo que veníamos proponiendo desde hace tiempo los economistas y organizaciones progresistas pero lo han debido hacer porque las propuestas de los anarcoliberales han fracasado y porque tienen por delante unos retos a los que no podrían hacer frente simplemente haciendo cada vez más ricos y poderosos a quienes ya lo tienen todo.

Por eso no conviene echar las campanas al vuelo. Detrás de las buenas palabras hay una estrategia de fondo que lo explica todo.

Estados Unidos tan solo se propone recuperar el terreno perdido, evitar que su sociedad colapse como resultado de las fracturas sociales tan grandes que han provocado cuarenta años de políticas a favor del gran capital, y reforzarse para hacer frente a la competencia cada día más feroz de China.

La explicación de los cambios tan radicales que en materia económica está llevando a cabo la administración Biden quizá se puede encontrar en un informe publicado por The Atlantic Council sobre la estrategia que debería adoptar Estados Unidos frente al ascenso del poder de China en el mundo y cuyo autor es un ex alto funcionario del gobierno que se mantiene en el anonimato⁴⁰.

En el informe se definen, en primer lugar, los intereses nacionales que Estados Unidos debe proteger, junto a los de sus socios y aliados. Los tres primeros, retener la superioridad económica y tecnológica colectiva, proteger el estado global del dólar estadounidense y mantener una abrumadora disuasión militar convencional.

La estrategia que puede ser eficiente para alcanzarlos debe tener, según el informe siete componentes de los cuales el primero es reconstruir los fundamentos económicos, militares, tecnológicos y de capital humano del poder nacional a largo plazo de Estados Unidos

Según el informe, para desarrollar esa estrategia hay que basarse en diez principios organizativos básicos de los que destaco el primero: los pilares fundamentales del poder estadounidense son cuatro, las fuerzas armadas, el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y pilar del sistema financiero internacional, el liderazgo tecnológico global, y los valores de la libertad individual, la justicia y el estado de derecho.

De ahí se deducen, finalmente, una serie de "tareas domésticas centrales" de carácter estructural, a largo plazo y "con dividendos que solo se obtendrán en una década o más". Entre ellas, las siguientes:

⁴⁰ Atlantic Council. The Longer Telegram. Toward a new American China strategy. En bit.ly/3fy7446

- Revertir las inversiones en declive en infraestructura económica nacional crítica, incluidos los sistemas móviles 5G de próxima generación.
- Revertir la inversión pública en declive en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, educación, universidades e investigación científica básica.
- Asegurar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en las principales categorías de innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial.
- Desarrollar un nuevo consenso político sobre la naturaleza futura y la escala de la inmigración a los Estados Unidos para garantizar que la población estadounidense continúe creciendo, permanezca joven y evite las implosiones demográficas que amenazan a muchas otras economías desarrolladas y emergentes, incluida la propia China, mientras retiene a los mejores y más brillantes de todo el mundo que vienen a los Estados Unidos para estudiar.
- Rectificar la trayectoria presupuestaria a largo plazo de los Estados Unidos para que la deuda nacional se mantenga en última instancia dentro de parámetros aceptables.

Esto es lo que posiblemente hay detrás del impresionante programa de estímulo que está diseñando la administración de Biden y de las medidas fiscales anunciadas: la paradoja del anarcoliberalismo de las últimas décadas. Ha hecho más poderosos y ricos que nunca a quienes ya lo eran pero ha debilitado al capitalismo como sistema, porque este necesita legitimación y equilibrio interno y sostenibilidad. Queriendo apropiarse de todo, se ha fracturado la sociedad que lo sostiene y desmantelado las fuentes de ingresos que el propio capital necesita para sobrevivir.

El anarcoliberalismo ha matado de éxito al capitalismo de nuestro tiempo y este debe ahora reinventarse. Está por ver a qué precio y con qué resultados, pero la casi total ausencia de contrapesos hace temer lo peor.

LUCES Y SOMBRAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Publicado en Público.es el 16 de abril de 2021

La aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, España Puede, es un acontecimiento histórico, por sí mismo, por su envergadura y propósitos, y por el momento tan complicado en que nace y tendrá que llevarse a cabo.

Es, posiblemente, la declaración de intenciones económicas más ambiciosa y con más medios que se ha diseñado en la democracia, un hito sin precedentes por la cantidad de dinero que va a movilizar y también porque se propone abordar transformaciones y desarrollar proyectos de cuyo éxito quizá dependa el futuro de las dos o tres próximas generaciones de españoles.

La coyuntura en la que se aplicarán los proyectos que contempla es muy complicada porque une dos procesos o retos que se entremezclan para mal. Por un lado, la recuperación de las economías tras el shock tremendo que está suponiendo la pandemia y, por otro, el cambio económico y social que se avecina de la mano de una nueva era tecnológica que va a transformar el capitalismo que hasta ahora hemos conocido.

El gobierno ha preparado un plan de reformas y estrategias durante muchos años pospuestas, como la de la administración pública, la de eficiencia y ahorro energético o la puesta en marcha de un cuarto e imprescindible cuarto pilar del Estado de Bienestar en torno a la economía de los cuidados.

Si se llevan a cabo todas las propuestas del Plan y se consiguen los objetivos que se propone, no me cabe la menor duda de que España será otra muy diferente en pocos años. Pero este reconocimiento (al que, una vez más, no se

suma la derecha, incapaz de pensar que los intereses nacionales también los defienden las izquierdas) no puede obviar algunas críticas o consideraciones negativas sobre el Plan motivadas por lo que hay detrás de sus propuestas, por la forma en que se ha diseñado y porque no contempla, o lo hace insuficientemente, algunos aspectos fundamentales.

La primera tiene que ver con la cuantía de los recursos que se van a movilizar, no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea. Son realmente muy cuantiosos pero insuficientes, como demuestra que el propio Parlamento Europeo solicitara en su día casi tres veces más dinero del que finalmente se ha puesto sobre la mesa para emprender la recuperación de las economías europeas. Basta comparar lo que se ha hecho aquí con lo realizado en Estados Unidos o China para poder aventurar que Europa, una vez más, llega tarde y se queda corta.

En segundo lugar, hay que señalar que sería milagroso que un Plan como el presentado pueda promover, como se pretende, un verdadero cambio de modelo productivo. Es prácticamente imposible que eso ocurra en el marco de una unión monetaria sin el concurso, la coordinación y la complicidad de todas las economías que la integran. Si de verdad se quisiera cambiar el modelo productivo, como en cada país se dice por separado, habría que haber pensado y diseñado los planes "en europeo" buscando las sinergias, las interrelaciones, las complementariedades y los vectores de especialización que armonizaran los esfuerzos de todos los países. Que cada país haya realizado de prisa y corriendo planes que no saben uno del otro es justo lo contrario de lo que el sentido común indica que se hubiera debido hacer para que toda la economía de la Unión se recupere satisfactoriamente: un plan de recuperación paneuropeo y no una mera agregación de voluntades.

En tercer lugar, es evidente también que lo que ocurra de veras con este Plan en dos o tres años no depende de lo que ahora se haya escrito en un papel sino de qué planteamiento haga la Unión Europea sobre la deuda que se está generando, sobre las reglas de gobernanza económica que se han tenido que suspender por su inutilidad e incluso inconveniencia y, por supuesto, sobre la condicionalidad que finalmente se impongan para ir recibiendo las ayudas y préstamos.

El fundamentalismo ideológico y la torpeza de las autoridades europeas provocaron una segunda recesión tras la crisis de 2007-2008. Veremos ahora si no cometen el mismo tipo de error, impulsando planes muy ambiciosos desde

el lado de la oferta productiva para hacerlos saltar más tarde bloqueando la demanda y la capacidad de gasto.

En cuarto lugar, surgen muchas dudas a raíz del tipo de proyectos que conllevan mayor inversión, del procedimiento que se ha seguido para elaborarlos y por la falta de mecanismos que permitan seguir de cerca lo que vaya sucediendo con ellos.

Es cierto que se contemplan estrategias de transformación de largo alcance y muy novedosas en diferentes aspectos del plan pero también lo es que, sobre todo en algunas autonomías, se ha recurrido a revestir proyectos antiguos, incluso en marcha y que ni siquiera responden a los objetivos de transición ecológica, eficiencia económica y cohesión social que se quieren conseguir. O que, por ejemplo, se propongan algunos proyectos de gran capacidad transformadora medioambiental sobre el papel cuando se acaban de aprobar normas que permiten destruir el entorno o generar deshechos con mucha más facilidad y menor coste.

Más en concreto, cuesta creer que el desarrollo del coche eléctrico, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas o la reforma de la administración puedan servir realmente como ejes capaces de desencadenar un cambio de modelo productivo.

Es lógico, por otra parte, que las empresas tengan un protagonismo especial a la hora de desarrollar las inversiones previstas pero eso no puede implicar, como ha ocurrido, que las más grandes acumulen proyectos de cuya utilidad cabe dudar. Nadie se puede oponer a que hagan negocio, porque es su razón de ser, pero los poderes públicos deben evitar que el dinero de todos se utilice para financiar los que solo tienen rentabilidad a muy corto plazo y no son sostenibles. El protagonismo que el Plan concede, por inspiración de grandes empresas energéticas, al hidrógeno verde, por ejemplo, está condenado a provocar una burbuja más. Unas pocas empresas ganarán mucho dinero pero creando infraestructuras que luego no tendrán suficiente mercado porque la producción y almacenamiento son todavía muy caros, ineficientes y no competitivos con el desarrollo tecnológico actual. No parece que hayamos aprendido lo suficiente después de habernos gastado miles de millones de euros en autopistas, aeropuertos o puertos sin usuarios tan solo para hacer de oro a las grandes constructoras y a los bancos.

Si se me permite la comparación, lo que ha hecho el gobierno a la hora de elaborar el Plan, abriendo de par en par su redacción a los grandes intereses corporativos, es lo mismo que pedir a los pajarillos que redacten la ley de caza. Habrá de todo, menos caza, e igual puede ocurrir al haber fiado la mayor parte del plan a los intereses de las grandes empresas -a veces, incluso tan solo a las auditoras, cuyo saber hacer corrupto ya se puso de manifiesto en la anterior crisis financiera. Es también muy difícil de creer que las mismas grandes empresas rentistas y con enorme poder oligopólico que han convertido a España en la economía con uno de los precios de la energía más caros de Europa, con más infraestructuras desaprovechadas o con el mayor desperdicio de energía renovable de todo el planeta, se hayan caído del caballo para comenzar ahora a comportarse competitivamente, con eficiencia y responsabilidad y anteponiendo los intereses de la demanda y del conjunto de la economía a los suyos propios.

Precisamente por todo ello, una de las grandes deficiencias del Plan es que no se haya aprovechado la situación para haber creado nuevas y más eficaces instancias de seguimiento y control de la inversión que se lleve a cabo bajo sus auspicios. Sin ellas, lo más seguro es que vuelva a producirse lo que tantas veces nos ha avergonzado: la apropiación privada del beneficio que reporta el dinero público y la asunción por el Estado de las pérdidas que conlleva el cortoplacismo y el oportunismo de las grandes empresas rentistas.

Un Plan tan ambicioso y que mueve tanto dinero como el que se acaba de aprobar debería de haberse realizado mediante un procedimiento de elaboración mucho más escrupuloso, con transparencia, participación y control social. Si no se dispone cuanto antes de mecanismos rigurosos de evaluación de la gestión de los recursos millonarios que se van a invertir, ya nada tendrá solución a poco que comiencen a producirse los desaguisados.

Es paradójico que el Plan hable tanto de innovación y que, sin embargo, no se hayan realizado propuestas innovadoras en algo fundamental para que tenga éxito, la interrelación entre el sector público y el privado. En lugar de crear nuevos tipos de espacios y formas de colaboración, no solo con las grandes empresas sino también con las más marginales o periféricas y con los intereses comunitarios y sociales, el gobierno central y la mayoría de los autonómicos han cedido, incluso desde el inicial momento de diseñar los proyectos, plegándose sin más a los intereses privados.

Contaba el profesor Fabián Estapé que, al concluir la redacción del II Plan de

Desarrollo de la dictadura, sus responsables se fueron unos días de vacaciones a Grecia. Estando allí, recibieron una llamada de El Pardo diciendo que a Franco le había parecido bien el documento pero que echaba en falta contenido social. Inmediatamente, Estapé llamó a la imprenta y simplemente ordenó que al título que aparecía en portada -II Plan de Desarrollo- se le añadiera "y Social". Al verlo de nuevo, el dictador quedó ya satisfecho.

Lo que han hecho ahora algunas grandes empresas y auditoras a las que se les ha confiado la preparación de proyectos multimillonarios luego aceptados ha sido algo así: cambiar el título y lavarle la cara a otros que ya estaban en el cajón, dispuestos para ponerse en marcha o incluso iniciados, para que ahora parezca que son "next generation".

Si no se dispone de los filtros, control y rendición de cuentas que hasta ahora no hemos tenido, si no se es capaz de disciplinar los intereses cortoplacistas y el oportunismo del capital rentista, y si no se está dispuesto a creer que hay vida y capacidad de crear riqueza y empleo más allá de las grandes empresas que lo pueden todo, España No Podrá.

¿PARA QUÉ SIRVE BAJAR IMPUESTOS A LOS RICOS, COMO PROPONEN EL PP Y VOX?

Publicado en Público.es el 23 de abril de 2021

Las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años han tenido un mantra repetido constantemente: conviene reducir los impuestos lo más posible sin tener miedo de que eso repercuta principalmente en beneficio de las rentas más elevadas. Aseguran que así aumentará el consumo, el ahorro y gracias a ello la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Es decir, se producirá un efecto de "derrame" o "goteo" desde las rentas más altas que terminará beneficiando a toda la sociedad.

Los políticos neoliberales (no necesariamente ubicados en los partidos de la derecha) se saben bien el argumento, lo reiteran siempre que pueden y lo han llevado a la práctica allí donde han gobernado.

La presidenta Ayuso lo ha dicho muy claramente en diversas ocasiones: "Tenemos que ser atractivos y eso se hace sin maltratar con impuestos. Dándole un trato desigual a muchas personas que probablemente tienen un mayor poder adquisitivo pero crean más puestos de trabajo"⁴¹.

Sin embargo, esta tesis neoliberal ni tiene fundamento teórico ni funciona en la realidad.

Para que una bajada de impuestos aumente el consumo de los hogares debe darse un requisito esencial: la bajada debe concentrarse en las rentas más bajas que son las que se destinan en mayor medida a la compra de bienes y servicios.

⁴¹ bit.ly/33Lqqju

Si benefician principalmente a las más elevadas, lo que ocurre es que aumenta el ahorro, Y lo que sabemos que ha ocurrido en los últimos años y con las reformas que proponen el Partido Popular y Vox es justo lo contrario, han salido siempre beneficiadas las rentas más elevadas.

El socialista Juan Lobato se lo mostró claramente en un debate a Iván Espinosa de los Monteros cuando este defendía como una medida "a favor de los trabajadores" la disminución de medio punto del IRPF para todos los niveles de renta en la Comunidad de Madrid. El socialista le mostró que, de esa manera, el 30% de los madrileños que tienen menos de 12,000 euros de renta no tendrían ni un euro de beneficio, el 40% que gana menos de 30.000 tendría un beneficio de 5 euros mensuales, el 23% que gana menos de 60.000 se beneficiaría con 11 euros al mes y el 7% más rico, eso sí, podría tener un ahorro fiscal de hasta 4.500 euros⁴². Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que el 9,3% de los madrileños que declara en el tramo más alto tendrían 20 veces más ahorro que el 30% que están en el tramo más bajo⁴³.

El segundo requisito que debiera darse para que una bajada de impuestos a los ricos como la que proponen PP y Vox genere más inversión es que esta dependa del mayor ahorro que se genera (supuestamente) rebajando la fiscalidad de las rentas más altas. Un supuesto verdaderamente irreal. La inversión depende de los beneficios esperados y, si acaso, de alguna otra variable como el coste del crédito necesario para financiarlo. Por tanto, lo más probable que ocurra después de bajar los impuestos preferentemente a los ricos es que el consumo de los hogares no baje y que se reduzca el gasto y la inversión públicos, de modo que las ventas se reducirán y los beneficios esperados serán menores. Y ni siquiera se puede creer que el aumento del ahorro se traduzca en mejores posibilidades para la inversión que crea más actividad productiva y más empleo porque es bien sabido que el sistema financiero ofrece hoy día las mejores alternativas de colocación de los fondos ahorrados en la inversión puramente especulativa.

No obstante, la mejor prueba de que bajar impuestos a los ricos no produce los efectos benéficos que dicen los neoliberales es comprobar lo que sucede en la

⁴² bit.ly/3tHn3oL

⁴³ bit.ly/33xcb21

realidad y los datos son abrumadores. En general, es fácil comprobar que los países en donde hay más renta per cápita y menos tasas de paro no son precisamente los que tienen tasas impositivas más bajas sino todo lo contrario. O, también, que ha habido tasas más elevadas de crecimiento económico en las etapas con fiscalidad más elevada. Y sobre el efecto en particular de los impuestos más bajos para las rentas más altas la evidencia empírica es igualmente clara. El último gran análisis sobre este asunto lo publicaron en diciembre David Hope y Julian Limberg, investigadores de la London School of Economics and Political Science. En él analizan las consecuencias económicas de los principales recortes fiscales para los ricos que se han producido en los últimos 50 años en 18 países de la OCDE y sus conclusiones son claras. Estos recortes se han traducido, en promedio, en un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la parte superior del 1% de la renta nacional antes de impuestos pero ni el PIB real per cápita, ni la tasa de desempleo se han visto afectados por esos recortes. Sus efectos, dicen, "son estadísticamente indistinguibles de cero"⁴⁴.

En un libro de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman publicado hace poco en España (*El triunfo de la injusticia: Cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacerles pagar*) también se demuestra que "por primera vez en los últimos cien años, la clase trabajadora paga hoy tasas impositivas más altas que los multimillonarios" sin que eso haya venido acompañado de más inversión, más empleo y más actividad económica, sino todo lo contrario. Y también lo demuestra el Fondo Monetario Internacional que no parece que sea sospechoso de radicalismo: "aumentar la participación en los ingresos de los pobres y la clase media en realidad aumenta el crecimiento, mientras que una participación creciente en los ingresos del 20% más rico da como resultado un menor crecimiento, es decir, cuando los ricos se hacen más ricos, los beneficios no se difunden"⁴⁵.

En fin, las evidencias empíricas muestran que lo que dicen "liberales" como Aznar, Ayuso o los dirigentes de Vox es una pura mentira. Lo único que consiguen con sus reformas fiscales es dar más renta a los más ricos sin mejorar

⁴⁴ David Hope, Julian Limberg. The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich. En bit.ly/3qDFatX

⁴⁵ Era Dabla-Norris ; Kalpana Kochhar ; Nujin Suphaphiphat ; Franto Ricka ; Evridiki Tsounta. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. En bit.ly/3rs6HOe

la inversión, el empleo o la actividad económica.

Es lógico que quienes están al servicio de los ricos, o lo sean ellos mismos, digan esas mentiras para salvaguardar sus intereses. Lo impresionante, sin embargo, es que se las crean quienes podrían hacer cuentas fácilmente y comprobar que con esas reformas fiscales no se ven beneficiados; que, en contra de lo que les dicen, a cambio de ellas no hay más empleos, ni mejores salarios y que los servicios públicos son cada vez peores porque cuesta más trabajo financiarlos suficientemente. Resulta impresionante, pero a mí, la verdad, no me sorprende: a quienes veo en las calles tratando de convencer a la población de sus propuestas es a las derechas. Se han aprendido el mantra y lo repiten por cada esquina mientras que las izquierdas están en no sé bien qué otra cosa.

Últimamente, al finalizar mis charlas hago algo que vi hacer primero a mi querido amigo y maestro Vicenç Navarro: preguntar a los allí presentes si compran o leen habitualmente nuestros libros y escritos. Lo normal es que no sean más de 8 o 10 de cada 100 quienes dicen hacerlo. Por eso me resulta impresionante pero no me sorprende que quienes apenas tienen donde caerse muertos voten a las derechas que los engañan para quedarse con su dinero. Los progresistas que se supone deberían saberse bien los argumentos para convencer a sus compatriotas no se los saben y, si se los saben, no se van a la calle a convencerlos, como si creyeran que la gente simpatizará con sus propuestas por ciencia infusa. Eso, en el mejor de los casos, porque algunos se han creído el mantra y lo que pregonan es que bajar impuestos es de izquierdas.

EUROPA PIERDE EL NORTE Y LOS RESPONSABLES TIENEN NOMBRE Y APELLIDOS

Publicado en Público.es el 30 de abril de 2021

El anuncio de un nuevo paquete de inversiones en Estados Unidos por valor de 1,8 billones dólares y el de la posibilidad de que su gobierno suspenda temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus vuelve a mostrar que Europa ha perdido el norte y que se queda definitivamente atrás.

El nuevo plan que se acaba de anunciar, un mes después de otro de 2 billones de dólares dedicados a infraestructuras, se dedicará ahora a desarrollar el cuidado infantil de alta calidad permitiendo que las familias paguen solo una cantidad en función de sus ingresos, a financiar bajas médicas remuneradas, establecer la pre-escolaridad universal y gratuita y a satisfacer necesidades alimentarias de niños de bajo ingreso, entre otros objetivos de política familiar. Una nueva inyección de gasto que se sumaría a los 4,3 billones de dólares que se llevan ya desembolsados entre acciones legislativas (3,8 billones) y administrativas (0,5 billones) de los 6,8 billones comprometidos y a los 2,9 billones (de los 6 comprometidos) de la Reserva Federal⁴⁶. Y ni siquiera se puede pensar que se haya acabado el estímulo si se tiene en cuenta que, según David M. Cutler y Lawrence H. Summers, el coste total de la pandemia en Estados Unidos sería de unos 16 billones de dólares⁴⁷.

⁴⁶ bit.ly/3fBTyfW

⁴⁷ David M. Cutler, Lawrence H. Summers. The COVID-19 Pandemic and the \$16 Trillion Virus. En <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771764>

No hay comparación posible con lo que está haciendo la Unión Europea. Aquí nos hemos quedado atrás, no sólo en la cantidad de los estímulos aprobados frente a la crisis, sino también en la agilidad a la hora de ponerlos en práctica y en los principios que mueven la actuación de los responsables políticos, como muestra que la administración Biden se plantee suspender las patentes de vacunas cuando aquí los grandes partidos apuestan por todo lo contrario.

No se puede decir que Europa no haya adoptado medidas excepcionales porque sí que las ha tomado pero lo ha hecho con tal conservadurismo y lentitud que apenas han comenzado a ser efectivas. Y, lo que es peor, las ha diseñado y se dispone a ponerlas en marcha sin apartar la mirada del espejo retrovisor, es de decir, sin perder de vista el fundamentalismo presupuestario que tanto daño ha hecho en otras crisis, e incluso en los periodos de bonanza y crecimiento.

La Unión Europea ya fracasó en la anterior crisis de 2007-2008, cuando estableció medidas de ajuste y recortes depresivas en medio de la recesión, provocando torpemente una segunda recaída de la actividad y el empleo y el descontrol de la deuda, y no parece que sus responsables hayan aprendido nada de aquello, a pesar de tantos análisis como han demostrado que se actuó sin base científica, influido por sesgos ideológicos e interpretando mal los datos que se tenían delante.

La pertinaz insistencia en el error que viene caracterizando a los responsables de la Unión Europea es el resultado de una percepción ideologizada de los problemas económicos al servicio de los grandes intereses económicos que ha consolidado unas instituciones que impiden o hacen muy difícil salir del bucle en el que se encuentran. Es como si, a base de tanto servilismo, la Unión Europea se hubiera inmunizado al revés: haciendo imposible que surjan los anticuerpos que permitan cambios de rumbo y la puesta en marcha de nuevos horizontes de política económica, que penetre aire nuevo en sus normas e instituciones.

No se ha querido que la Unión Europea sea una auténtica unión monetaria. O, mejor dicho, se ha decidido que lo sea sin cumplir todos los requisitos que sabemos que debe tener para que no produzca desequilibrios y crisis de asimetría constantes. Sobre todo, una hacienda europea y una política fiscal común con un verdadero presupuesto comunitario.

No se ha querido tampoco que la Unión Europea avance hacia la unión política

y ahora no se puede avanzar con orden de escuadra, con coordinación y sinergia, algo siempre necesario si se tienen de verdad objetivos comunes pero mucho más en medio de circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo.

La Unión Europea ni siquiera es una democracia y lo que eso significa es que no hay juego de contrapesos y que las instituciones actúan como vías de escape unas de otras y no como mecanismos de estabilización y control mutuo. ¿Para qué sirve, en realidad, el Parlamento sin control efectivo sobre el Ejecutivo, sin poder hacer efectivo lo que reclama? ¿Quién controla a la Comisión si se constituye a base de equilibrios contra natura que crean complicidades obligadas entre los grupos parlamentarios más amplios?

La política económica se somete a reglas de estabilidad caprichosas que se saltan cuando conviene o a imposiciones de no financiación por el Banco Central Europeo a los gobiernos que se sortean por la puerta de atrás cuando no queda más remedio. Europa ni siquiera cumple sus propias reglas, las usa como arma arrojadiza y amenaza, vive de la arbitrariedad permanente y sin rendición de cuentas. ¿Quién ha pagado por el error de la anterior crisis, qué normas de las que se mostraron contrarias, no ya a la evidencia sino al más elemental sentido común, se han cambiado?

Europa está dejando extenderse el populismo y las amenazas totalitarias sin ni siquiera ser capaz de convertirse en el bastión democrático que hasta los más escépticos europeístas creían que sería, al menos, la gran contribución de la Unión Europea al mundo contemporáneo.

No es muy difícil deducir cómo es posible que haya podido ocurrir todo esto, la razón de un entramado tan falso pero de tan imposible vuelta atrás, tan conservador y anquilosado. ¿Cómo se ha podido convertir la Unión Europea en esta trampa de donde es tan difícil que broten ideas nuevas y progresistas, no ya en el sentido ideológico, sino en el puramente pragmático, como las que están brotando en Estados Unidos de la mano de Biden y otros dirigentes que forman parte del poder establecido de toda la vida y que para nada se pueden considerar radicales o sospechosos de izquierdismo?

Para saberlo, quizá baste comprobar que nada de eso ocurre gratuitamente. La inmensa maquinaria comunitaria no es sino una fabulosa fuente de creación de rentas para los grandes grupos empresariales y para los bancos porque en la Unión Europea no se da una puntada sin hilo, sin producir beneficio allí y a

quien debe producirse.

Todo esto tiene responsables políticos. A la izquierda que se sitúa más allá del socialismo siempre le trajo sin cuidado Europa. Abordó el proceso de construcción europea y sigue en sus instituciones con un ideologismo exacerbado e inoperante porque carece de pragmatismo; y el socialismo europeo, al que por su dimensión y fuerza electoral le correspondía un protagonismo especial y mucho más poderoso, cayó preso del pragmatismo dejando hechos trizas todos sus principios ideológicos. Lo que a unos les sobra a los otros les ha faltado.

El sociólogo belga Mateo Alaluf publicó el pasado mes de marzo un interesante libro titulado *Le socialisme malade de la social-démocratie* en el que muestra cómo los partidos socialistas han ido perdiendo peso e influencia precisamente cuando han gobernado. Yo creo que eso ha tenido mucho que ver con el papel de sus líderes y representantes en las instituciones europeas. En estas, no solo han sido cómplices sino a veces auténticos hacedores de las normas neoliberales e ideologizadas que han impedido que sus propios partidos lleven a cabo políticas socialdemócratas en sus respectivos países. El socialismo en Europa está matando al socialismo europeo.

En los últimos tiempos está ocurriendo lo mismo. Mientras que a su izquierda no hay apenas acciones políticas transformadoras y que trasciendan, el grupo socialista del Parlamento Europeo está actuando como auténtico cómplice de una política a todas luces incompetente, equivocada y muy dañina de la Comisión y el Consejo Europeos y, en lugar de mostrar otro perfil y abanderar alternativas de progreso, está contribuyendo a crear las condiciones que van a acabar con lo poco que queda del socialismo democrático en Europa, empezando por España.

Es verdaderamente sorprendente que alguien como Biden esté pasando por la izquierda al socialismo europeo, siendo capaz de enfrentarse a dogmas que la realidad ha mostrado que son más falsas y peligrosos (incluso para el propio capital) que un euro de cartón piedra. Mientras que los demócratas estadounidenses (en principio, mucho más conservadores) acaban con las políticas ultraliberales por puro pragmatismo, los socialistas europeos se empeñan en salvar de las brasas al neoliberalismo decadente que domina las instituciones europeas.

La experiencia nos ha demostrado que lo que hacen las izquierdas en Europa no es baladí ni algo que solo tiene efecto extramuros, más allá de nuestras fronteras. Es determinante de la política nacional y por eso va a ser muy difícil que gobiernos progresistas como el español culminen con un mínimo de éxito su andadura, me atrevería a decir que sobrevivan, si sus respectivos grupos parlamentarios en Europa siguen dedicándose a apuntalar las condiciones que hacen inviables políticas de progreso en los diferentes países. Están a tiempo de rectificar.

NO. NI VICENÇ NAVARRO NI YO HEMOS ESCRITO EL DISCURSO DE BIDEN. ES SOLO QUE LLEVÁBAMOS RAZÓN

Publicado en Público.es el 7 de mayo de 2021

Escribo este artículo tan solo para aclarar muy brevemente un bulo que podrían estar divulgando los economistas ultraliberales.

Verán.

Uno de esos economistas españoles, Xavier Sala i Martí, escribió en 2004: "sólo los ultra-radicales (como Vicenç Navarro y otros soldados derrotados del marxismo universitario), siguen hablando del aumento de impuestos, del gasto público y del intervencionismo público tal como hacían en los años setenta"⁴⁸.

Pues bien, en las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado programas y anunciado en su discurso sobre el estado de la Nación del pasado 29 de abril propuestas o leyes como las siguientes:

- Aumento de 2,3 billones de dólares de gasto público para infraestructuras.
- Aumento de 1,8 billones dólares de gasto público para programas sociales.
- Aumento de impuestos para las grandes corporaciones.
- Aumento de impuestos para el 1% más rico de Estados Unidos.

⁴⁸ Xavir Sala. Ronald Reagan. En bit.ly/3fAE9wh

- Impuesto internacional sobre los beneficios de las empresas multinacionales.
- Ley para proteger el derecho a sindicarse.
- Aumento del salario mínimo a 15 euros la hora.
- Ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres.
- Evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido en la pandemia cuando unos 600 multimillonarios han aumentado su riqueza en 1 billón de dólares mientras 20 millones de trabajadores perdían su empleo.
- Fijación de precios más bajos de los medicamentos.
- Ley de cuidado de la salud a bajo precio para ampliar la cobertura de Medicare (programa de Seguridad Social para mayores de 65 años y jóvenes y otras personas discapacitadas).
- Ayudas para poder evitar que los inmigrantes tengan que dejar sus países huyendo de la pobreza y a los nacidos en Estados Unidos como inmigrantes sin papeles.

A la vista de estas propuestas del presidente de Estados Unidos que, además, están siendo reproducidas por otros organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, simplemente quiero hacer público lo siguiente: Ni Vicenç Navarro ni yo hemos sido contratados por Biden ni por ninguno de esos organismos para escribir sus discursos o hacerles sus programas.

Los grandes parecidos que existen entre las propuestas de estos dirigentes y las que venimos escribiendo en nuestros libros, por ejemplo en *Hay alternativas*. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, y en multitud de artículos, se deben simple y llanamente a que llevábamos razón.

Como hemos demostrado numerosas veces en los últimos años, las privatizaciones del capital y las empresas públicas, los recortes de gasto público en medio de las recesiones, bajar impuestos a los ricos y subir los de las clases medias y trabajadoras, la moderación salarial, la disminución de la inversión pública, el desmantelamiento de los servicios públicos... no sirven nada más que para darle más dinero a los ricos y para destruir empresas productivas que crean empleo.

Nos alegramos profundamente de que por fin comiencen a reconocer los

errores cometidos en la anterior crisis económica y que nos hagan un poco de caso. Las ideas que defendemos y que Sala i Martí creyó haber matado gozan de excelente salud: se ha demostrado que son las imprescindibles para sacar a las economías de las crisis sin lesionar el bienestar y para salvar la vida de las personas y de las empresas. Quien no quiera seguir destruyéndolas, no tendrá más remedio que aplicarlas, por convicción ideológica o por simple pragmatismo.

HABLÓ EL BANCO DE ESPAÑA, LA INSTITUCIÓN QUE MÁS DINERO NOS CUESTA A LOS ESPAÑOLES

Publicado en Público.es el 14 de mayo de 2021

El Banco de España es posiblemente la institución pública que más dinero ha costado a los españoles en el último medio siglo. No por los privilegios y altos sueldos de sus directivos, que serían pocos si hicieran bien su trabajo. Lo que nos cuesta un riñón es que no desarrolla con eficacia su función principal de promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. En lugar de garantizarlos, ha cometido fallos calamitosos de supervisión y control que han producido o no han evitado insolvencias y crisis de un coste financiero elevadísimo.

Desde la de 1977 a 1985, que acabó con 56 de los 110 bancos existentes al inicio del periodo, y que se calcula costó entre 1,3 y 2 billones de las antiguas pesetas (cuando los ingresos del Estado eran de unos 4,5 billones), el Banco de España no ha sabido o no ha querido evitar la creciente concentración bancaria, el crecimiento excesivo del crédito en unos casos y la escasez en otros, las comisiones y tipos de interés abusivos, los beneficios extraordinarios de la banca, el exceso de riesgo asociado a la burbuja inmobiliaria, las insolvencias y la morosidad, las quiebras, el desastroso control político de las cajas de ahorro y el antidemocrático que los banqueros ejercen sobre la política y la sociedad, los fraudes y engaños a millones de clientes..., por citar tan solo algunos hitos más costosos de esos últimos 45 años de historia financiera española.

El fracaso regulador del Banco de España en la última crisis fue apoteósico y a los españoles debería avergonzarnos que nadie haya pagado penalmente por él. Sus propios inspectores tuvieron que denunciar al gobernador Caruana por su

actitud pasiva y complaciente ante el riesgo que se estaba acumulando⁴⁹. Y cuando sus errores comenzaron a surtir efectos lo que hizo fue aprobar cambios de normas para ocultar el daño y promover fusiones de entidades para entregar el sector a la banca privada que nos costaron todavía más dinero. Si al coste de la última crisis reconocido por el Tribunal de Cuentas (122.122 millones de euros) se le suman avales, créditos fiscales, ventas de activos, efectos de cambios normativos... la factura de la incompetencia y del apoyo del Banco de España a la banca privada debe superar los 300.000 millones de euros. Además de todo lo que eso lleva consigo, la desaparición de miles de empresas y la ruina o el desempleo de millones de personas.

Hasta el presidente saliente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lo reconoció abiertamente al afirmar que el Banco de España había tenido "errores muy importantes de supervisión" antes de y durante la crisis.

Aunque es muy ingenuo creer que esos errores lo hayan sido solo como consecuencia del azar o del desconocimiento. Son el resultado del fundamentalismo ideológico que se cultiva en su seno pero, sobre todo, de que el Banco de España es una institución puesta al servicio exclusivo del capital bancario privado. Caruana, a quienes sus inspectores denunciaron, como he dicho, por dejar hacer y permitir que crecieran la burbuja y los desmanes del sector, no hizo mal su trabajo. Al revés, hizo eso porque estaba ahí para hacer lo que hizo, permitir que se multiplicara el negocio bancario aunque fuese a costa de hundir a la economía española. La prueba es que, después de esas denuncias y de que se hiciera patente el efecto de su gestión, pasó a ocupar un cargo directivo en el Fondo Monetario Internacional, a ser luego Director Gerente del Banco Internacional de Pagos y, por fin, a formar parte del Consejo de Administración del BBVA. El mismo destino final que han tenido otros gobernadores o altos directivos del Banco de España, como prueba definitiva de que no han sido servidores públicos sino empleados del capital privado. Lean, si no lo creen, El libro negro: *La crisis de Bankia y Las Cajas. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos*, de Ernesto Ekaizer.

El Banco de España tampoco acierta cuando hace pronósticos sobre el horizonte de los problemas económicos. En 2007, cuando ya se había iniciado la crisis, escribió en su Informe Anual sobre 2007 que lo que estaba ocurriendo

⁴⁹ La carta de denuncia al ministro de Economía se puede leer en bit.ly/3GHjMcG

era un simple "episodio de inestabilidad financiera", si acaso, con solo "algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía en horizontes más alejados". Y el año pasado, a pesar de haber hecho dos previsiones sobre la evolución del PIB, no acertó ni en la más optimista ni en la pesimista y su margen de error fue mayor que el de instituciones con muchos menos medios e información⁵⁰.

Sin embargo, a pesar de que su historia reciente está plagada de desaciertos, de incompetencia, de responsabilidad y de daño a la economía española, los dirigentes del Banco de España no dejan de pontificar como si fueran los únicos que saben lo que realmente conviene hacer.

¿Se imaginan a un médico al que se le murieran todos sus pacientes alardeando por el hospital de ser él quien únicamente sabe la terapia a seguir con los enfermos y queriendo imponerla a cualquier precio? Pues algo así es el Banco de España en nuestra economía. Nunca acierta, no sabe cumplir con su función y nos impone una carga multimillonaria a los españoles, pero se empeña en decirnos qué es lo que se debe hacer para resolver los problemas que sus propias medidas anteriores han provocado.

Ahora vuelve a la carga, metiéndose una vez más en camisa de once varas, pues esa no es la función que corresponde a un banco central. En su reciente Informe Anual insiste de nuevo en el mismo tipo de reformas que a su juicio hay que acometer para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19. Olvidando que si esta ha tenido un efecto tan grande ha sido, como acabo de señalar, justamente a consecuencia de las políticas de recortes de servicios públicos esenciales, de las laborales que han producido precariedad y desigualdad y de las financieras que han multiplicado la deuda que los dirigentes del Banco de España han impulsado en los últimos años.

En concreto, ahora aprovecha su publicación para reforzar la propuesta con la que el capital bancario, de la mano de sus representantes políticos, trata de capturar el ahorro de las clases trabajadoras, la llamada "mochila austriaca".

Esta consiste básicamente en un fondo constituido desde la empresa pero lógicamente a cargo de los salarios que se asigna a cada trabajador y que puede ser utilizado en caso de despido, de traslado, para actividades formativos o, si

⁵⁰ Una comparación con las de otros organismos en bit.ly/3nAyURE

llegara el caso, para completar la pensión.

La propuesta se justifica desde hace tiempo diciendo que así se combate la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, algo que no tiene mucho sentido porque este problema de nuestro sistema laboral más bien tiene su origen en la contratación fraudulenta. La realidad es que esta medida perjudicaría a las empresas que realizaran menos despidos, incitaría a llevarlos a cabo, desincentivaría la adopción de medidas de flexibilidad interna y no sería fácil que pudiera servir como fondo de pensión cuando los despidos, como cabe esperar que ocurra al desaparecer la indemnización, se reiteran a lo largo de la vida laboral. Es cierto que teóricamente podría facilitar la movilidad (algo que ni siquiera se ha demostrado que ocurra en Austria) pero ese no es el problema principal de nuestro mercado laboral. En definitiva, prácticamente ninguna ventaja y una sola virtud: permitir que los bancos manejen el ahorro de los trabajadores, un botín suculento para hacer negocio especulativo en los mercados especulativos aunque, eso sí, a costa de un gran riesgo y volatilidad que antes o después pondría en peligro el patrimonio de las clases trabajadoras, e imponiendo más costes todavía a las empresas productivas que crean más empleo fijo.

También aprovecha el Banco de España para defender el mantenimiento de la última reforma laboral que básicamente supuso concentrar aún más poder de decisión en manos del empresariado, desequilibrando en mayor medida el ya de por sí desigual balance de fuerzas en nuestro sistema de relaciones laborales. Eso es lo único que parece interesarle.

Como he dicho, al Banco de España no corresponde hacer este tipo de propuestas de política económica y que, como todas, tienen un efecto muy desigual sobre el bolsillo y las condiciones de vida de la gente, pero no lo hace gratuitamente ni como fruto de la casualidad.

En su libro *Guardians of Finance. Making Regulators Work for Us*, James R. Barth, Gerard Caprio y Ross Levine demuestran que la crisis que comenzó en 2007 fue un "homicidio por negligencia" porque "los reguladores de todo el mundo sabían o deberían haber sabido que sus políticas estaban desestabilizando el sistema financiero mundial y, sin embargo, optaron por no actuar hasta que la crisis hubiera emergido por completo... mantuvieron políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad

del sistema. Ha sido un desastre regulatoriamente inducido. Los reguladores pusieron en peligro a sabiendas sus economías en los diez o quince años antes de la reciente crisis".

Entre esos reguladores homicidas se encuentra el Banco de España que sigue empeñado en hacernos creer que darle todavía más privilegios y poder de decisión a la banca y a las grandes empresas, provocando así nuevas crisis, es la solución de nuestros problemas. Y no se pone freno a semejante desvergüenza e indignidad.

ESPAÑA 2050: UNA BUENA IDEA, UN MAL COMIENZO

Publicado en Público.es el 21 de mayo de 2021

En abril del año pasado señalé en un artículo que no se podría hacer frente con éxito a los problemas que iba a plantear la pandemia sin poner luces largas y reflexionar sobre el horizonte de largo plazo que teníamos por delante⁵¹. Por tanto, no pude sino alegrarme de la iniciativa que puso en marcha el gobierno para hacer prospectiva y ofrecer reflexiones y estrategias a la sociedad española. Ahora, recién publicado en primer fruto de ese trabajo, es el momento de contribuir a que el debate sobre nuestro futuro como país se extienda y permita impulsar proyectos de cambio para los años venideros.

El documento *España 2050* que ayer presentó el presidente del Gobierno es una propuesta de expertos bastante rigurosa y brillante que contiene extrapolaciones de un gran número de datos y evidencias empíricas de las que se deriva una amplia batería de propuestas y medidas políticas. Si de verdad se llevaran a cabo, España protagonizaría, sin duda, otros treinta años de avances, al menos, tan positivos como los mejores que se han dado en las últimas tres o cuatro décadas.

Sin embargo, yo creo que ese documento ha nacido con taras que van a hacer muy difícil que se pueda convertir en un eje central del debate y en una guía efectiva de la acción colectiva.

Como el propio documento señala, sus prescripciones, si finalmente se asumieran, no podrían ser ejecutadas por un solo gobierno, no solo en el

⁵¹ Juan Torres. *El virus y la economía* (3): *Hacen falta luces largas*. En bit.ly/33LCT6K

tiempo, sino de una única tendencia o composición partidaria. Y siendo este un presupuesto elemental, me parece un error que el documento haya nacido no ya en el seno de un gobierno sino en el de una parte de él. El cainismo y la insensatez constituyen, desgraciadamente, el *modus operandi* de la política española así que, si de verdad se quiere poner en marcha un proyecto que vaya más allá de un partido, hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se diseña el debate. Lo ideal hubiera sido que la gestación de una propuesta de este tipo se hubiera desarrollado consensuadamente desde el principio. Ahora, solo cabe esperar el milagro de que las demás fuerzas políticas quieran hacer suyo algo que ha nacido a su margen. Es más fácil atraer a nuevos comensales si se les invita a elegir el menú que cuando se les da ya hecho, como está pasando.

También me parece equivocado haber concebido el documento como una propuesta de expertos. Este tipo de estrategias solo son viables con la connivencia, en todo su desarrollo, de quien, efectivamente, dispone del saber especializado, pero también de los técnicos que han de llevarlas a cabo y de los actores sociales. Creo que ha sido desafortunado ofrecerles a estas dos últimas partes un plato ya demasiado hecho. Sobre todo, porque uno de los fenómenos más relevantes en materia de políticas públicas que se ha puesto de manifiesto en las últimas décadas es la falibilidad de los expertos. Se han equivocado tanto y tan gravemente que cada vez son más quienes piensan que los expertos, en lugar de ser la solución, son parte del problema.

Esto último es importante porque el documento *España 2050* no es un mero ejercicio de prospectiva, como se dijo que sería; es decir, una percha donde se pueden colgar distintas prendas de vestir. Es, en realidad, una estrategia normativa porque asume preferencias evidentes y opciones políticas e ideológicas que no necesariamente son compartidas.

Y parece mentira que esto haya ocurrido de la mano del PSOE (o quizá porque no haya venido de su mano), un partido que tiene en su haber el debate social más amplio sobre un proyecto estratégico que se ha llevado a cabo en España, el Programa 2000, en cuya discusión participaron casi un millón de personas.

El éxito de un documento como el *España 2050* depende también de su credibilidad y ahí también creo que se pueden detectar algunos errores de diseño. Puesto que es evidente que nadie puede saber qué ocurrirá en el futuro, la robustez de un ejercicio de diseño estratégico como el que se ha querido hacer no depende del número de citas ni aumenta en función de la cantidad de referencias bibliográficas.

Hay que ser muy ingenuo para pensar que la gente normal y corriente, e incluso la más preparada, creará que los expertos saben lo que hay que hacer para que ocurra en 2050 lo que dicen que puede ocurrir, cuando son incapaces de decirnos si este verano iremos con mascarilla o sin ella a las playas. O que ahora pueden anticipar tendencias demográficas, de mercado de trabajo, migratorias, educativas o de gasto que nunca hasta ahora han sabido predecir con un mínimo de acierto.

El recurso a los expertos para hacer creer que así es más fiable o riguroso este tipo de documentos es una idea vieja, la expresión de un orden intelectual que se viene abajo, precisamente a causa de su fracaso para prever y para concitar apoyos y complicidades de técnicos y actores sociales. Su éxito, por el contrario, solo se puede basar en la inclusión y en la pluralidad, justo de lo que carece no ya el documento sino el proceso que lo ha hecho nacer.

Para diseñar proyectos de país y poder ponerlos en marcha con éxito no solo hacen falta buenos mensajes, productos elaborados de calidad y rigor (como puedo estar de acuerdo en que lo sea *España 2050*) sino, sobre todo, crear dispositivos de escucha que sean capaces de revelar las preferencias y los intereses colectivos, los presupuestos normativos del proyecto que, como he dicho, no pueden ser definidos por los expertos. En sociedades tan diversas como las nuestras y ante problemas complejos lo que principalmente hay que promover, movilizar y utilizar es la inteligencia colectiva, la imaginación y la creación simbióticas, más que el saber técnico, por muy necesario que este siga siendo.

Al documento del gobierno se le puede hacer, finalmente, una crítica de contenidos que a mí me parece muy importante.

En él se opta por analizar y desarrollar una serie de desafíos en virtud, según se dice, de que son claves y porque sobre ellos hay evidencia empírica pero es evidente que se dejan algunos otros que cumplen esos requisitos y, sin cuya consideración, el ejercicio estratégico que se propone puede quedar en simple fuego de artificio.

¿Como es posible creer que se puede contemplar el desarrollo económico futuro de España, la prosperidad y la salud de quienes la habitamos o la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, como se propone el documento, sin casi ni siquiera mencionar los problemas del sistema financiero, el peso de

la deuda pública y privada, el papel de la Unión Europea y del euro, entre otros asuntos capitales?

Por otro lado, el documento adolece de una especie de empiricismo recurrente, quizá creyendo que así gana credibilidad, que produce dos defectos a mi juicio fundamentales. Uno, que deja de lado lo que podríamos llamar las condiciones macro, de entorno, institucionales, el encuadre político y económico en el que se llevan a cabo los proyectos y de las que dependen las estrategias y propuestas que se realizan. El otro gran defecto es la ausencia de propuestas auténticamente novedosas, innovadoras y no meramente continuistas y derivadas linealmente del pasado, una carencia fundamental porque si algo caracteriza a la época histórica en la que nos encontramos y a la que seguramente está por venir es la disrupción constante. En este sentido, el documento es demasiado conservador, no en el sentido ideológico o partidario del término, sino en el de no ser capaz de poner en cuestión lo establecido, de adentrarse en los nuevos enfoques y conceptos ni, por supuesto, de plantear que dejen de movernos los mismos hilos que nos han guiado en el pasado. El vino nuevo no se echa en odres viejos.

En fin, hay que aplaudir que por fin se pongan luces largas en la política española y agradecer el esfuerzo a quienes desinteresada y gratuitamente, según se ha informado, han realizado este estudio. Una colaboración cívica y académica ejemplar que merece el respeto, al margen de la opinión intelectual que se tenga que ella.

En noviembre de 2018, Manuel Vicent escribió un artículo⁵² en el que señalaba lo mismo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Prologo de *España 2050*: España está considerada por estadísticas y organismos internacionales como uno de los mejores o el mejor de los países del mundo en los parámetros de los que más directamente depende la salud, el bienestar y la felicidad de las personas. Decía Vicent -yo creo que con toda la razón- que eso demuestra que "en realidad existen dos Españas, no la de derechas o de izquierdas, sino la de los políticos nefastos y líderes de opinión bocazas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero y la de los ciudadanos con talento que cumplen con su deber, trabajan y callan".

Los españoles y, en particular, quienes nos representan, tenemos una nueva oportunidad de decidir si nos ponemos en un lado u otro. Ojalá el gobierno

⁵² Manuel Vicent. Líderes. En bit.ly/3qDCFrb

tenga éxito y logre la difícil tarea de que los españoles de talento que cumplen con su deber y trabajan no permanezcan ahora callados sino que sean justamente ellos quienes diseñen nuestro futuro y les digan a los bocazas que gritan, crisan y se insultan que ese no es el camino por donde nos conviene avanzar.

COVID-19 Y DESIGUALDAD DE GÉNERO: DIFERENCIAS CON OTRAS CRISIS

Publicado en Público.es el 28 de mayo de 2021

En los últimos años se han estudiado con gran número de datos y mucho rigor los efectos muy desiguales de las crisis y recesiones económicas sobre las mujeres y los hombres. Todas esas investigaciones, entre las que destacaría las realizadas en España por las profesoras Lina Gálvez y Paula Rodríguez, muestran conclusiones muy semejantes: se destruyen más empleos ocupados por hombres pero las mujeres pierden más ingreso, un gran número de ellas cae en la pobreza y, además, se ven afectadas por otras consecuencias negativas, desde la exclusión financiera a la intensificación en los horarios de trabajo doméstico, pasando por la violencia machista o el mayor número de problemas psicológicos o de salud en general. Unos peores efectos que se agravan a medida que las mujeres forman parte de clases sociales de menor ingreso o de grupos discriminados por razones de raza o nacionalidad.

La pandemia de la Covid-19 ha producido una nueva crisis que vuelve a tener esos efectos muy desiguales sobre mujeres y hombres aunque, en este caso, tiene diferencias relevantes respecto a las anteriores que es muy importante tomar en consideración para poder adoptar políticas que avancen hacia la igualdad y el bienestar de todos los seres humanos sin distinción.

Aunque todavía es pronto para saber con certeza si estos procesos diferentes a los que se han dado en otras crisis anteriores se van a consolidar o no, vale la pena comentarlos para poder tenerlos en cuenta desde el principio.

La primera diferencia es que la crisis provocada por la pandemia produce una mayor caída en el empleo femenino.

Hasta ahora, lo normal había sido lo contrario porque el empleo de los hombres ha estado y está vinculado en mayor medida a sectores de actividad más afectados por el ciclo (actividades industriales o construcción, por ejemplo). Por el contrario, el de las mujeres suele predominar en sectores menos cíclicos, a cuya actividad habían afectado menos las idas y venidas de economía.

Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha producido un efecto contrario por dos razones y las mujeres han tenido un 19% más de riesgo de perder el empleo que los hombres

En primer lugar, porque se ha reducido la actividad en un gran número de actividades de empleo "feminizado" (hostelería, turismo, pequeño comercio...), en la economía informal o el autoempleo, en donde predominan las mujeres. En segundo lugar, porque la progresiva incorporación de las mujeres a la actividad laboral durante los últimos años ha ido disminuyendo esa diferencia, dando lugar a que cada vez más empleos ocupados por mujeres sean de los que se ven más afectados por el ciclo, es decir, los que tradicionalmente ocupaban los hombres.

Esta mayor pérdida de empleos femeninos en la crisis actual puede tener efectos muy negativos si la actividad no se recupera pronto. Sabemos por otras crisis que el empleo y el ingreso perdido en las recesiones y, sobre todo, el de quienes lo pierden después de haber accedido por primera vez al mercado laboral, se recupera con mucha más dificultad que el perdido en etapas de expansión.

Una segunda diferencia de esta crisis respecto a otras anteriores, en relación con la desigualdad de género, es que en esta se ha incrementado en mucha mayor medida la demanda de trabajo doméstico no remunerado.

Esto es algo que casi siempre ocurre en las crisis, pues suelen venir acompañadas de menos gasto de mercado en cuidados o enseñanza infantil. Pero en la provocada por la pandemia se ha producido en mucha mayor medida por el cierre total o parcial de las escuelas y porque el distanciamiento o la enfermedad han hecho más difícil el recurso a las redes familiares.

Como es sabido, el patrón de reparto del trabajo doméstico es muy desigual, pues lo realizan las mujeres en mucha mayor medida (72% de media en el mundo). Y está claramente comprobado que en estos casos se intensifica su dedicación horaria, algo que de nuevo a vuelto a ocurrir en esta crisis, incluso

cuando los hombres han estado también confinados o teletrabajando.

En concreto, se ha podido comprobar que la extensión del teletrabajo no ha producido efectos benefactores semejantes entre mujeres y hombres pues, además de esa intensificación de horarios, ha alterado la distribución del tiempo entre el trabajo y el ocio e incluso ha desempoderado a muchas mujeres en el espacio del hogar, al relegarlas a los lugares más incómodos a la hora de llevar a cabo su trabajo profesional.

Además, y para un gran número de mujeres, el tiempo de confinamiento total o parcial, de actividad limitada y cambio en el empleo o en los hábitos domésticos, puede haber supuesto un hándicap de efectos muy duraderos para sus carreras profesionales. Sobre todo, porque esas mismas condiciones han supuesto un empuje extraordinario para las personas (hombres en su gran mayoría y otras mujeres) que no han tenido que hacer frente a la pandemia con sobrecarga de trabajo. Están por ver los efectos a medio plazo de esta crisis sobre la carrera profesional o la salud de millones de mujeres.

Esas son diferencias con crisis anteriores que no cambian, sin embargo, lo fundamental: su daño sobre las mujeres es mayor que sobre los hombres y eso es, precisamente, lo que indica que promover la igualdad y diseñar las políticas contra la crisis con perspectiva de género es un requisito indispensable para hacerles frente con éxito desde el punto de vista económico y con más democracia, justicia y libertad.

Ahora bien, junto a estas diferencias negativas para las mujeres de la crisis provocada por la Covid-19, hay que considerar otras que podríamos decir que responden a procesos que sirven como fuerzas compensadoras o, incluso, me atrevería a decir que liberadoras y que es muy importante tener presentes para poderlos reforzar en la mayor medida de lo posible.

El primero de ellos es que cada vez más empresas y los responsables de las administraciones públicas empiezan a ser conscientes de las ventajas que lleva consigo la flexibilidad y la organización del trabajo que permiten una mejor combinación entre las tareas profesionales y las personales. Es cierto que no se trata, ni mucho menos, de una tendencia generalizada pero sí me parece un proceso ya en curso, que se abre paso con fuerza y que podría ser irreversible si se alienta e incentiva y si se dispone de la ayuda necesaria para consolidarlo con eficiencia y equidad. Algo muy importante para combatir la discriminación laboral y personal que sufren las mujeres.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que han sido mucho más hombres que mujeres (33% frente al 23% en España) los que han podido recurrir al teletrabajo y que muchos de ellos lo han hecho mientras que las mujeres mantenían el empleo presencial, es decir, teniendo que hacerse cargo del trabajo doméstico. Aunque aún no se dispone de evidencias suficientes, algunas investigaciones iniciales comienzan a mostrar que esto puede haber ayudado muy significativa y positivamente a cambiar las pautas de distribución del tiempo de trabajo no remunerado en el hogar, disminuyendo así la enorme brecha de corresponsabilidad que se da entre mujeres y hombres.

Es pronto para saber si eso va a abrir un proceso perdurable de cambio pero, ante esa incertidumbre, lo que hay que hacer es justamente ayudar a que se consolide esa tendencia, no solo con políticas económicas como las actuales, tendentes a asegurar el empleo remunerado femenino, sino también con otras más bien culturales que fomenten la conciencia, la necesidad de cooperación y el cambio de valores sociales.

Se ha comprobado, por ejemplo, que la incorporación de las mujeres a la actividad laboral en la segunda guerra mundial, en los empleos de todo tipo que dejaban vacantes los hombres que iban al frente, fue contingente, pues al acabar la guerra volvieron a "sus" tareas domésticas. Pero sabemos, sin embargo, que esa experiencia fue decisiva como impulso a medio y largo plazo de los cambios que llevaron a aumentar definitivamente la presencia de las mujeres en el empleo remunerado.

Se trata, pues, de una tendencia, ahora quizá solo naciente, pero cuyo brote inicial también hay que reforzar.

Una tercera diferencia positiva respecto a otras crisis es que, hasta ahora, lo normal era que, cuando las cosas se ponían feas, lo primero que se dejaba de lado eran las medidas de promoción de la igualdad. Lo vimos, sin ir más lejos, en la España de la crisis de 2008, cuando inmediatamente se dejó de aplicar la Ley de Igualdad que se había aprobado meses antes.

Ahora, sin embargo, se está produciendo un fenómeno contrario muy positivo. Precisamente como consecuencia de las demandas y luchas feministas de los últimos años, se ha conseguido que la preocupación por la desigualdad de género esté presente, casi sin excepción, en los programas de actuación que llevan a cabo los gobiernos frente a la pandemia.,

Tampoco se puede decir que se esté haciendo a la perfección, en la suficiente o deseada medida y con el éxito que debiera ser necesario para reducir todas las brechas existentes. Es cierto. Pero, si se compara con lo ocurrido en crisis anteriores en las que sencillamente se anulaban las pocas normas existentes, la cantidad de medidas de contención de la discriminación y de promoción de la igualdad que se están adoptando supone un cambio sin precedentes.

De entrada, me parece ya muy significativo y de una importancia extraordinaria que algunos organismos internacionales comiencen a elaborar rastreadores para hacer un seguimiento en tiempo real de las medidas con perspectiva de género que adoptan los gobiernos. Las cifras que proporciona el de Naciones Unidas, por ejemplo, indican que en esta crisis se está llegando mucho más lejos que nunca en estos campos⁵³. Hasta la fecha, de las 3.112 medidas gubernamentales adoptadas contra la pandemia en todo el mundo, 1.299 son sensibles al género, es decir, apoyan directamente la seguridad económica de las mujeres (287), protegen el cuidado no remunerado para evitar la discriminación (180) o abordan o combaten la violencia machista (832).

Vuelvo a decir que ni esto es aún suficiente ni algo plenamente generalizado (basta ver en ese mismo rastreador las enormes diferencias por países) pero es innegable que representa un cambio sustancial frente a lo que ocurría en crisis anteriores, cuando ni siquiera se contaba con esta preocupación.

Finalmente, no se puede olvidar algo fundamental: nunca antes en la historia se había vivido una crisis con un número tan elevado de mujeres (aunque todavía sea insuficiente) a cargo de las más altas responsabilidades en el gobierno o las empresas.

También es pronto para comprobar si su presencia ha sido o no decisiva para darle un giro a las políticas. Para lograr que la gestión de los problemas sociales o empresariales responda a principios distintos a los que imprimen los hombres que llevamos cientos o incluso miles de años imponiendo los valores de la espada frente a los femeninos del cáliz, por utilizar los términos del magnífico libro de Riane Eisler (*El cáliz y la espada. De las diosas a los dioses: culturas pre-patriarcales*) que acaba de publicar la editorial Capitán Swing.

Lo que está claro, en todo caso, es que sigue siendo fundamental tener presente que la crisis afecta de modo desigual a mujeres y hombres, que es muy injusto

⁵³ COVID-19 Global Gender Response Tracker. En bit.ly/3KmrQl

tratar igual a los desiguales, y que es imprescindible tener en cuenta las diferencias con las anteriores crisis y los nuevos procesos que se abren paso a la hora de diseñar las (imprescindibles) políticas de igualdad.

UNA AGENDA INÉDITA QUE ACABA CON CUARENTA AÑOS DE MENTIRAS

Publicado en Público.es el 4 de junio de 2021

Desde los años ochenta del siglo pasado, cuando comenzaron a liberalizarse los movimientos de capital y a crearse espacios prácticamente libres de impuestos, los paraísos fiscales que permiten eludirlos a las grandes empresas multinacionales, multitud de economistas críticos, activistas y organizaciones de todo tipo venimos pidiendo que se acabe con esa injusticia tan vergonzosa.

La respuesta de los economistas al servicio de las corporaciones, de los líderes políticos y los organismos internacionales era siempre la misma, a pesar de que la evidencia demostraba lo contrario: es técnicamente imposible evitar esa elusión fiscal y, además, no conviene hacerlo porque entonces se perjudicaría a la inversión y el empleo.

Mentían descaradamente y la prueba de que llevábamos razón es que este fin de semana se reúne el G7, el grupo de los siete países más poderosos del planeta, para discutir una propuesta del presidente de Estados Unidos verdaderamente revolucionaria, al menos, en comparación con lo que hasta ahora viene ocurriendo: establecer un impuesto mínimo internacional sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

La práctica habitual de estas grandes corporaciones consiste en manipular su contabilidad para ubicar los beneficios que obtienen en diferentes países en aquellos en donde los impuestos son mínimos o incluso inexistentes y eso es lo que trata de evitar la propuesta que Estados Unidos ha puesto sorprendentemente sobre la mesa.

En estos momentos no se sabe la fórmula exacta que finalmente adopte el G7 (incluso puede ser que ahora no apruebe nada y traslade la decisión a la reunión de julio del G20) pero es muy improbable que la medida tenga marcha atrás, así que podemos decir que, por fin, la suerte de los paraísos fiscales y de la elusión fiscal generalizadas comienza a estar echada.

El impuesto que se está proponiendo tendría dos pilares. Por un lado, todos los países dispondrían de una parte de las ganancias obtenidas por las empresas multinacionales en su territorio y, por otro, también podrían establecer una tasa mínima adicional sobre los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas que tengan sede en su jurisdicción.

A partir de ahí, sin embargo, pueden surgir diferentes alternativas que pueden hacer más o menos efectivo el impuesto, generar distintos volúmenes de ingresos fiscales y producir un reparto de la recaudación también más o menos desigual entre los países.

Estados Unidos, por ejemplo, ya ha bajado su propuesta inicial del 21% al 15%, propone que al aprobar este impuesto desaparezcan los que hasta ahora han venido estableciendo algunos países sobre empresas de servicios digitales y contempla umbrales de ingresos que haría más reducido el número de multinacionales afectadas. La OCDE, por su parte, está materializando la propuesta de Estados Unidos de forma que beneficie principalmente a los países más ricos (10% de la población mundial y 45% del PIB) porque contempla que la mayor parte del ingreso fiscal adicional (60% del total) vaya a los países en donde tienen su sede las grandes corporaciones, justamente los del G7 y algunos pocos más.

Desgraciadamente, el carácter nada democrático de estos encuentros de los países más poderosos impide que se discutan y aprueben otras propuestas más eficaces y equitativas.

Por ejemplo, la de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional que propone que el tipo de un impuesto de esta naturaleza sea del 25%; u otra mucho más elemental y justa de Tax Justice Network: la distribución del ingreso adicional que se obtenga en función del lugar en dónde se lleve a cabo la actividad real (ventas y empleo) de las empresas multinacionales y no principalmente de su sede.

Las diferencias según se adopten unas soluciones u otras son considerables. Con esta última de Tax Justice Network no solo se conseguiría más equidad y no seguir perjudicando a los países más pobres sino recaudar más (460.000 millones de dólares anuales) que con la propuesta de la OCDE (275.000 millones) con la misma tasa del 15%, o 640.000 millones frente a 540.000 millones, con una del 21%.

En estos momentos es imposible saber cómo concluirá la cumbre y, mucho menos, la solución de imposición internacional que finalmente se adopte. Incluso cabe temer que la propuesta inicial de Estados Unidos siga avanzando a la baja, sobre todo, porque los líderes europeos no están siendo capaces de asumirla con decisión. Pero, sea cual sea el resultado, lo cierto es que se ha tenido que reconocer por fin que los privilegios concedidos a las grandes empresas son una vergüenza y que los argumentos ofrecidos durante todos estos años para mantenerlos son simples mentiras.

La propuesta que está en la agenda del G7 es inaudita e incluso revolucionaria, como he dicho, pero queda todavía mucho camino por delante. Con mayor o menor convicción, con ella se reconocen de facto dos principios fundamentales. Uno, que las empresas multinacionales maximizan sus beneficios a escala mundial y que, por tanto, deben estar sujetas a impuestos globales; y otro, que estos impuestos deben ser de mínimos en todos los países, para que no haya posibilidad de que trasladen sus beneficios de un lugar a otro. Quedan por reconocer de modo efectivo otros dos también fundamentales que plantea Tax Justice Network: obligar a que las empresas multinacionales proporcionen información transparente, actualizada y rigurosa sobre su actividad y beneficios en todos los países en donde llevan a cabo su actividad, y ubicar la toma de decisiones en organismos como Naciones Unidas y no G7, G20 o la OCDE, en donde puedan estar representados todos los países y no solo los más ricos y poderosos.

Si se ha conseguido lo más difícil, echar por tierra las mentiras neoliberales de los últimos decenios, no será imposible conseguir lo que queda por delante.

EL BANCO DE ESPAÑA VUELVE A ENGAÑAR A LOS ESPAÑOLES

Publicado el 9 de junio de 2021 en Público.es

Hace unos días, el Banco de España ha publicado un informe sobre el efecto que supuestamente tuvo la subida del salario mínimo⁵⁴ cuyos resultados han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación en términos como los siguientes:

El País: El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos⁵⁵.

20 Minutos: El Banco de España asegura que la última subida del salario mínimo lastró la creación de hasta 180.000 empleos⁵⁶.

El Mundo: El Banco de España constata que la subida del SMI redujo el empleo en hasta 174.000 puestos en pleno intento de Díaz por volver a aumentarlo⁵⁷.

Expansión: El Banco de España calcula que la subida del SMI pudo destruir

⁵⁴ Cristina Barceló, Mario Izquierdo, Aitor Lacuesta, Sergio Puente, Ana Regil y Ernesto Villanueva. Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España. Banco de España. En bit.ly/33mItwV

⁵⁵ bit.ly/3If3QyW

⁵⁶ bit.ly/3GEn9RS

⁵⁷ bit.ly/3FCsCan

hasta 173.500 empleos en 2019⁵⁸.

Cinco Días: La subida del salario mínimo en 2019 privó de empleo a mayores y jóvenes, según el Banco de España⁵⁹.

El efecto del informe del Banco de España es, por tanto, evidente: la subida del salario mínimo que realizó el gobierno de Pedro Sánchez fue negativa para la economía española pues dañó al empleo, el problema que más duele a todos nuestros compatriotas desde hace años. Tratar de subirlo de nuevo, como pretende el gobierno, sería insistir en algo que ha funcionado mal, así que el informe del Banco de España constituye un clarísimo aviso a navegantes: no se les ocurra volver a subirlo.

Así, el Banco de España se constituye, una vez más, en lo que no debe ser porque no tiene competencias para ello, el árbitro que decide qué medida de política económica es deseable y cuál no. Algo curioso, como he señalado ya muchas veces, porque resulta que falla estrepitosamente a la hora de llevar a cabo las funciones de control y supervisión financiera que sí le corresponden (provocando costes elevadísimos para todos los españoles) y, sin embargo, se mete a dar consejos donde nadie se los pide ni tiene por qué darlos.

Muchas personas creerán de buena fe que si este tipo de informes del Banco de España sirven para orientar y resaltar lo que está bien o mal hecho deben ser, al fin y al cabo, bienvenidos, aunque eso le lleve a suplantar las funciones que corresponden a los poderes democráticamente elegidos para tomar las decisiones de política económica.

El problema radica en que el Banco de España no suministra en sus informes una opinión objetiva, técnica, científica, neutra o indiscutible, sino subjetiva, ideologizada y sesgada por las hipótesis, valores y métodos de análisis que utiliza. La realidad es que el Banco de España, como cualquier organismo o economista, puede llegar a las conclusiones que previamente haya deseado alcanzar según los presupuestos de los que parta. Y eso es justamente lo que ocurre con el informe sobre el salario mínimo que acaba de publicar.

Los titulares de prensa que he presentado al comienzo de este artículo no dejan lugar a dudas sobre lo que ha conseguido el Banco de España con su reciente

⁵⁸ bit.ly/3I6PznQ

⁵⁹ bit.ly/3Ac4qL5

informe: hacer creer a la inmensa mayoría de la población que la subida del salario mínimo ha sido negativa porque destruyó empleo, a la vista de los análisis sofisticados y aparentemente científicos que han utilizado sus autores.

Sin embargo, no es muy difícil mostrar que la realidad de las cosas es bastante diferente al mensaje que traslada el Banco de España.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el año 2019 la población ocupada en España aumentó en 402.300 personas.

En ese mismo periodo, la población de entre 16 y 19 años ocupada aumentó en 10.400 personas, la de 20 a 24 en 46.700, la de 25 a 29 en 23.000 y la de más de 65 en 19.600 personas.

Por tanto, no es verdad que el aumento del salario mínimo haya destruido empleo en España en ese año, y ni siquiera entre los más jóvenes o los de mayor edad. Y, si lo hubiera destruido por un lado, se ha ganado por otro.

Es verdad que el informe del Banco de España no dice exactamente lo que señalan los titulares de los medios, sino que el efecto de la subida fue un menor crecimiento del empleo en el colectivo con menos salarios. Pero es imposible saber si esa subida del salario mínimo destruyó el empleo de esas personas que podría haberse generado si no se hubiera dado porque el propio informe reconoce que es muy difícil determinar de forma inequívoca qué personas lo perciben. Y, por otro lado, no se puede concluir que fue la subida del salario mínimo la que produjo un menor aumento de la creación de empleo sin haber analizado la incidencia de otros factores que hubieran podido contribuir a ello.

Si el Banco de España fuese una institución responsable y trabajara con independencia y pluralidad al servicio de los intereses generales y no del poder financiero privado, no haría este tipo de anuncios. Haría una evaluación general y sin sesgos de los efectos de las medidas de política económica sobre el empleo y no solo de los que le interesa descalificar por motivos ideológicos.

¿Por qué no analiza y denuncia el Banco de España el efecto sobre el empleo de la desigual carga fiscal que soportan las empresas españolas como consecuencia del fraude y la elusión de las grandes? ¿Por qué no cuantifica los costes que soportan las pymes y el empleo que pierden como consecuencia de que las grandes empresas no cumplan la ley en materia de pago a proveedores?

¿Y por qué no señala la destrucción de empleo que conlleva la falta de competencia que eleva artificialmente el coste de los suministros o los financieros, o los obstáculos que tienen las pymes para concurrir a la contratación pública?

El Banco de España vuelve a extralimitarse en sus funciones, vuelve a ofrecer conclusiones ideológicas a partir de análisis sesgados y vuelve a mentir a los españoles haciéndole creer que no deben adoptarse las medidas que aumentan su bienestar y mejoran el funcionamiento de la economía para defender así los intereses exclusivos de las grandes empresas y la banca.

LA DEUDA, UNA BOMBA A DESACTIVAR POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS

Publicado en Público.es el 11 de junio de 2021

Los últimos datos publicados sobre la evolución de la deuda en todo el mundo vuelven a mostrarnos que estamos sentados sobre una bomba que va a estallar sin remedio, si no se adoptan medidas adecuadas para desactivarla.

Los datos que acaba de publicar el Banco Internacional de Pagos son impresionantes. La deuda que acumula el sector no financiero de las economías es de 221,4 billones de dólares, de los cuales casi la mitad (106,8 billones) corresponden a China (44,8 billones) y Estados Unidos (62 billones).

El endeudamiento de los hogares es de 53,8 billones de dólares, el de los gobiernos de 83,4 billones, el de las sociedades no financieras 78,6 y el del sector financiero 65 billones de dólares. En total, unos 286 billones de dólares, unas 3,5 veces el valor del producto mundial.

Estos datos son graves no solo por su cuantía sino por el crecimiento vertiginoso que vienen registrando en los últimos años y que se ha acelerado a causa de la pandemia. Según el Banco Internacional de Pagos, la deuda total del sector no financiero ha aumentado en 65,5 billones en los últimos 5 años y se ha triplicado desde 2000.

En la Unión Europea la situación es parecida, demostrándose que las mal llamadas políticas de austeridad no sirven para disminuir la deuda sino justamente para todo lo contrario. Según los últimos datos de Eurostat, la deuda pública de toda la Unión es de 12 billones de euros y de 11,1 billones para la

Eurozona. La de los hogares de los países que conforman el euro es de 7,1 billones de euros y el de las sociedades no financieras de 11,9 billones.

La factura de esta deuda es igualmente impresionante. En 2020, en plena pandemia, los países de la Eurozona tuvieron que dedicar 172.706 millones de euros a pagar intereses (191.646 millones la Unión Europea). Desde 2000, la deuda de la Eurozona ha aumentado en 6,8 billones y esa es prácticamente la misma cantidad que ha pagado en ese tiempo en intereses, es decir en retribución a bancos que le han prestado dinero creado, en su práctica totalidad, de la nada, sin ningún coste para ellos.

El crédito es un instrumento fundamental para el buen funcionamiento de las economías, pues se necesita para financiar inversiones a largo plazo o para hacer frente a situaciones extraordinarias, como la provocada por la pandemia. Es tan importante que debería considerarse como un servicio público esencial, cuya provisión en condiciones de eficiencia, rigor y buen control, estuviera siempre garantizada para las empresas, hogares o gobiernos que lo necesiten realmente. Pero lo que está ocurriendo en el capitalismo de nuestros días es que, en lugar de proporcionarse crédito como un medio necesario para crear riqueza, su crecimiento constante se ha convertido en un fin. Algo que tiene consecuencias funestas porque obliga a seguir endeudándose continuamente para seguir pagando la deuda, drenando recursos que podrían dedicarse a crear riqueza productiva.

Para entender por qué ha ocurrido eso solo hay que saber algo muy simple: la deuda no es un capricho de los deudores, ni una desgracia, ni el resultado de malas políticas, sino un negocio. El negocio de la banca, la institución más poderosa del planeta que utiliza ese poder para imponer políticas, leyes y modelos económicos que obligan a recurrir constantemente al crédito y a pagar innecesariamente intereses por el dinero que prestan.

La avaricia de la banca que tiene el privilegio de prestar dinero que crea de la nada, el no saber detenerse y la tiranía del interés compuesto que multiplica la deuda sin cesar nos está llevando a una situación tan injusta como insostenible.

Si no se frena la escalada de la deuda será inevitable que volvamos a sufrir crisis financieras cada vez más peligrosas, por recurrentes y destructivas. Guste o no guste a la banca, será inevitable ponerle fin a su crecimiento continuado, y eso se puede hacer por las buena o por las malas.

Por la buenas, mediante acuerdos políticos, asumiendo que la banca ya ha ganado lo suficiente y destruido demasiado, aceptando la suspensión del servicio de la deuda en los países más empobrecidos y quitas y reestructuraciones negociadas en todo el planeta. Por las malas solo hay dos formas de reducir la deuda insostenible, la inflación galopante y la guerra a gran escala.

Estamos a tiempo de elegir un camino u otro. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen la palabra y los pueblos la capacidad de presionar y de hacer oír su voz para exigir soluciones eficientes, justas y pacíficas.

EL VERDADERO PELIGRO DE LA INFLACIÓN QUE SE AVECINA

Publicado en Público.es el 18 de junio de 2021

Los hechos no dejan lugar a dudas: los precios están subiendo en todas las economías y, en algunos casos, muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia. En Estados Unidos, la tasa de variación anual ha sido del 5% en mayo pasado, cuando el objetivo de la Reserva Federal es del 2%; en Europa, la subida anual es mucho menor, del 2%, pero iguala ya el máximo establecido por el Banco Central Europeo. En España, ha sido del 2,7%, pero si se contemplan las subidas en algunos sectores o bienes y servicios concretos, es muchísimo mayor: la gasolina de 95 octanos ha subido un 23% en el último año, el transporte en general un 9,4%, el conjunto de electricidad, gas y otros combustibles un 25,5%, los servicios Covid-19 un 6,9% y la vivienda un 10,4%.

Sobre las causas inmediatas de esta subida no hay gran discusión entre los economistas porque están bastante claras:

- Los confinamientos provocaron una gran caída de la demanda en muchos sectores y, por tanto, de los precios. Eso hizo que los índices generales que sirven de base de referencia bajaran, de modo que la recuperación ha provocado lógicamente un repunte inevitable, no demasiado preocupante si solo significa una vuelta a la normalidad de los intercambios.
- Las medidas contra la Covid-19 también dieron lugar a cierres de la producción en muchas actividades de producción y distribución que han ocasionado cuellos de botella en las redes de suministro. Eso provoca escasez de muchas materias primas y productos que igualmente ocasiona subidas de precios muy elevadas: la madera ha llegado a subir casi un 400%, los fletes

marítimos un 300%, la gasolina un 197% y el petróleo un 147%, el aluminio el 99%, el estaño el 89%, el cobre el 80%, la colza el 72%, el maíz el 64%, el platino el 66%, el algodón el 50%... y así muchos otros.

Los cuellos de botella incluso se están dando en los mercados laborales. Muchas empresas, sobre todo las que utilizan empleo de bajo salario, indican que encuentran dificultades para disponer de trabajadores, bien porque requieren nuevas cualificaciones al haberse reinventado, bien porque los subsidios y ayudas se mantienen tan generosos que no compensa el empleo de muy bajo salario.

– Finalmente, todo eso se ha producido cuando la vuelta a la normalidad ha estado acompañada de un gran incremento de gasto por parte de los gobiernos y de un ahorro acumulado extraordinario que, al comenzar a gastarse, impulsa fuertemente la demanda.

Sin embargo, sí que hay un fuerte debate sobre la posibilidad de que estas subidas se consoliden, iniciando un proceso inflacionario generalizado en todas las economías que obligara a tomar medidas excepcionales.

Esta tesis es la que mantienen en Estados Unidos quienes consideran que los programas de gasto de la administración Biden están siendo excesivos y que producen un sobrecalentamiento de la economía que inevitablemente va a desencadenar una fuerte inflación. Entre sus defensores no solo están los economistas más conservadores y vinculados al Partido Republicano sino otros como Larry Summers y Olivier Blanchard que, curiosamente, justo antes de la pandemia mantenían que la economía de Estados Unidos sufría un "estancamiento secular" por escasez de demanda.

La mayoría de los dirigentes de los grandes bancos centrales coinciden en reconocer que se está produciendo un brote inflacionario pero que es de carácter temporal, de modo que no hay necesidad de tomar, por ahora, medidas contundentes para tratar de frenarlo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho repetidamente en las últimas semanas que está concentrado en volver al pleno empleo y que no se dejará influir por aumentos temporales de la inflación. El gobernador del Banco de Inglaterra ha dicho que observa la inflación "con mucho cuidado" pero sin preocuparse. Diversos responsables del Banco Central Europeo han reiterado más o menos lo mismo, que las subidas de precios no se prolongarán en el tiempo y que en la zona euro

no hay riesgo de sobrecalentamiento.

Es lógico que los banqueros centrales digan eso porque saben perfectamente que una de las causas que siempre tiene la inflación es que haya expectativas de que va a producirse. Por eso, y aunque sepan que puede ocurrir lo contrario, nunca van a reconocerlo de antemano. De hecho, la historia económica nos enseña que los procesos inflacionarios se desencadenan siempre sin previo aviso y cuando todo el mundo se empeñaba en decir que no iban a producirse.

Como yo no tengo esa obligación, mantengo una opinión menos optimista sobre lo que puede ocurrir con las subidas de precios que ya han empezado a darse. No creo que vayan a ser tan temporales como se dice, creo que pueden extenderse al conjunto de la economía y, sobre todo, me preocupa que los bancos centrales utilicen, cuando esto se produzca, un remedio que sea peor que la enfermedad.

Las principales razones que me llevan a pensar que la inflación puede llegar para quedarse durante algunos largos años son las siguientes:

- Los cuellos de botella y los problemas de oferta que provocan subida de precios no están ocasionados solamente por la pandemia. Con anterioridad, se había comenzado a manifestar una crisis industrial en casi todo el mundo que se manifestaba en la caída de la tasa de beneficio y de producción en sectores estratégicos. La pandemia no la ha resuelto y lo que nos vamos a encontrar, cuando volvamos enteramente a la normalidad, es un recrudecimiento de esa crisis previa.

- Las mencionadas subidas de precios en las materias primas y en muchos productos básicos para la producción de casi todos los bienes y servicios tampoco tiene que ver exclusivamente con factores coyunturales, sino con la endémica falta de competencia en los mercados capitalistas. El caso del transporte marítimo que tanto influye en el aprovisionamiento y los costes es claro: siete de los grandes armadores de contenedores controlan el 75% del mercado y tres alianzas el 80% del transporte marítimo. Y más o menos lo mismo ocurre en otros sectores cruciales: dos empresas controlan el 75% del comercio mundial de granos y cuatro el 80% del comercio mundial de alimentos o el 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales, por poner solo algún ejemplo.

- Las subidas de precios no se están produciendo solo porque suban los costes

sino como una estrategia de muchas empresas para recuperar la rentabilidad perdida en un contexto de expansión de la demanda.

– La globalización que había permitido deslocalizar el empleo hacia los países con salarios muy bajos, disminuyendo así el poder de negociación de los trabajadores, está en crisis y no va a volver a producirse, al menos, con tanta facilidad como antes. Será más fácil, pues, que haya subidas de salarios que presionen sobre los precios.

– China ha cambiado su modelo productivo y está comenzando a centrar el impulso de su economía en el mercado interno más que en las exportaciones y esto le obliga a acaparar un suministro de materias primas y bienes intermedios que antes fluía a la economía internacional, tensionando así sus precios de forma permanente.

– La pandemia, la desarticulación sectorial que se produce y otros factores diversos pueden frenar la productividad durante bastante tiempo y eso presionará también al alza los precios.

– La transición ecológica es inevitable y también lo es que vaya acompañada de subidas de precios porque implica costes de producción y distribución más elevados.

– Sabemos por experiencia que la inflación se autoalimenta así que puede bastar con que las subidas de precios se produzcan durante unos meses para que se disparen durante mucho un periodo mucho más prolongado.

En resumen, es difícil saber qué va a pasar en los próximos meses o años con las subidas de precios, pero lo cierto es que hay diversas circunstancias que permiten sospechar que no van a ser tan circunstanciales como las autoridades monetarias están obligadas a decir que serán para no provocarlas ellas mismas.

Lo importante, sabiendo que las subidas de precios son inevitables tras una pandemia que produce distorsiones en los mercados, es saber qué hacer si estas subidas son algo más que puntuales, si aumentan sustancialmente y prolongan en el tiempo.

Lo que me preocupa al respecto es que los bancos centrales y los economistas de opinión dominante en general han mantenido hasta ahora tesis sobre los

procesos inflacionarios que se ha podido comprobar que estaban equivocadas.

Se ha demostrado, por ejemplo, que es falso que haya que aumentar el desempleo y reducir el nivel de actividad para frenar la inflación⁶⁰. Y, en concreto, que para evitar que suban los precios hay que moderar las subidas salariales. Para Estados Unidos se ha demostrado, por el contrario, que si la Reserva Federal quiere mantener su objetivo de inflación lo que debe hacer es dejar que los salarios reales crezcan más rápido que la productividad laboral durante algunos años⁶¹.

También se ha comprobado que es falsa la creencia que ha servido para diseñar y justificar las políticas económicas de los últimos años. Se decía que las economías se pueden estabilizar, simplemente controlando la inflación con una política monetaria activa y con recortes de gasto. La realidad es que estas políticas ni han evitado las crisis ni han estimulado la recuperación cuando estas se han producido.

Por el contrario, la pandemia ha terminado de demostrar que la política fiscal es fundamental para evitar el colapso, no sólo garantizando la demanda y la actividad, sino creando capital e impulsando y dando salida a la oferta cuando los mercados se bloquean.

Por tanto, el mayor peligro que puede producir la inflación que inevitablemente se avecina es que los bancos centrales vuelvan a equivocarse tratando de hacerle frente simplemente con subidas de tipos de interés, provocando más desempleo y reduciendo la capacidad inversora de los gobiernos cuando las empresas no tienen capacidad de generar el capital necesario para recuperar la producción.

En Estados Unidos parece que lo tienen claro y no se van a dejar llevar de momento, por los viejos errores. En Europa, la situación no está tan clara. Un documento reciente de La Comisión Europea⁶² reconoce y recomienda a los gobiernos que den prioridad a las inversiones pero también plantea que deben comenzar a abordarse reformas presupuestarias estructurales, en la misma línea

⁶⁰ Claudia Fontanari, Antonella Palumbo, and Chiara Salvatori. Slack in the Economy, Not Inflation, Should Be Bigger Worry. En bit.ly/3fCWzMS

⁶¹ Lance Taylor and Nelson Henrique Barbosa Filho. Mainstream Economists Have Been Using a Misleading Inflation Model for 60 Years. En bit.ly/3FIUwS6

⁶² Economic policy coordination in 2021: overcoming COVID-19, supporting the recovery and modernising our economy. En bit.ly/3IdllQ7

de vuelta a la austeridad que reclamó hace unos días en The Financial Times el antiguo ministro de Finanzas alemán y actual presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble: "La paz social de Europa requiere un retorno a la disciplina fiscal"⁶³.

O los gobiernos y los bancos centrales cambian y dejan a un lado los viejos dogmas que no han funcionado y entienden que ahora las subidas de precios se producen por problemas de oferta que requieren inversión pública, demanda sostenida y empleo, o vamos a tener una vuelta a la normalidad que será más dura y costosa que la propia pandemia.

⁶³ [ft.com/33sAyxW](https://www.ft.com/33sAyxW)

EL BLUF DE LAS AUDITORÍAS DEL GOBIERNO ANDALUZ

Publicado en Eldiario.es con Teresa Duarte Atoche el 1 de agosto de 2021

Desde que comenzó a forjarse el actual Gobierno andaluz con el apoyo explícito e imprescindible de Vox, esta formación de extrema derecha reclamó que se hicieran auditorías para demostrar que el llamado sector instrumental de la Junta de Andalucía era un conjunto de "chiringuitos" al servicio del PSOE. Sus dirigentes exigen desmantelarlo porque "cuesta una fortuna a los andaluces, no aporta beneficio alguno a la gestión de lo público" y solo sirve para que los socialistas controlen el presupuesto. De hecho, la realización de tales auditorías fue una de las condiciones que impuso Vox al Partido Popular y a Ciudadanos para que pudiera constituirse el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno.

Ahora, dos años y medio después, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha presentado sus resultados resumidos en un informe titulado 'Auditorías del sector público instrumental'. Sorprendentemente, el Gobierno tan solo ha publicado hasta ahora 33 de las 54 auditorías realizadas. Por lo que indica el informe, las auditorías no han cuantificado el supuesto derroche millonario de todos esos organismos sino que se limitan a presentar sus resultados haciendo referencia a cuatro grandes problemas. Y, con independencia del análisis pormenorizado de estas auditorías que se podrá hacer una vez que se publiquen todas ellas, lo que muestra ese documento dista mucho de los juicios que ha venido haciendo la derecha andaluza sobre la gestión del PSOE cuando, solo o en coalición, ha gobernado Andalucía. El primer problema analizado es la duplicidad de su funciones y competencias respecto a la administración general.

Según el informe del Gobierno andaluz, tan solo habría cinco entes en donde

se produce esa duplicidad, lo que significa que el supuesto "gran problema" únicamente se da en el 9,2% de los 54 casos analizados. Aunque en las conclusiones, como veremos enseguida, se cambia de criterio y se dice que son 20. No sabemos si en las auditorías hay más entes con este problema pero es fácil deducir que, si realmente los hubiera, habrían aparecido igualmente mencionados en este informe.

El segundo problema que, según el informe, ha sido detectado por las auditoras es la mala gestión, pero también en este caso sorprenden los resultados. Tan solo se mencionan seis casos en donde se haya detectado, lo que significa que solamente habría mala gestión en el 11,1% de los entes estudiados, en el 6,5% del total de 92 existentes, o en el 1,8% si a estos últimos se les añaden los organismos en los que la Junta de Andalucía solo tiene una pequeña representación.

El tercer problema que, según dice el informe, han puesto sobre la mesa las auditorías es el relativo a los recursos humanos. Al respecto afirma que en el sector hay un "caos organizativo", una expresión muy contundente y muy poco propia del lenguaje de la auditoría, por lo que sería interesante saber si realmente ha sido utilizada por las empresas que las han realizado o si es producto exagerado del Gobierno andaluz, tan deseoso como está de poner en solfa la herencia socialista.

Lo curioso es, sin embargo, que el informe presentado por el Gobierno prácticamente se limita a señalar como fuente o expresión de este "caos" a la existencia de 66 convenios colectivos. Algo sorprendente porque su existencia nunca puede ser el resultado de un capricho sino de un imperativo legal y porque, lejos de expresar desorden, más bien indica que las relaciones laborales están claramente normativizadas.

En el terreno laboral señala el informe otros problemas como los sueldos por encima de los de la administración o del mercado en algunos organismos, la alta litigación contra la administración o la contratación innecesaria. Pero también en este caso lo cierto es que solo se vuelven a citar seis casos de organismos con irregularidades de este tipo (de nuevo el 11,1% de los organismos estudiados). Insistimos, es posible que las auditorías hayan encontrado más pero vuelve a ser sorprendente que, si fuese así, los redactores del informe no hayan utilizado los números "de infarto" que anticipaban los líderes de la derecha andaluza para

demostrar, sin ningún género de dudas, su tesis sobre la maldad de los gobiernos de izquierda anteriores.

Finalmente, el informe indica que las auditorías han evaluado la utilidad pública de los entes del sector instrumental. Este sería el apartado, por tanto, en el que debería corroborarse la tesis original de Vox que luego hicieron suya el Partido Popular y Ciudadanos. Pero el informe vuelve a dar aquí una sorpresa pues señala que las auditorías tan solo consideran que carezcan de utilidad pública tres entes, a saber, el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, la Fundación Doñana 21 y la Red de Villas Turísticas de Andalucía.

¿Tanto bochinche como el orquestado por Vox, tantos insultos y acusaciones, tanta amenaza con las auditorías para que ahora las empresas auditoras tan solo reconozcan a tres entes de más bien poca monta como carentes de utilidad o beneficio público?

El informe hace referencia, por último, a las conclusiones y "recomendaciones más relevantes" de las auditorías y aquí es donde se comprueba finalmente que toda la campaña contra la administración "paralela" de los gobiernos socialistas que los partidos de la derecha andaluza han orquestado durante años es un auténtico bluf.

Según el informe de la Junta de Andalucía, las auditorías encuentran que hay duplicidades, como hemos dicho anteriormente, en 20 de los 54 organismos analizados, es decir, en poco más de la tercera parte, no en la totalidad, como se dice. Y, en todo caso, las auditorías no señalan, o al menos no lo advierte el informe, que eso sea un problema que deba obligar a extinguirlos. Otras seis entidades "podrían mantenerse con cambios leves", 14 deberían o extinguirse (1) o fusionarse o integrarse (13) y "habría que reconfigurar" otras 13, aunque - como prueba del desorden con que se presenta el informe- en este grupo se incluyen alguna cuya extinción se propone.

Y a todo lo anterior hay que añadir una última consideración. Según el informe, las auditorías se han realizado, como hemos dicho, sobre 54 de los 92 organismos o agencias que forman parte del sector instrumental, es decir, más o menos la mitad de todos ellos. ¿Alguien puede creer que las empresas auditoras contratadas por el Gobierno han dejado sin analizar precisamente a los que peor funcionan? Nosotros más bien tenemos la sospecha de que ha sido al revés, se ha auditado justo la parte del sector instrumental con mayores problemas de gestión. Pero ni siquiera así se puede decir, como hace la derecha,

que TODO él sea ineficiente y que esté justificado o tenga fundamento el completo desmantelamiento que propone Vox.

A la vista de lo expuesto en el informe que estamos comentando, lo que se ha producido es un auténtico fiasco. El Gobierno andaluz, llevado de un prejuicio y de la presión de la extrema derecha, contrata a empresas privadas para que hagan una auditoría que tiene como objetivo realizar "una disminución generalizada de las entidades existentes" en el sector instrumental de la Junta de Andalucía, según dice literalmente el informe. Sin embargo, una vez realizadas las auditorías no se deduce claramente que esa sea la solución necesaria para la generalidad de los entes que lo conforman

Quienes firmamos este artículo hemos defendido siempre que el dinero público se gaste con estricto rigor, con plena pulcritud y transparencia absoluta hasta el último euro. Aunque solo hubiera un ente con mala gestión o despilfarro, ya sería mucho en nuestra opinión, vaya eso por delante. En muchas ocasiones hemos reclamado reformas que impidan no ya la corrupción, sino el uso ineficiente del dinero público. Por tanto, no vamos a quitar importancia a la mala gestión, a las duplicidades funcionales, al descontrol o a la falta de justificación que pueda haber o haya habido en el sector instrumental de la Junta de Andalucía cuando ha gobernado el PSOE. Pero eso es una cosa y otra hacer creer, como ha pretendido hacer la derecha andaluza, que todo este sector es ineficiente, derrochador, carente de utilidad pública y que, por tanto, deba desaparecer por ser una creación demencial o corrupta del Partido Socialista.

Es el propio informe de la Junta de Andalucía que acabamos de glosar el que pone de relieve que ese tipo de problemas solo se produce en algunos casos y no con generalidad. Y, además, estaría por demostrar que ese mal funcionamiento o el sobre coste que lleve consigo (una vez cuantificado) sea algo inherente a la naturaleza instrumental de esos organismos o si se debe a defectos que igualmente pueden darse en la administración general. Y que, por supuesto, hay que solucionar.

Con este informe, es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia. Prueba de ello es, por un lado, que el propio Gobierno de la derecha no solo siga utilizando los organismos del sector instrumental de la Junta de Andalucía

sino que haya creado otros nuevos. O, por otro lado, que en los últimos dos años y medio apenas haya reducido el personal laboral contratado por los 92 entes, pues tan solo ha disminuido de 28.981 a 28.443, es decir, 538 personas en toda Andalucía.

El ruido que durante estos últimos años ha levantado la derecha andaluza sobre este problema es una clara manifestación más de la mala fe y de la impresionante falta de ética que domina la política española.

Hay que reformar la administración pública andaluza, por supuesto que sí. Hay que acabar con las duplicidades, ineficiencias y sobrecostes innecesarios. Esa es también nuestra opinión. Y pensamos que criticar la gestión de los adversarios políticos no solo está bien sino que es obligado. Pero el diseño de esas reformas y esa crítica han de hacerse con honestidad y rigor y no a base de engaños y presunciones carentes de fundamento, como en el caso que hemos comentado. La derecha andaluza que se proclama tan patriota hace un flaco servicio a sus compatriotas cuando actúa de esta forma. Los andaluces y todos los españoles necesitamos un planteamiento más honesto de los problemas que efectivamente tenemos, más concordia y respeto a la verdad y al honor. Todo lo contrario de lo que, en este caso, está haciendo la derecha que gobierna la Junta de Andalucía con el apoyo y la inspiración del extremismo de Vox.

EL GOBIERNO ANDALUZ HA MENTIDO AL INFORMAR SOBRE LAS AUDITORÍAS

Publicado con Teresa Duarte Atoche en Público.es el 11 de agosto de 2021

El pasado 27 de julio, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, presentó un informe sobre las 54 auditorías que se han realizado sobre el llamado sector público instrumental de la Junta de Andalucía. Unas auditorías que responden al compromiso que tuvieron que asumir el Partido Popular y Ciudadanos para que Vox apoyara la investidura de Juan Manuel Moreno. Ese partido de extrema derecha siempre ha defendido que hay que dismantelar este sector por carecer de utilidad pública y ser simplemente un nido de "chiringuitos" al servicio del PSOE y los tres partidos esperaban que esas auditorías fueran la prueba fehaciente de ello.

Sin embargo, una vez realizadas, resultó que sus conclusiones no eran ni mucho menos las que la derecha andaluza esperaba encontrar.

En un artículo anterior mostramos que el propio informe presentado por el gobierno indica con claridad que las irregularidades que la derecha andaluza venía denunciando como generalizadas en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía se daban, en realidad, con mucha menos gravedad y extensión de las previstas. Así -insistimos, según el propio informe del gobierno- sólo se encontraron duplicidades en 20 de los 54 entes auditados, se recomendaba que se extinguieran uno o dos de ellos, según como se interprete lo que indican las auditorías, y "cambios leves" en 13 de ellos, mientras que tan solo de tres se decía que carecen de utilidad o beneficio público.

El gobierno de la derecha andaluza podría haber asumido estos resultados con realismo y autocritica por sus exagerados vaticinios, e incluso felicitándose porque los andaluces empleados en esos entes consiguen que la gran mayoría de ellos funcionen con problemas que no son realmente muy diferentes de los que pueda tener la administración general, o las empresas privadas que tantas veces y no siempre con razón se ponen como ejemplo. Pero no lo hizo. En lugar de ello, ha preferido mantener sus prejuicios previos y presentar un informe y hacer unas declaraciones cargados de nuevas exageraciones y mentiras que rápidamente han reproducido los medios de comunicación.

El engaño del gobierno andaluz es fácil de probar, simplemente cotejando las expresiones del informe y las declaraciones del vicepresidente Juan Marín con lo que efectivamente dicen las auditorías que han sido publicadas⁶⁴.

El gobierno dice en su informe que en el sector público instrumental andaluz hay un "caos organizativo" y un "engorde artificial de la administración", expresiones que no se encuentran en ninguna de las auditorías publicadas. Tampoco están allí, ni en el propio informe de la Junta, las expresiones que el vicepresidente de la Junta utilizó para presentar sus conclusiones: "gastos innecesarios", "inoperancia", "superestructura desproporcionada", "red clientelar", "superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades".

El gobierno andaluz se ha inventado esa descripción del estado en que se encuentra el sector público instrumental que ha sido auditado. Es cierto -como veremos en otro artículo próximo- que en algunas auditorías se habla de "deficiencia de gestión", pero lo hace en muy pocos casos y siempre refiriéndose a aspectos concretos (ejecución de proyectos, uso de herramientas de planificación, inversiones en sociedades participadas...) y no con carácter general. Y algo parecido se puede decir de las duplicidades encontradas pues, como señala el propio informe del gobierno, ni son generalizadas ni tan graves como se dice; lo mismo que ocurre con los problemas de sueldos o gestión de recursos humanos, solo señalados por las auditorías en algunos casos concretos.

En nuestro artículo anterior ya dijimos, y lo reiteramos ahora, que el hecho de constatar la exageración y las mentiras del gobierno andaluz no quiere decir que le demos poca importancia al hecho de que haya una minoría de casos con mala

⁶⁴ Los resultados se encuentran en bit.ly/3FE02FF

gestión, ineficiencia o sobrecostes. Hemos defendido siempre que la administración del dinero público debe estar sometida a un control estricto, ser plenamente transparente y siempre eficaz y eficiente hasta el último euro utilizado. Por tanto, nos alegramos de que se hayan realizado auditorías y de que, por fin, se ponga sobre la mesa la reforma profunda de nuestra administración pública autonómica (aunque no creamos que esas auditorías se han hecho correctamente, un asunto del que hablaremos en otra ocasión). Pero reclamar reformas de calado es una cosa y otra presentar el problema con una naturaleza que no tiene, hacer trampas en el planteamiento y engañar a la gente con la intención oculta de alcanzar unos objetivos bien distintos a los que se dice perseguir, tal y como ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía.

Las consecuencias de estas mentiras son, por lo menos, dos muy claras y evidentes.

Los medios y periodistas afines (esto es, los que a través de diferentes vías cobran de la Junta de Andalucía) se han hecho eco de lo que ha dicho el gobierno andaluz sin contrastar sus afirmaciones exageradas y difunden el engaño, confundiendo a la población.

Como muestra de esto valga solamente un botón. El conocido periodista y profesor universitario Teodoro León Gross comenzaba con las siguientes palabras su columna del pasado 1 de agosto en los diarios del grupo Yoly:

“Irregularidades en la contratación”, “se han cobrado muchos sobresueldos”, “caos organizativo”, “duplicidades de funciones y competencias”, “engorde artificial de la administración”, “sueldos por encima de la media del mercado”, “una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”, “una agencia de colocación para otros entes”, “externalización frecuente”, “deficiencia en la gestión”... ahí queda, sintagma a sintagma, el retablo escandaloso levantado por Juan Marín, como anticipo de los seis mil folios que se cuelgan ahora en el Portal de Transparencia, expuestos en plena canícula como se exponían las cabezas de los ajusticiados en la picota de la plaza pública. Se han cerrado, finalmente, las auditorías de infarto de la “herencia recibida”.

Un juicio durísimo sobre el estado en que los gobiernos del Partido Socialista habrían dejado a la administración andaluza pero que tiene una pega fundamental: ninguna, absolutamente ninguna de esas expresiones

entrecomilladas que sirven para condenar la antigua gestión del Partido Socialista, aparece en ni una sola de las auditorías. Como bien dice León, se cuelga en la plaza pública la cabeza del PSOE, la herencia recibida de sus gobiernos, pero habiéndolo ajusticiado previamente solo a base mentiras, las que él mismo reproduce y difunde sin pararse a comprobar la veracidad de sus afirmaciones.

La segunda consecuencia de la mentira no es menos evidente. Trasladando a la población esa idea falsificada de la realidad no solo se la pone enfrente de lo realizado por gobiernos anterior falseando la realidad, sino que se crea el clima que la predispone para que el gobierno lleve a cabo lo que, en realidad, se proponía alcanzar y que había hecho público antes de que se realizaran las auditorías, tal y como cándidamente reconoce el informe que venimos mencionando: llevar a cabo "una disminución generalizada de las entidades existentes".

Es legítimo que unos partidos tengan dudas sobre lo anteriormente realizado en el gobierno por otros adversarios y que sometan su herencia a evaluación. Incluso sería deseable que así se hiciera constantemente. Pero lo que no se puede justificar es que se reclamen auditorías y que, cuando sus resultados no son los esperados, se monte una campaña digna de los mejores tiempos de Goebbels para poder seguir manteniendo las acusaciones que la realidad ha demostrado que son inciertas.

Es también legítimo, por supuesto, que la derecha defienda los intereses de las empresas y grupos financieros privados que desean quedarse con servicios hasta ahora públicos y que, por tanto, defienda, como el gobierno andaluz, la mayor privatización posible, la "disminución generalizada" del sector público, repetimos, en palabras textuales de su informe sobre las auditorías. Pero defender esta estrategia mintiendo sobre las razones por las que quiere privatizar es deshonesto y ocultar a la población los costes y beneficios reales que la privatización pueda tener es un auténtico y antidemocrático fraude.

En el resto de las comunidades autónomas, en España en su conjunto y en otros países de nuestro entorno hay experiencias suficientes para sacar conclusiones sobre esas políticas de privatización. Tratar de llevarlas cabo sin debate social sobre sus resultados es una perversión de la democracia pero hacerlo a base de mentiras es mucho peor, una auténtica infamia que Andalucía no se merece.

No sorprende la actitud de Vox en este caso porque es un partido que no ha

parado de mentir desde su creación, ni tampoco la del Partido Popular y Ciudadanos, pues sabemos que se dejaron caer en manos de la extrema derecha para poder gobernar. Sí resulta más chocante que los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos-Adelante Andalucía, no estén denunciando la campaña gubernamental y que no sean quienes reclamen un debate riguroso sobre las auditorías en sede parlamentaria, sin mentiras y a corazón abierto. Es la única forma de que Andalucía aproveche bien hasta el último euro y se descubran todas las irregularidades y problemas que puedan existir verdaderamente en nuestra administración pública, para depurar responsabilidades si las hubiera y tomar, con el mayor acuerdo posible y de una vez por todas, las decisiones que beneficien al mayor número de personas y empresas.

IZQUIERDAS ELECTROCUTADAS

Publicado en Público.es el 3 de septiembre de 2021

La subida constante y tan elevada del precio de la luz está pasando una factura extraordinaria a los hogares y empresas españoles pero también a los dos partidos que forman el gobierno de Pedro Sánchez.

Los medios de la derecha, lo que equivale a decir que casi todos, los tertulianos y algunos economistas y, por supuesto, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox culpan al gobierno de Pedro Sánchez de las nuevas subidas y lo condenan por no ser capaz de evitarlas pero lo cierto es que, a corto plazo, con inmediatez, ningún gobierno podría lograr una reducción muy significativa del recibo de la luz en España, a tenor de cómo funciona nuestro sistema eléctrico y de la coyuntura en la que nos encontramos.

El precio de la luz en España comenzó a subir después de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada con los votos de PP, CiU y PNV, y prácticamente no ha dejado de hacerlo desde entonces.

Mediante esa ley y con la reforma que años más tarde introdujo de nuevo el PP, se reguló un mercado eléctrico que inevitablemente iba a proporcionar precios caros y subidas puntuales muy elevadas en las malas coyunturas.

Se dijo que la ley pretendía "liberalizar" el mercado, hacerlo más competitivo y eficiente, para que los consumidores familiares o empresariales se beneficiaran de precios más bajos, pero no fue eso lo que ocurrió.

En primer lugar, se consolidó un mercado muy imperfecto y no competitivo sino de oligopolios (unos pocos oferentes) con gran capacidad de control del

mercado (como demuestran las multas impuestas a las empresas por manipularlo). En segundo lugar, se creó un sistema de fijación de la tarifa que, en resumidas cuentas, establece como un único precio de la luz suministrada por todas las fuente de energía (nuclear, gas, hidroeléctrica, eólica,...) el de la que más cara en cada momento. En tercer lugar, se incluían como componentes del precio de la luz una serie de primas o subvenciones por muy diversos conceptos que actuaban como rentas añadidas de los productores y comercializadores. En cuarto lugar, todo ello se hacía con una gran falta de transparencia, con una auténtica maraña de normas muy difíciles de seguir y entender por quien no sea especialista.

Las consecuencias de todo ellos han sido nefastas: desde precios artificialmente elevados a la pérdida de empresas públicas, pasando por la corrupción o por lo irracional que resulta que países con muchas menos horas de luz que España tengan mucha más energía solar en explotación que nosotros, después de la voladura del emergente sector de la energía renovable en el que fuimos líderes mundiales.

Ninguno de esos cambios se ha hecho por casualidad. Las grandes empresas eléctricas disponen de despachos específicamente encargados de influir en la redacción de las leyes y normas administrativas que regulan el sector y llevan a cabo su trabajo con extraordinaria eficacia. No en vano, el lobby eléctrico es uno de los más activos y poderosos de entre los muchos que despliegan su actividad en la Unión Europea.

Las subidas extraordinarias en el precio de la luz que se están produciendo ahora se inscriben en este contexto. Según el sistema establecido que he comentado, las empresas que generan electricidad a partir de distintas fuentes (renovables, nuclear y térmica...) presentan cada día su oferta que va desde el precio más bajo al más caro. El primero suele ser normalmente el de las renovables y nucleares y el más caro el de las de ciclo combinado de gas, que han de pagar no solo la materia prima (gas) sino los derechos de generación de CO₂.

Lo que está ocurriendo ahora mismo es que los mercados mundiales de gas están alterados y su precio se ha disparado, lo mismo que ha ocurrido con los costes de emisión de CO₂.

A la vista de todo esto, cada vez más gente se pregunta qué se podría hacer para bajar el precio de la luz y la respuesta no es muy difícil de encontrar.

La tarifa eléctrica (el "precio de la luz") no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que, como hemos visto, no responde a los costes que soportan las empresas, pues las "marginales", las que ofertan a precios más bajos, terminan vendiendo su electricidad muy por encima del coste. No es, en realidad, un precio sino una renta, porque es un ingreso que las empresas que soportan costes más bajos reciben por privilegio administrativo. Y es evidente que, si este beneficio extraordinario o "renta" se elimina de la factura, el precio final de la luz se reduce.

Otra posibilidad sería establecer precios fijos o máximos para alguna de las distintas fuentes de producción, sacándola de ese anterior sistema de fijación del precio. Así ocurre en Francia con la nuclear (precio fijo) o podría ocurrir si hubiera una empresa pública que no tuviera como objetivo la maximización del beneficio sino la mejor satisfacción posible del interés general.

Por otro lado, los beneficios "caídos del cielo" como consecuencia del sistema de fijación del precio que he explicado no son las únicas rentas que reciben algunas empresas productoras encareciendo así la factura final del consumo eléctrico. También hay otras muchas primas y subvenciones que se podrían eliminar o hacer que se asuman (si es que realmente son de interés general) por otras vías. Sería necesario poner en claro todo ello y tomar medidas al respecto. Nos llevaríamos muchas sorpresas pero se podría abaratar considerablemente el recibo de la luz (aunque también sería una medida de complicada puesta en marcha, sin afectar a derechos adquiridos).

Finalmente, también se pueden reducir los impuestos que graven, por diferentes conceptos, la producción, distribución y consumo de electricidad, o incentivar el consumo en aquellos momentos del día en que pueda ser posible obtener la energía eléctrica más barata.

¿Podría llevar a cabo un gobierno como el actual de coalición medidas como estas? Sí y no.

Sí, porque, como acabo de señalar, algunas se aplican ya en otros países y porque, de hecho, ya se están poniendo en marcha en el nuestro. El gobierno de Pedro Sánchez ha reducido el IVA y ha propuesto una facturación horaria que (aunque sea a trancas y barrancas y con escasa eficacia) puede reducir el

precio que pagan los consumidores finales. Y en junio pasado aprobó otras dos medidas adicionales: un proyecto de ley para reducir una buena parte de esos beneficios extraordinarios caídos del cielo (que abarataría la factura entre un 1,5% y un 4,8%) y otro para crear el Fondo de Sostenibilidad Energética encaminado a sacar de la factura final los costes del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (13% de ahorro). Unidas Podemos, por su parte, ha propuesto la creación de una empresa pública, una medida perfectamente homologable a lo que hay en otros países de nuestro entorno y que podría tener efectos positivos sobre el precio de la luz, aunque a más largo plazo.

La medida de intervenir los precios por la vía de fijar una tarifa fija para la energía nuclear, como en Francia, o una máxima en la hidroeléctrica se podrían justificar igualmente, no solo por identificación con lo que ocurre fuera sino también por razones de emergencia o excepcionalidad, a tenor de la situación económica en la que encuentran nuestras empresas y hogares. Aunque no cabe pensar que pudiera ser aceptada sin presión ante las instituciones europeas donde las empresas eléctricas tienen una gran influencia.

Dicho esto, sin embargo, lo cierto es que sería muy difícil que medidas moderadas como estas que ya se toman en otros países y que simplemente tienen como objetivo eliminar privilegios y dotar al mercado eléctrico de más transparencia, eficiencia y utilidad públicas se pudieran tomar en España a corto plazo. Y la razón también es muy sencilla.

Lo que se dirime al regular el sector eléctrico es dónde van a ir las rentas que se generan de la producción, comercialización y consumo de ese bien esencial. Y ya hemos visto que si el recibo de la luz es tan elevado es porque en el mercado no predomina la competencia ni el interés general sino que está diseñado legalmente para que unas pocas empresas se apropien de miles de para de euros de beneficios extraordinarios. Y un privilegio como ese solo se puede disfrutar si se dispone, como tienen los oligopolios eléctricos, de una red de influencia amplísima y muy poderosa que abarque el mundo de la política, los medios, los partidos, o incluso de la función pública y la judicatura.

Con la excusa de que la Unión Europea prohibía que existieran empresas públicas en el sector, en España se privatizaron eléctricas vendiéndolas a empresas pública de otros países. Y no pasó nada. Una eléctrica como Endesa

ha estado durante años estafando a miles de hogares y empresas, cobrando por servicios que no prestaba o redondeando a su favor las facturas, ganando ilegalmente miles de millones de euros⁶⁵, y no ha pasado nada. En 2014, el Consejo de administración de esta misma empresa, dominado por la pública italiana Enel, aprobó vender a ... Enel sus activos latinoamericanos por un valor de 8.252,9 millones de euros; unos activos que solo en los primeros nueve meses del año le habían proporcionado 47.028 millones de euros de ingresos. Y los beneficios de la venta no los reinvertió sino que se dedicaron a pagar el dividendo más elevado de la historia de España, 14.600 millones de euros, de los cuales más de la mitad (7.422,54 millones) fueron a Enel. Y no pasó nada.

Sin embargo, cuando el actual gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de tomar algunas medidas bastante moderadas y perfectamente homologables a las europeas para bajar el precio de la luz, sufre ataques sin cuartel.

Algunos pensarán que la responsabilidad de estos ataques y de que ahora parezca que no se pueda hacer nada para bajar el precio de la luz es de quienes dirigen el oligopolio, de unas empresas que carecen, como dejaba caer la ministra Teresa Ribera, de empatía y responsabilidad social y que tienen un inmenso poder social, político y mediático. No lo dudo pero creo que los partidos de izquierdas tienen también una buena parte de responsabilidad ante lo que está pasando con el recibo de la luz.

Les resultó fácil culpar a la derecha cuando subía los precios con gobiernos del PP pero no fueron capaces de diseñar y hacer públicas estrategias alternativas, ni de hacer pedagogía para ganarse el apoyo y la complicidad de las familias y las empresas. Ahora están comprobando que no basta con tener buenas intenciones cuando se ocupa el consejo de ministros y los despachos de la alta administración. Cuentan que en una ocasión, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt discutía con unos sindicalistas que trataban sin éxito de convencerlo para que tomara unas medidas. Cuando pasó un buen rato, el presidente les dijo: "Tenéis razón, me habéis convencido. Lo que decís es lo que hay que hacer. Ahora salid a la calle y obligadme a hacerlo". Esa es la clave. Mientras no haya un auténtico clamor social en contra de las barbaridades y privilegios injustificados que hay detrás del recibo de la luz no será posible cambiarlo, por muy moderadas que sean las propuestas que se pongan sobre la

⁶⁵ Juan Torres. Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas_En bit.ly/3FzivTD

mesa.

La izquierda que se limita a gestionar, por muy bien que lo haga, sin comunicar, sin organizar ni movilizar y sin ganarse la complicidad y el apoyo activo de una gran mayoría de la sociedad, es decir, sin lograr que las medidas que propone (como las que he comentado para bajar el precio de la luz) se perciban como de sentido común, termina electrocutada.

EL GRAN ENGAÑO QUE HAY DETRÁS DEL RECIBO DE LA LUZ

Publicado en Público.es el 10 de septiembre de 2021

Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas. Lo malo es que, entre el aluvión de información sobre el tema, se cuelan muchos engaños que confunden y alejan la mirada del verdadero núcleo del problema.

En este artículo quiero referirme tan solo a uno de ellos, al que yo creo que está en la base del gran problema que tiene nuestro sector eléctrico.

Gracias a que se está explicando ampliamente en las últimas semanas, es sabido que el precio de la luz se fija en España a través de un sistema que establece, para todas las fuentes de energía, el precio de las más cara, en nuestro caso, la que utiliza el gas como materia prima.

La explicación digamos "oficial", la de las empresas, economistas y políticos que defienden el sistema de fijación del precio de la luz, es que nos enfrentamos a un problema coyuntural como resultado del incremento de la demanda derivado de la reactivación económica tras el confinamiento y la crisis. Ese incremento ha elevado mucho el precio del gas y también -por la misma razón- el coste de los bonos de carbono que tienen que adquirir los productores por su actividad contaminante.

En su opinión, por tanto, no hay ningún tipo de problema estructural o de

fondo sobre el que haya que actuar. Si ahora ha subido, bajará enseguida que la economía deje de crecer tanto, como habría pasado en ciclos anteriores. Mientras, solo hay que dejar que el mercado eléctrico siga funcionando libremente porque, si se interviniese, se alteraría el régimen de competencia. Si acaso, nos dicen, se podrá dar ayudas a los consumidores que puedan tener problemas de suministro o bajar los impuestos indirectos.

Quienes defienden este sistema afirman que está diseñado precisamente para que, cuando se produzcan circunstancias como la actual, los capitales fluyan a las energías más baratas y así estas se desarrollen. De hecho, dicen que su gran virtud es que resulta el mejor incentivo posible para lograr la transición energética que necesitamos.

Esto ha sido exactamente lo que contestó hace poco la Comisión Europea a la ministra Teresa Ribera cuando esta pidió que se suspendiera su funcionamiento. Según la portavoz del Ejecutivo europeo, Vivian Loonela, el aumento actual del precio se debe a la "significativa demanda global de gas y el mayor coste de los derechos de emisión de CO₂ (combinados con) una "alta demanda" de electricidad por la recuperación económica y las condiciones climáticas". Y este sistema no debe suspenderse porque es el que crea "las señales para reconducir inversiones hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyen la transición hacia la neutralidad climática"⁶⁶.

Si el precio se ha disparado ahora que ha subido tanto el gas, nos dirán, es porque ha sido imposible que de un día para otro hayan podido aumentar las fuentes de energías renovables y alternativas.

En consecuencia, no debemos tocar el sistema sino tan solo esperar a una mejor coyuntura, tal y como nos dice Europa y hacen los demás países europeos.

Nada de eso es cierto. Si se contempla la evolución del precio de la luz en España se comprueba que no sigue la evolución de la demanda y que su disminución se produce justo después de que haya habido grandes subidas y sin bajar de los niveles anteriores a estas últimas.

Es significativo, por ejemplo, que de 2008 a 2018 la luz subiera en España un

⁶⁶ bit.ly/351MDKZ

66,8% y solo un 28,2% en el conjunto de la Unión Europea, con el que no tenemos tanta diferencia en la evolución de la demanda y en donde la evolución del coste de las materias primas es más o menos la misma que en España.

No son circunstancias ajenas al sector eléctrico, por tanto, las que hacen que suba su precio en España. Las que lo provocan hay que encontrarlas en lo que ocurre dentro del mercado eléctrico y, a tenor de la evolución tan distinta del precio, deben ser distintas a las que se dan en el resto de la Unión Europea.

Para descubrir y entender el engaño que hay detrás de las subida tan grande en el precio de la luz en España se necesita saber que el actual sistema de fijación de la tarifa funcionaría realmente como dicen sus defensores (proporcionando "un suministro seguro y asequible de energía de la forma más económica", según la Comisión Europea, y la mejor y más barata combinación posible de las diferentes tecnologías) solo si se dieran dos condiciones imprescindibles.

La primera es que el mercado eléctrico sea de competencia porque el precio de la luz en España no es el resultado del funcionamiento de un mercado de competencia, tal y como ha demostrado magníficamente Enrique Palazuelos en su obra *El oligopolio que domina el sistema eléctrico* (Akal, 2019). Lo que pagamos en España por el consumo de luz eléctrica es el resultado de una constante manipulación de la oferta y la demanda que hacen las cinco empresas que controlan su producción, distribución y venta comercial y que, además, tienen el poder suficiente como para influir decisivamente en las normas que lo regulan y de las que dependen los sobrecostes -en forma de primas, subsidios, ayudas, peajes...- que terminan convirtiéndose en beneficios añadidos que pagan los consumidores.

El precio de la luz en España no refleja los costes reales de producción de las empresas sino el beneficio extraordinario que proporciona su poder oligopolista. Algo – tal y como se estudia en primero de Económicas- que es lo que tiende a ocurrir en todos los mercados de este tipo, sobre todo, cuando no hay control legal ni sanciones que impidan los acuerdos o el reparto del mercado. Justo lo que las eléctricas han conseguido que ocurra en España gracias a la enorme influencia política que tienen desde la dictadura de Franco.

La segunda condición que debería darse para que el sistema proporcione el resultado eficiente que sus defensores aseguran que lleva consigo es que haya libertad de entrada y salida en el mercado para que, cuando suba el coste de alguna tecnología, puedan entrar otras alternativas, más baratas y eficientes. En

nuestro caso, las renovables.

En España eso era difícil porque el tamaño, la integración y el control tecnológico de las empresas oligopolistas es tan grande que supone una limitación casi definitiva a la entrada de nuevas instalaciones o empresas. Pero se logró vencer y el sector de las renovables comenzó a desarrollarse con éxito, hasta que fue ya prácticamente imposible cuando las empresas eléctricas comenzaron a presionar a los gobiernos y consiguieron finalmente, en 2012, que el Partido Popular materializara un frenazo radical a la producción de energías renovables en España. Las eléctricas tradicionales habían ido realizando inversiones en este último sector y, al conseguir que no apareciese nueva competencia, pasaban así a controlarlo también en el nivel de desarrollo que convenía a sus intereses estratégicos de conjunto. Podían seguir haciendo negocio con sus tecnologías sucias y disponían de presencia en todas ellas y en todas las fases del negocio para seguir manipulando cantidades y precios.

No estoy construyendo ninguna teoría conspirativa para descubrir el interés y el papel del oligopolio en el frenazo que sufrieron las renovables en España, una industria en la que España estaba siendo líder mundial por capacidad de innovación y por razones climáticas. Los propios dirigentes del oligopolio, como el presidente de Iberdrola, habían pedido que no se construyeran más plantas solares y, cuando el Partido Popular tomó la decisión, no solo la valoraron positivamente sino incluso como insuficiente⁶⁷.

Ahora bien, aunque es cierto que el oligopolio eléctrico había venido reclamando este frenazo desde hace tiempo y que ya en 2007 se habían empezado a tomar medidas en ese sentido, es muy posible que el frenazo no se hubiera producido tan radicalmente con la simple presión de las eléctricas españolas.

Posiblemente, el hachazo definitivo al desarrollo de las energías renovables en España se lo impuso Angela Merkel a Mariano Rajoy en defensa del muy ambicioso proyecto que lideraban entonces diversas empresas y bancos alemanes. El llamado Desertec Industrial Initiative⁶⁸ que trata de generar

⁶⁷ "Iberdrola pide que se suspenda la construcción de nuevas plantas solares". En bit.ly/3IIQAZr

⁶⁸ bit.ly/33oRWDU

energía solar en el Sáhara para satisfacer en torno al 15% de la demanda europea, entre ella la española, y que tenía previsto invertir la fabulosa cifra de unos 400.000 millones de euros. Así lo había anunciado el diario El País el 9 de noviembre de 2011:

"El gigantesco proyecto solar del Sáhara abastecerá a España en 2015

Desertec, Industrial Initiative (DII), el más ambicioso proyecto energético desde que se erigieron las primeras centrales nucleares, tiene fecha y lugar para su arranque e incluso un destino para sus primeras exportaciones. El faraónico plan de sembrar de paneles solares el Sáhara arrancará el año próximo en Marruecos y, entre 2015 y 2016, suministrará a España parte de la electricidad producida, si se cumplen los plazos previstos.

Alemania, cuyas empresas capitanean la iniciativa, ha adelantado su inicio en tres años porque ha decidido prescindir de la energía nuclear en 2022 y porque cree que la llamada primavera árabe facilita la puesta en marcha de ideas innovadoras en un marco político más estable”⁶⁹.

La competencia de una industria española incipiente pero de gran liderazgo mundial no podía ser bien vista por el capital alemán.

En resumidas cuentas, el sistema de fijación del precio de la luz en España es un fraude, un auténtico engaño, porque no dispone de las condiciones que sus propios diseñadores consideran que debe tener para que proporcione los precios más bajos y la eficiencia tecnológica y económica que dicen que proporciona. Eso es lo que hay que arreglar y es preciso tener valentía para enfrentarse al oligopolio en España y en sus ramificaciones de Bruselas.

No se trata -como quiere hacer creer el oligopolio y sus empleados mediáticos y políticos- de que el gobierno reclame una intervención anómala en los precios del mercado de la luz para manipularlos. Todo lo contrario, la cuestión es impedir que sea el oligopolio eléctrico quien siga haciéndolo para conseguir los beneficios extraordinarios que encarecen artificialmente el recibo que tantos hogares ni siquiera pueden pagar, que ahoga también a miles de empresas españolas y que pone en peligro la recuperación económica.

⁶⁹ bit.ly/3fyeUuz

MAFIOSA RESPUESTA DE LAS ELÉCTRICAS A LAS MEDIDAS OBLIGADAS Y SENSATAS DEL GOBIERNO

Publicado en Público.es el 15 de septiembre de 2021

El gobierno acaba de aprobar un decreto con nuevas medidas encaminadas a tratar de reducir el precio de la luz y la respuesta de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico no se ha hecho esperar.

Puesto que se puede encontrar su descripción y análisis detallado en otro lugar de este diario, evito comentarlas una a una y me limitaré a señalar los aspectos más generales que a mi juicio hay que tener en cuenta para valorar su pertinencia y posibles efectos.

A estas alturas del problema creo que cualquier persona medianamente bien informada y no sectaria tiene claras las principales cuestiones relativas al precio de la luz en España.

En primer lugar, es obvio que está subiendo excesivamente para millones de hogares y empresas, poniendo en peligro la recuperación económica e incluso la estabilidad social, de modo que tomar medidas para frenar esa subida es obligado para el gobierno.

En segundo lugar, es imprescindible tener presente que el precio tan elevado de la luz en España no es una circunstancia coyuntural sino estructural. Como se ha explicado con todo detalle en muchos análisis e investigaciones y yo mismo resumí en un artículo anterior, la causa de este fenómeno es la inadecuada regulación de nuestro sector eléctrico. Un pequeño grupo de empresas

conforman un oligopolio que controla el mercado y puede manipular no solo el precio mayorista sino también los costes no correspondientes a la producción que se incluyen en el recibo; y, en consecuencia, también el precio final que pagan los consumidores. Su enorme poder e influencia política les ha permitido influir en los gobiernos y lograr que las normas legales se hagan a su dictado y que las autoridades reguladoras o no se atrevan, o no puedan o no quieran poner coto a sus operaciones.

Es cierto que en los últimos meses hay circunstancias coyunturales que están provocando que el precio de algunas fuentes de suministro eléctrico se disparen. Las que utilizan gas porque el precio de éste último ha aumentado muchísimo, tanto por la mayor demanda como por restricciones de oferta que se están produciendo por razones geoestratégicas. Las que son contaminantes y han de adquirir bonos de carbono, porque el precio de estos últimos también se ha disparado como consecuencia de la gran demanda y de la especulación que la Unión Europea permitió e incentivó al considerarlos como productos financieros. Y, en el caso de algunas hidroeléctricas, porque parece que han manipulado la disponibilidad de agua en embalses.

Sin embargo, ninguna de esas circunstancias coyunturales tendría que haber provocado la subida del recibo de la luz tan extraordinaria que estamos sufriendo si a) no hubiera una regulación que impone -como ya es bien sabido- el precio de la fuente más cara a todas las demás; b) si los gobiernos no se hubieran dejado influir por el oligopolio permitiendo que sus empresas manipulen a su antojo y con absoluta falta de transparencia los costes, cantidades y precios; y c) si el PP no hubiera frenado, en beneficio de las eléctricas que ya dominaban el mercado español y del capital alemán, el desarrollo de las energías renovables en España.

Resulta obvio, por tanto, que es imposible frenar completamente la subida que se viene produciendo en el precio de la luz sin modificar la estructura y el funcionamiento del mercado, sin evitar que el oligopolio manipule los precios. Pero esto es algo que no se puede conseguir de un día para otro.

A corto plazo, con la inmediatez que reclama la subida extraordinaria que se viene registrando, no se puede hacer otra cosa que lo que comenzó a hacer el gobierno español desde junio pasado y lo que aprobó ayer martes en Consejo de ministros. En primer lugar, reducir los impuestos que recaen sobre el sector, algo que estrictamente hablando no resuelve mucho, pues lo que deja de pagarse por un lado en la factura de la luz hay que afrontarlo por otro. Simplemente, se

traslada de unos a otros la carga que supone el coste excesivo del consumo eléctrico. En segundo lugar, reducir los beneficios extraordinarios y totalmente injustificados que el sistema de fijación del precio proporciona a las empresas que facturan como si pagaran el gas o bonos de carbono para producir electricidad cuando no los utilizan. En tercer lugar, eliminar cuanto antes otras rentas que perciben las compañías eléctricas gracias a su influencia política y que se traducen en costes para los consumidores; o tratar de reducir algunos otros costes de producción o distribución de las eléctricas con la esperanza de que trasladen ese ahorro al precio y algunos componentes de la parte regulada del precio final de la luz. Finalmente, ayudar a pagar el recibo a los hogares que carecen de renta suficiente y no pueden disponer de este bien básico.

Por tanto, las medidas que ha tomado el gobierno son obligadas por la amenaza que supone la subida tan grande del precio de la luz; son sensatas porque efectivamente pueden hacer que disminuya, siempre que el precio del gas y los bonos de carbono no sigan disparándose; son, por supuesto, legítimas, puesto que a nadie más corresponde garantizar el suministro suficiente y a un precio asequible de un bien básico y estratégico para la sociedad y la economía nacional como es la luz; son medidas justas porque el beneficio que recorta a las eléctricas es económicamente injustificado, e incluso menos gravosas para ellas que para el resto de la sociedad que ha de soportar el mayor sacrificio presupuestario que conllevan otras de las medidas adoptadas; son eficientes, puesto que van a obligar a actuar con más transparencia y a que el oligopolio se piense mejor las formas que tiene de manipulación del mercado y desincentiva la especulación en su seno; y respetan las normas impuestas por la Unión Europea, lo que no es poca cosa.

Aunque, eso sí, nadie se debe llevar a engaño, son medidas temporales, incluso algunas confiadas a que en los próximos meses se rebaje la tensión, lo cual no es nada seguro; y son, desde luego, limitadas si se contemplan desde un punto de vista fundamental: de momento, no hacen más que apuntar a las líneas por donde debería ir la reforma estructural del mercado pero dejan prácticamente intactos sus problemas de fondo.

La respuesta del oligopolio, puesto que las centrales nucleares son en realidad propiedad de las eléctricas que dominan todo el mercado, ha sido brutal: amenazar con su "cierre desordenado", una decisión que tiene más que ver con el comportamiento de las mafias, el extremismo político o el terrorismo

empresarial que con el de directivos mínimamente responsables que conocen la naturaleza del negocio que tienen entre manos. Entre otras cosas, porque una central nuclear no se puede cerrar por exclusiva voluntad de sus propietarios, como les ha tenido que recordar la ministra Teresa Ribera.

Las compañías eléctricas que operan en España tiene mucho que callar. Desde 1984 y encabezadas por Endesa e Iberdrola han estafado unos 14.000 millones de euros solo mediante sus contadores, su privatización fue y ha seguido siendo un expolio y se comportan en el mercado como jugadores tramposos. Imagínense una partida de póker en la que se dan cartas a cuatro jugadores pero en la que todos ellos forman parte de un mismo grupo con el mismo interés: si se enseñan las cartas y deciden de común acuerdo cuánto apuesta cada uno, podrían determinar sin ninguna dificultad quién va a perder y ganar, cuánto y en qué partida. Pues así funcionan las eléctricas en España: unas de sus filiales son productoras, otras comercializadoras y otras vendedoras, y todas ellas actúan bajo el mismo interés propio en todas las tecnologías. Se compran y venden entre ellas, entre sus filiales, de modo que pueden determinar las cantidades y fijar los precios a su antojo, y pueden conformar el mix eléctrico final según les convenga. Operaciones, claro está, que se camuflan en sus cuentas y libros, de modo que resulta muy difícil, casi imposible si además no se tiene mucho interés, que sean conocidas fuera de sus propias organizaciones. Así funciona un oligopolio que ha conseguido dominar al legislador y al regulador, a las autoridades que se supone que deben controlarlo.

Lo mejor que puede hacer el gobierno es tener cautela y ser valiente. No hace falta tener muchas luces, valga ahora la expresión más que nunca, para imaginar la presión que personas tan influyentes como ex presidentes del gobierno, ex ministros y banqueros, académicos y periodistas al servicio y con sueldo de las eléctricas deben estar generando sobre Pedro Sánchez y sus ministros y sobre los medios para que los ataquen sin piedad.

A mi juicio, la mejor respuesta sería informar a la ciudadanía. Quizá convocar una comisión plenamente independiente de expertos nacionales e internacionales que evalúe el modo en que ha funcionado y funciona el oligopolio y el coste monetario y social que tiene para todos los españoles y hacer una gran difusión de sus conclusiones. Mientras que la ciudadanía no sepa lo que han hecho las eléctricas y no se de cuenta de quiénes son los verdaderos responsables, no ya de la actual subida de la luz sino de otras cosas mucho peores de las que son responsables, será muy difícil que un gobierno decente

pueda llevar a cabo reformas de calado en el sector eléctrico, por muy buena voluntad que tenga. Entre otras cosas, porque el oligopolio viene contando desde hace muchos años con un gran apoyo para hacer lo que viene haciendo en la administración civil y en la de Justicia y por supuesto con el de sus partidos, los de la derecha, como inmediatamente se han encargado de mostrar los dirigentes del Partido Popular y Vox. Quien paga manda.

De momento, hay que felicitar al que preside Pedro Sánchez porque, por muy limitadas que estén siendo todavía las medidas adoptadas, es la primera vez que nuestros representantes le hablan de tú a tú al antidemocrático poder eléctrico que expolia a los españoles.

PRIVILEGIOS DE LAS ELÉCTRICAS QUE PAGAMOS TODOS LOS ESPAÑOLES

Publicado en Público.es el 17 de septiembre de 2021

Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

Fue entonces cuando se fraguó un oligopolio en el que unas pocas empresas, lideradas por la familia Oriol Urquijo y con la ayuda permanente del gobierno, hacían y deshacían a su antojo en el mercado. Tanto así, que la tarea de reformarlo fue prioritaria cuando llegó la democracia, incluso para la desaparecida UCD. Aunque bien pronto se comprobó que el cambio de régimen no había afectado al poder de las empresas eléctricas y que estas seguían teniendo prácticamente la misma capacidad para escribir en el Boletín Oficial del Estado que en los tiempos de Franco. El vicepresidente Fuentes Quintana lo pudo comprobar cuando trató de nacionalizar la red de transporte de alta tensión. Otros ministros vinculados al oligopolio, liderados por Alberto Oliart, lo impidieron.

Más tarde, las corrientes más a la izquierda del PSOE trataron de llevarla a cabo, pero las medidas que adoptaron los gobiernos de Felipe González y Zapatero fueron casi siempre las que proponían sus ministros liberales o -en el mejor de los casos- el resultado de un equilibrio de fuerzas que al final no permitía resolver los problemas de fondo. Los gobiernos de Aznar y Rajoy no

disimularon su servidumbre y se pusieron directamente al servicio del oligopolio, azuzados además por la normativa neoliberal europea, igualmente contaminada por el poder del lobby eléctrico.

El resultado de ello es que el sector eléctrico español viene gozando de privilegios completamente ajenos a razones de mercado o eficiencia desde hace más de 80 años, en tiempos de dictadura y de democracia.

– Cuando en 1983 se aprobó la primera moratoria a la construcción de nuevas centrales nucleares se les concedió una compensación a sus propietarias, las empresas del oligopolio, que en realidad fue un auténtico "rescate" con dinero público. La compensación se llevó a cabo sin tener en consideración los costes auténticos y fue un auténtico privilegio porque habían sido precisamente esas empresas las que llevaban décadas sobrevalorando la demanda de electricidad para inflar el negocio artificialmente y a base de endeudamiento, para mayor beneficio de la banca, con cuyos consejos de administración estaban entrelazados los del oligopolio. Las grandes empresas rescatadas no llevaron a cabo ni una sola de las contrapartidas que les planteó el gobierno (límite de dividendos, saneamiento financiero o integración).

– Durante años, las eléctricas han cobrado por "término de potencia", un concepto que se justificaba porque era necesario para garantizar que los consumidores dispusieran de la potencia contratada en cualquier momento que lo necesitaran. Un privilegio porque no es cierto que ese suministro estuviera garantizado, pues el sistema colapsaría casi con un tercio de la potencia contratada, y tal y como han demostrado las miles de reclamaciones de los consumidores por cortes del suministro.

– Durante años se ha estado facturando a los consumidores un consumo de kilovatios/hora sobrevalorado pues se ha llegado a denunciar que aproximadamente el 80% de los contadores cometía errores en exceso⁷⁰.

– Durante los años en que el tarifa eléctrica la fijaba el Gobierno, estaba establecido que se debían de cumplir una serie de trámites por parte de las compañías eléctricas, el propio Gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, casi nunca se cumplían, para lograr que el precio fuese lo

⁷⁰ bit.ly/3A8xiDI

más cercano posible a lo demandado más o menos abiertamente por el oligopolio. A veces, los informes preceptivos incluso llegaban después de que el Consejo de ministros hubiera decidido el precio.

– Las compañías eléctricas han cobrado por alquiler de contadores un determinado porcentaje de su precio (por cierto, sobrevalorado hasta en un 50% respecto al del mercado), una cantidad que supuestamente estaría destinada a su renovación y actualización. Sin embargo, la falta de normativa por parte de los sucesivos gobiernos o la suspensión de la que en algún momento se aprobó (¿por incompetencia, olvido, complicidad...?) ha hecho que las compañías eléctricas hayan cobrado a los españoles unos 14.000 millones de euros por prestar un servicio que no han realizado (los datos estimados y actualizados de este fraude⁷¹).

– Cuando se acabó con el régimen de tarifa eléctrica fijado por el Gobierno y se estableció el llamado Marco Legal Estable (1987), se suponía que el precio de la luz debería establecerse en función de los costes reales, la demanda, la inflación y los tipos de interés. Lo cierto fue, sin embargo, que el nuevo sistema volvió a ser un privilegio para las empresas pues estas podían sobrevalorar sus costes y la demanda. La consecuencia, como señala Enrique Palazuelos en su libro *El oligopolio que domina el sector eléctrico*, fue que los ingresos del oligopolio aumentaron prácticamente el doble que la demanda o la tarifa mientras se mantuvo vigente el sistema y que el poder de las mayores empresas aumentó (en 1987, seis empresas controlaban el 86% de la potencia instalada, y en 1996 solo dos el 84%).

– La privatización de Endesa, iniciada en 1988 por el PSOE pero que solo dejó de ser pública diez años después con el PP, ha sido posiblemente el expolio más grande de nuestra historia reciente y, por tanto, un privilegio más para el capital eléctrico privado. Baste saber, como recuerda Palazuelos, que solo los beneficios que obtuvo de 1989 a 1991 fueron un 25% más elevados que el valor de la venta de acciones hasta ese momento.

– La llamada liberalización del mercado eléctrico que se llevó a cabo a partir de 1994 y sobre todo con la ley de 1997 fue, en realidad, la concesión de otro buen número de privilegios al oligopolio. Al quitar al sistema eléctrico el carácter de servicio público, se redujo todavía más el papel del Estado como contrapeso,

⁷¹ bit.ly/3fC7V3K

para así dar más libertad de actuación a las cinco grandes compañías que controlan el sector. Y paralelamente se incentivó y ayudó a que se produjeran integraciones empresariales que permitían que estas tuvieran control de todas las fases y niveles del mercado, justo lo que se necesita para controlar cantidades de cada tecnología y precios y bloquear la entrada de competidoras.

– Esa misma reforma concedió un privilegio esencial a las eléctricas: definir la electricidad y su mercado como lo que no es para que no se pueda poner en cuestión su poder. Es decir, se creó una ficción para no tener que actuar contra las malas prácticas de las eléctricas. Se consolidó el principio completamente inaceptable de que la luz es una mercancía más, cuando es un bien de primera necesidad. Se reguló el mercado como si fuera de competencia, cuando es claramente un oligopolio donde no la hay. Y se supuso que el eléctrico podía funcionar a través de la oferta y la demanda como un mercado eficiente cuando eso no puede ocurrir no solo por la misma razón anterior, sino porque no tiene sentido económico que cada empresa replique las instalaciones o redes necesarias para producir o distribuir la electricidad y, sobre todo, porque la propia reforma había permitido que las grandes empresas fueran, al mismo tiempo, sus oferentes y demandantes.

– En 1997 se concedió otro privilegio a las eléctricas reconociéndoles unos derechos de cobro en concepto de Costes de Transición a la Competencia, como compensación por los supuestos perjuicios que les iban a suponer los cambios legales adoptados al pasar a un mercado "competitivo". Un auténtico escándalo porque, en realidad, se pasaba a la situación regulatoria que deseaban las propias eléctricas y, en ningún caso, a un mercado de esa naturaleza. Un informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) señaló que no se ofrecía ni una sola justificación para ello, que los beneficiados serían las grandes compañías Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas y los perjudicados la mayoría de las empresas españolas, los consumidores domésticos e incluso las empresas del sector eléctrico distintas de esas cinco grandes. Lo peor fue, sin embargo, que no se registraron las pérdidas previstas sino que se produjeron beneficios y esa diferencia ni siquiera se les ha reclamado a las eléctricas.

– Como expliqué en un artículo anterior, el gobierno del Partido Socialista estableció incentivos al desarrollo a las renovables que en realidad sirvieron para reforzar la presencia del oligopolio en las nuevas tecnologías. Más tarde, cuando

las eléctricas tradicionales habían tomado las posiciones en el nuevo sector, lograron que el gobierno del PP frenase en seco su desarrollo y así aumentaron su control sobre el conjunto del mercado. Eso es lo que ha provocado que ahora no haya disponibles suficientes fuentes de electricidad de menor coste y que la luz se esté encareciendo tan extraordinariamente.

– En el año 2000, el gobierno de Aznar reconoció un "déficit de tarifa" que se convertía en un nuevo privilegio de las eléctricas. Dicho déficit se estaría produciendo cuando los ingresos procedentes de la tarifa que pagan los consumidores fuesen menores que los costes "reconocidos" en la normativa que regula el sector. Para resarcarlo, se emitió deuda y su pago se endosó a la factura final que pagamos los consumidores. Sin embargo, como han demostrado rigurosamente Natalia y Jorge Fabra⁷², uno de los mayores expertos en nuestro sector eléctrico, ese déficit no ha estado provocado por los costes "reales" de la producción de la luz sino (además de por otras razones de menor envergadura) por la sobrerretribución de las centrales nuclear e hidráulica. Justamente como consecuencia de la mala regulación que impone el oligopolio.

– No se puede olvidar el privilegio más decisivo y conocido en los últimos tiempos en que comienza a desvelarse lo que hay detrás de la subida del precio de la luz: el llamado sistema marginalista que, como se sabe, establece para la electricidad generada por todas las fuentes el precio de la más cara en cada momento. Un sistema que, cuando se desarrolla en un mercado controlado por pocas empresas y en donde hay barreras de entrada como las que creó el frenazo a las renovables del PP, eleva necesariamente el precio en favor de las empresas que controlan la oferta y demanda mayorista.

Es muy difícil calcular el coste de todos estos privilegios. Es ingente, entre otras cosas, porque no es solo monetario y porque los anteriores no son los únicos privilegios que han tenido y tienen las empresas responsables de suministrar un bien esencial para todas empresas y hogares como es la luz. Habría que añadir otras ayudas de menor cuantía y, sobre todo, la protección adicional les proporciona su enorme poder. Financian a muchos medios y eso les garantiza la ausencia de críticas y que no se ponga en cuestión su comportamiento. Pueden escapar fácilmente de las autoridades que supuestamente las controlan porque tienen a sueldo a quienes han sido máximos dirigentes de los partidos

⁷² Natalia Fabra Portela y Jorge Fabra Utray. El déficit tarifario en el sector eléctrico español. En bit.ly/3AhyoNB

mayoritarios así que, cuando su control ilícito del mercado queda demostrado, solo reciben multas simbólicas, cuando las reciben. Y su enorme tamaño y poder financiero les permite disponer de una contabilidad que no refleja la realidad de su actividad en el mercado.

Y a todos ellos hay que añadir el privilegio que les proporcionan las normas y políticas europeas, un asunto que comentaré en el siguiente artículo.

La ciudadanía debe conocer todo lo anterior para poder comprender que la presión que pueda ejercer el gobierno de Pedro Sánchez contra estas empresas no es caprichosa. Es una presión obligada, económica y moralmente, para ir poniendo fin a una regulación de este mercado ineficiente e injusta porque produce beneficios extraordinarios a unos pocos (los de las eléctricas españolas han sido tradicionalmente los más elevados de Europa) a costa de hacer mucho daño al conjunto de la economía. Por eso hay que apoyar a este gobierno en esta batalla. Lo sorprendente es que la patronal no defienda que se ponga fin a los sobre costes que el oligopolio impone a las empresas, como resulta vergonzoso que quienes se definen como liberales y defensores de la competencia actúen de monaguillos de un oligopolio que contraviene todos los principios del mercado libre.

Si algo bueno tienen estos privilegios es que, cuando salen a la luz, nuestros representantes políticos, periodistas o economistas no tienen más remedio que retratarse.

EUROPA ES RESPONSABLE DEL PRECIO DE LA LUZ Y DEBE ACTUAR CON URGENCIA

Publicado en Público.es el 24 de septiembre de 2021

Al defender los beneficios extraordinarios del oligopolio eléctrico mientras el gobierno trata de frenar la subida de la luz, tanto el Partido Popular como Vox acaban de revelar claramente que los intereses que defienden no son los de todos los españoles ni los de la inmensa mayoría de las empresas.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo lo que debe: tomar las medidas que están en manos de su gobiernos para frenar la escalada y dirigirse a las autoridades europeas para reclamar reformas en la regulación del mercado eléctrico.

El gobierno hace bien porque lo que que está pasando en los últimos meses con el recibo de la luz, en todos los países europeos y no solo en el nuestro, es consecuencia directa de grandes errores de las normas y políticas europeas en materia de energía eléctrica.

Como a estas alturas es bien sabido, las circunstancias que están haciendo que suba el precio de la luz en todos los países europeos son de doble naturaleza. Unas son coyunturales, como el encarecimiento del gas que incide en los precios de producción de la energía que usa esa fuente; o la subida del precio de los bonos de CO2 que han de comprar las empresas que contaminan.

Pero ambas circunstancias coyunturales no tendrían por qué producir un impacto tan grande como el que están produciendo en el precio final de la luz si no fuese por una serie de condiciones estructurales que la Unión Europea ha

ido imponiendo desde 1987.

Ese año entró en vigor el Acta Única con el fin de crear un mercado único europeo, un objetivo que lógicamente debería extenderse también al eléctrico.

Siguiendo los mismos principios neoliberales del Acta (cuyo texto copió casi literalmente un documento elaborado por unas cuarenta grandes empresas europeas lideradas por Phillips), las primeras medidas en materia de energía eléctrica (1996) se orientaron a dar un mayor protagonismo a las empresas y los mercados, limitar la intervención estatal y conceder más libertad para que las empresas crearan nuevas instalaciones, accedieran a las redes comerciales y tomaran posiciones en los mercados transnacionales.

Se pretendía, según se decía entonces, que la normativa europea (traducida en una segunda Directiva en 2000) consolidase un mercado eléctrico de libre competencia que proporcionara producción óptima, precio competitivo y un incremento del intercambio entre las diferentes naciones que impulsara el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo de las mejores tecnologías de producción eléctrica. Bonitas palabras que cautivaron a muchos incautos.

A partir de ahí, todas las medidas que ha venido adoptando la Unión Europea en relación con el mercado eléctrico y, por tanto, con incidencia sobre el precio de la luz se derivan de la asunción de ese principio básico: el mercado en el que actúan la oferta y la demanda de energía eléctrica (un bien como cualquier otro) es de libre competencia y lo único que deben hacer los gobiernos es velar para que siempre se den "condiciones de competencia equitativas" y normas aplicadas a las empresas eléctricas transparentes, proporcionadas y no discriminatorias (Directiva UE 2019/944, art. 3.4). Para ello, se obliga a los Estados a que garanticen que los precios se formarán en función de la oferta y la demanda y que las normas del mercado alentarán su libre formación (Reglamento UE 2019/943, art. 3). Y, finalmente, se establece que el precio mayorista (el que se paga a las empresas productoras) se fije siempre según el principio de "precios marginales" que significa, como ya se sabe bien, que todas las ofertas realizadas tendrán el mismo precio y que este será el de la última; es decir, el de la más cara.

¿Por qué afirmo que la Unión Europea es la responsable última de la subida tan extraordinaria y dañina para toda la economía que se viene produciendo en el precio de la luz? Sencillamente, porque la experiencia ha demostrado que los

principios que han inspirado toda su normativa eléctrica se basan en cuatro supuestos completamente falsos y, por tanto, de consecuencias desastrosas.

1. Es falso que la luz sea un bien como cualquier otro y que, por tanto, pueda ser suministrado y comprado óptimamente recurriendo tan solo a un mercado, por muy de libre competencia que este sea.

La razón de por qué este principio inspirador de las normas europeas es falso las puede entender cualquiera. En primer lugar, la luz es un bien de primera necesidad para empresas y hogares y su provisión no puede quedar supeditada a los vaivenes de los mercados que simplemente buscan proporcionar beneficio privado. En segundo lugar, porque la luz no se puede almacenar, como otros bienes, y no tiene sentido que cada empresa productora invierta y construya su propia red de transporte. Es, por el contrario, lo que los economistas llamamos un monopolio natural. Algo, como no puede ser de otro modo, que funciona en condiciones y con resultados radicalmente distintos a los que proporcionan mercados donde predomine la competencia.

2. Es también completamente falso que los mercados eléctricos de los países europeos sean de libre competencia. Cualquier persona mínimamente informada sabe que en ellos hay un oligopolio, un grupos de tres, cuatro o cinco grandes empresas que se lo reparten y controlan.

Es un error colosal de la Unión Europea tratar a un mercado oligopolista como si fuera de libre competencia. Y quien no entienda bien las consecuencia de esa diferencia que meta en su casa un tigre y lo trate como a un gatito casero.

3. Es igualmente falso que un mercado oligopolista en el que a) se da cada día más poder a las grandes empresas, b) se limitan los contrapesos estatales, y c) no hay una auténtica política energética común, pueda tender al equilibrio territorial y a la convergencia que favorezca el comercio transnacional a los mejores precios en todos los territorios.

4. Finalmente, es falso que el sistema de precio marginalista pueda dar lugar a un precio estable y de competencia, como decían las autoridades europeas, mientras se deje que las empresas del oligopolio manipulen los mercados; por ejemplo, al integrarse verticalmente, como ocurre de facto en Europa. Una situación que les permite vender y comprarse a sí mismas, influyendo así en las cantidades y precios que se negocian en el mercado para restringir la oferta si les conviene y elevar los precios.

Y es falso también que ese sistema marginalista de fijación del precio pueda incentivar la entrada de nuevas empresas de tecnologías más baratas (renovables) si no hay una política pública que favorezca las inversiones y que no dependa de los intereses y el poder de las empresas que ya dominan el mercado porque estas, lógicamente, no van a permitir que aparezcan sus competidoras.

Las consecuencias de los "errores" de la Unión Europea que llevaron a dictar normas basadas en estas falsedades eran previsibles y la experiencia las ha mostrado con plena evidencia:

- No solo se han mantenido los oligopolios nacionales sino que, además, se ha favorecido la aparición otros de escala europea.
- No se ha generado el desarrollo esperado de las transacciones entre naciones.
- Ha aumentado la dependencia de fuentes exteriores, algo especialmente gravoso cuando alguna se encarece mucho, como ahora ocurre con el gas.
- No ha habido una política común de desarrollo de las energías renovables, lo que ha llevado a una gran asimetría en la producción, el suministro y la dependencia de los países, y a que no se pueda frenar el precio de la luz cuando se encarecen las tecnologías más caras, como está pasando ahora.
- Sin esta última política, el sistema marginalista se ha convertido en una fuente de beneficios extraordinarios ("caídos del cielo") para las empresas de los oligopolios que ofertan energías más baratas, encareciendo así la factura final de los consumidores.

La presunción que guio a las autoridades europeas para establecer este sistema es tan ilusa que cuesta trabajo creer que realmente se creyera en eso. Como he dicho, consideraban que el sistema marginalista no era de temer, desde el punto de vista del precio final, porque si alguna energía se encarecía demasiado se harían más rentables otras más baratas que la sustituirían. Un razonamiento iluso porque es obvio que si eso pudiera producirse sería, en todo caso, a medio o largo plazo. A corto plazo, como está ocurriendo ahora, la tarifa marginalista dispara el precio porque es materialmente imposible construir nuevas centrales de un día para otro. Incluso tampoco es fácil creer que ese efecto se produzca a medio o largo plazo si la entrada de nuevas empresas más baratas se deja de

la simple mano del mercado. Por un lado, porque se precisan inversiones iniciales muy fuertes que difícilmente se pueden llevar a cabo sin políticas públicas adecuadas. Y, por otro, porque ese efecto previsto de bajada de precio es justamente un factor que desmotiva las inversiones a largo plazo.

– Por otro lado, esa dificultad para financiar nuevas inversiones sin que haya habido planes paneuropeos de inversión es lo que ha permitido y favorecido una amplia presencia del capital bancario en el sector eléctrico. Un oligopolio se ha echado sobre otro, y así se limita aún más la escasa competencia y se introduce una lógica espuria en el mercado de un bien que, como he dicho, es de primera necesidad.

Para finalizar, y como una especie de guinda que está inyectando aún más carburante a la subida de los precios de la luz, los dirigentes de la Unión Europea también han llevado a cabo otra política errónea que está aumentando sin cesar los costes de producción eléctrica.

Como he dicho, parten de la base de que el mercado es de libre competencia y que, por tanto, si se encarece un bien o materia prima, se utiliza otro. Para contribuir a que se produjese ese efecto crearon los llamados bonos de carbono, unos títulos que han de adquirir las empresas contaminantes y que encarecen el coste de su producción, incentivando la entrada de nuevas tecnologías más baratas. Y con el fin de que ese incentivo funcionara a pleno rendimiento, la Unión Europea lleva a cabo una estrategia constante orientada a subir su precio. Además, los ha convertido en instrumentos financieros, dando pie a que los fondos de inversión alteren el mercado con sus maniobras puramente especulativas que elevan aún más el precio. Y, en el colmo de la sinrazón, la Unión Europea permite que las empresas contaminantes que han de comprar esos bonos trasladen su coste al precio, de modo que al final no se produce el efecto incentivo pero sí una factura más cara para las empresas productivas y los hogares.

En fin, las decisiones de la Unión Europea basadas en presupuestos falsos han producido consecuencias desastrosas y por eso podemos decir que sus autoridades son las responsables últimas de que el precio de la luz se esté disparando en todos los países europeos. Es verdad que de modo desigual en todos ellos, según sea el diferente poder del oligopolio nacional, pero constituyendo, en todo caso, el origen común del problema.

Es por todo ello que Pedro Sánchez y su gobierno hacen lo correcto al reclamar

reformas en profundidad a la Unión Europea.

Deben reclamar la reforma del sistema mayorista y establecer topes máximos y mínimos en el mercado mayorista; transparencia a las empresas eléctricas para evitar sus ingentes beneficios disimulados porque sobrevaloran los costes y mueven de un lado a otro sus cuentas; acabar con los fraudes en la comercialización; establecer una política común de peajes y un plan europeo de desarrollo de renovables que no dependa del interés del oligopolio ni de la especulación financiera; nacionalizar las redes de transporte de electricidad e incluso las de distribución descentralizada, para ir empezando.

No será fácil lograrlo si los grupos parlamentarios europeos y nacionales de la izquierda (los de la derecha ya sabemos a quién defienden) siguen manteniendo el silencio desolador que mantienen (al menos de puertas a fuera de sus despachos y salas de reunión) y si la gente corriente no apoya a quienes defienden sus intereses.

VIENE OTRA CRISIS (¿LA GRANDE?) Y NO SE LE DA RESPUESTA

Publicado en Público.es el 1 de octubre de 2021

Cuando comenzó a extenderse la Covid-19 advertí⁷³ que la pandemia produciría una doble crisis o una sola, si se prefiere, con dos manifestaciones separadas y muy diferentes. Por un lado, una de demanda, como consecuencia de la caída de los ingresos provocada por los cierres de empresas y la gran disminución de la actividad durante el confinamiento. Esta, dije desde el principio, tenía un tratamiento muy costoso pero bastante fácil de aplicar, la garantía gubernamental, total o parcial, de los ingresos perdidos por empresas y familias. Un tratamiento que conocemos desde hace tiempo cuando, por alguna razón, deja de haber dinero en los bolsillos y la falta de consumo paraliza la vida económica. No hay otro remedio, entonces, que crear dinero y repartirlo aunque sea, como gráficamente decía el liberal Milton Friedman, tirando billetes desde un helicóptero.

Se trata de una solución conocida y de relativamente fácil pues basta, como hemos visto, con que los bancos centrales creen medios de pago o los gobiernos se endeuden. Aunque eso no quiere decir que resuelva todos los problemas, ni que salga gratis.

No resuelve todos los problemas porque nunca estará garantizado que el dinero que sale de los bancos centrales llegue finalmente a las empresas y consumidores que lo gastan. E, incluso si llega, tampoco es seguro que se dedique al consumo

⁷³ Juan Torres. El virus y la economía (1): mucho peor de lo que parece. En bit.ly/3IdSuuW

o la inversión. Unas veces, porque los bancos se quedan con el incremento de dinero para sanear sus balances o realizar inversiones financieras, sin utilizarlo para conceder crédito a la actividad productiva. Otras, porque los gobiernos, las empresas o los hogares solo dedican el nuevo flujo monetario a amortizar deuda anterior.

En esta última crisis de demanda provocada por la Covid-19 los bancos centrales (creando dinero nuevo) y los gobiernos (endeudándose) no dudaron ni por un momento, a diferencia de lo que ocurrió en la de 2008, y han suministrado una dosis nunca antes vista de financiación extraordinaria a las economías. Así han salvado la crisis, aunque lógicamente a cambio de un incremento no menos gigantesco de la deuda: se estima que a finales de 2020 ya había crecido en 32 billones de dólares en todo el mundo. Y, aunque todavía no se ha comenzado a sentir el esfuerzo durísimo que habrá que hacer para pagarla, el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido que unos 100 países han tenido que empezar a hacer recortes en gasto social y de bienestar para hacerle frente. Lo mismo que ocurrirá en todos los demás, a medida que vaya pasando el tiempo, si no se adoptan pronto medidas de reestructuración, quitas ordenadas y procedimientos de financiación que no impliquen nuevas oleadas de recesión y miseria en muchísimos países.

En cualquier caso, como he dicho al principio, esta ha sido la parte fácil de la crisis provocada por la Covid-19. La prueba es que, aunque con el coste futuro que acabo de señalar, allí donde se han aplicado inyecciones financieras adecuadas se ha conseguido recobrar la actividad y el empleo.

Pero, tal y como señalé al principio, la pandemia iba a traer consigo inevitablemente otra crisis mucho más peligrosa porque se iba a producir por el lado de la oferta. Y eso es lo que ya está ocurriendo.

Dicho de la manera más fácil posible para que todo el mundo me entienda lo que sucede es que no hay suficiente disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer la demanda de las empresas y los hogares.

Este desacoplamiento es muy peligroso por dos razones principales. Por un lado, porque produce subidas de precios como consecuencia del exceso de demanda coincidente con la escasez de oferta. Por otro, porque la respuesta convencional que los bancos centrales dan a esa tensión inflacionaria (subir los tipos de interés) deprimiría aún más la oferta. Si actúan como se supone que

deben hacerlo, lo que provocarán será que las empresas disminuyan aún más producción y el empleo, sin que los precios finalmente se reduzcan.

Hasta ahora, sin embargo, los bancos centrales vienen manteniendo que esta situación es un simple efecto del confinamiento, de la incertidumbre y de los cambios acontecidos en todo este tiempo, que no debe producir demasiada preocupación porque es transitoria. Concluyen, por tanto, que nos encontramos ante una especie de cuello de botella que ciertamente produce escasez y, en consecuencia, tensiones al alza en los precios, pero solo de carácter temporal pues no hay otra razón que impida que los mercados recobren pronto la normalidad. De ahí que no hayan tomado prácticamente ninguna medida ante este desajuste.

Yo creo, sin embargo, que se están equivocando porque la situación va a ser más grave y duradera por una sencilla razón: los desajustes en los mercados internacionales de bienes y servicios no se han producido solamente a causa de las perturbaciones lógicamente provocadas por la pandemia sino que venían de antes.

El problema que se está planteando con crudeza en toda la economía internacional es que la pandemia ha acelerado y agravado la desarticulación de un sistema global de producción y logística globales que ya estaba en crisis con anterioridad. El sistema no sufre una mera perturbación coyuntural sino que está registrando una fuerte tensión estructural.

Lo que se está produciendo ante nuestros ojos es la muerte por éxito del capitalismo neoliberal de nuestro tiempo. Ha logrado que se produzca una concentración extraordinaria de capitales y de rentas y riqueza; el dominio casi absoluto de los mercados que han alcanzado las grandes empresas les ha permitido disfrutar de cuentas de resultados con beneficios desorbitados y nunca antes vistos; cifras de negocios gigantescas que vienen de la mano de la rentabilidad mucho más que extraordinaria que su exagerada liquidez les proporciona en los mercados financieros en continua expansión; y una influencia social y política que hace poco resultaba sencillamente inimaginable. Pero todo eso ha provocado también la fragmentación de los mercados, una desarticulación productiva tampoco antes vista y una pérdida progresiva de rentabilidad, por pérdida de mercado o endeudamiento creciente, de franjas cada vez más anchas de la actividad empresarial. Lo mismo que el resto de la gente se aleja cada día más de la minoría todopoderosa que lo gana todo, también se excluye del reparto de la tarta a una proporción creciente del

pequeño y mediano capital. Y así, el capitalismo renuncia a la capacidad de alimentarse alimentando a los demás que es lo que lo ha mantenido exitoso durante tanto tiempo.

Esa y no la pandemia es la verdadera causa de la crisis de oferta que se está empezando a manifestar con gran crudeza: cientos de barcos se mantienen a la espera en los puertos donde se nutren las exportaciones mundiales; los precios del transporte marítimo se multiplican hasta por diez en algunas rutas; cientos de megafactorías están prácticamente inactivas por falta de suministros, lo que se traduce en la paralización sucesiva de los procesos de producción que hasta ahora estaban encadenados.

El sistema logístico internacional está al borde del colapso y no es solo como consecuencia de la pandemia. Esta ha provocado ciertamente un gran cuello de botella, al poder recuperarse la demanda con lógica mayor rapidez que la oferta. Pero el colapso proviene de un sistema de redes globales que no responde a lógicas de suministro racionales sino a la volatilidad de la especulación financiera y a que son incapaces de autoalimentarse generando fuentes de ingresos descentralizados en los diversos mercados donde actúan. Al revés, el capital transnacional actúa como una especie de bomba que absorbe y seca todo a su alrededor y por completo.

Lo que está empezando a ocurrir en el mundo es que se está resquebrajando el sistema de provisión inherente a la globalización de las últimas décadas y que había sido la base del predominio del capital transnacional que diseñó al neoliberalismo como estrategia civilizatoria. Se ha centralizado y concentrado tanto que ahora resulta incapaz de proporcionar la provisión más o menos generalizada, puntual y universalmente rentable y la aceleración que, mientras más o menos las había ido garantizando, hacían de la globalización el tótem sagrado de nuestro tiempo.

Y ese proceso de desarticulación se ha agudizado por los efectos que el capitalismo intensivista ha venido provocando sobre el clima y el medio ambiente y que han eclosionado en una crisis de recursos energéticos que tiene, a su vez, consecuencias fatales sobre el propio capitalismo porque es incapaz de gobernarlos. Comenzaremos a ver la proximidad y auténtica magnitud y gravedad de este proceso a partir del próximo invierno y por supuesto que no solo en China.

Los retrasos que se están acumulando en la provisión de materias primas y bienes intermedios no son, por tanto, coyunturales. Creer que el remedio es esperar a que escampe es una irresponsabilidad. Subidas de precios como las de los alimentos, las más altas desde los años setenta del siglo pasado, o las que se están dando en otros bienes y servicios no pueden ser un simple desajuste momentáneo.

En realidad, no creo que crean realmente que lo que se está avecinando no sea grave y que dejarlo pasar sea la mejor respuesta. Más bien pienso que los bancos centrales carecen de instrumentos para hacer frente a corto plazo a la coincidencia de una presión de la demanda con una restricción de oferta y prefieren considerar que los síntomas (la inflación y el frenazo de la actividad) son la enfermedad.

En los años sesenta y setenta del siglo pasado, el capital se enfrentaba a una situación de agotamiento parecida y con manifestaciones semejantes pero era a consecuencia de la fortaleza que habían adquirido los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos de liberación y el llamado "campo socialista", a pesar de sus múltiples defectos. Por tanto, tenía clara la estrategia que debía adoptar para salir adelante: combatirlos y vencerlos para hacer que la balanza del reparto de la riqueza y del poder girase hacia el otro lado.

Ahora, la paradoja es que el enemigo del capitalismo es el capital sometido a la lógica financiera y especulativa que se ha quedado con todo pero que ha terminado destruyendo la base global sobre la que él mismo había asentado la industria, desarticulando las redes de producción y las cadenas de valor, y que ha generado una explosión de deuda incontrolable e insostenible, una tensión social creciente como consecuencia de la desigualdad y un poder al margen de las instituciones que materialmente amenaza con impedir el gobierno y la resolución más o menos consensuada de los conflictos.

Esa es la razón de por qué no hacen nada cuando la escasez de suministros y el encarecimiento de la energía están empezando a paralizar a las economías. Tienen un conflicto con ellos mismos y no saben ni están dispuestos a transformarse. El resultado seguro será un gran desorden, el más peligroso.

PRESUPUESTOS 2022: HABÍA ALTERNATIVAS

Publicado en Público.es el 8 de octubre de 2021

Desde que se consolidó el dominio neoliberal en el pensamiento económico y en la política, los economistas progresistas hemos tenido como principal empeño el transmitir un mensaje fundamental: hay alternativas.

Es fundamental hacerlo porque el de los economistas y políticos que pusieron en pie el neoliberalismo liderado inicialmente por Pinochet, Thatcher y Reagan fue, precisamente, tratar de convencer a todos los grupos sociales de que no había alternativas a sus políticas de privatización, re-regulación a favor de las grandes compañías y desmantelamiento de los derechos laborales y sociales para favorecer la iniciativa y el beneficio privados.

No ha sido ni es fácil mostrar a la población que esas políticas neoliberales responden a intereses sociales muy concretos, como lo demuestra que su principal efecto haya sido la impresionante concentración de la riqueza y el poder en tan pocas manos de nuestro tiempo; y que, por tanto, no constituyen una opción inevitable. No es fácil porque quienes defendemos esta posición no disponemos ni del apoyo del poder establecido ni del acceso a los grandes medios de comunicación que tienen quienes defienden los intereses de sus propietarios. Pero los hechos y las cosas son como son y el tiempo ha terminado por darnos la razón..

En el libro que acabo de publicar esta semana, *Econofakes. Las diez grandes mentiras de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida* (Deusto Ediciones), menciono lo que decía en 2004 uno de los economistas españoles más neoliberales, Xavier Sala i Martí: "Sólo los ultra radicales (como Vicenç Navarro y otros soldados

derrotados del marxismo universitario), siguen hablando del aumento de impuestos, del gasto público y del intervencionismo público tal como hacían en los años setenta". La realidad, no mucho más tarde, es que quienes ahora hablan de eso son también los dirigentes mundiales que han tenido que hacer frente a la pandemia, porque las supuestas verdades sin alternativa del neoliberalismo se han mostrado completamente inútiles para resolver los grandes problemas que ha sufrido y tiene por delante la humanidad.

Es una desgracia que haya tenido que ser, en gran medida, a causa de una pandemia pero lo cierto es que bastantes de los asuntos o problemas que desde hace años veníamos señalando como prioritarios y que tan solo merecían el desprecio y el rechazo del pensamiento y la política dominantes, tienen que ser introducidos ahora en la agenda de los gobiernos e incluso de muchas instituciones y organismos internacionales. Baste señalar, por ejemplo, el obligado fortalecimiento de la inversión y los servicios públicos, la imposición de las transacciones financieras y las actuaciones contra los paraísos fiscales, la necesidad de establecer impuestos globales o de revertir la tendencia constante hacia la inequidad fiscal, poner fin a la deuda como motor de las economías, colocar a la inclusión en el debate económico y político, la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en las políticas económicas, las políticas de ingresos garantizados, o el replanteamiento de las estrategias globalizadoras que se han mostrado incapaces de proporcionar una mínima seguridad y garantía de suministros, entre otros.

Hasta un buen número de grandes empresas y bancos y organizaciones sociales bastante conservadoras han creado un consejo mundial que aboga por el "capitalismo inclusivo"⁷⁴, precisamente porque el neoliberal de las últimas décadas ha sido tan nefasto que requiere alternativas que no solo se proponen extra muros por los partidos y organizaciones progresistas que abogan por superar el capitalismo, sino desde dentro del propio capital.

Es cierto que no se trata de un cambio de paradigma radical, ni definitivo o ni siquiera muy profundo todavía. Y, por supuesto, que viene determinado por el interés y es, por tanto, conflictivo y contradictorio. E incluso peligroso porque es muy posible que la descomposición del orden neoliberal termine creando problemas geopolíticos de naturaleza y magnitud (como otras experiencias que hoy día estamos viviendo, por ejemplo, en el medio ambiente) nunca

⁷⁴ bit.ly/3FEAMio

contemplados en la historia de la humanidad.

Las medidas de política económica y social que viene tomando el gobierno de España que preside Pedro Sánchez son una buena prueba de este cambio de ideas y de correlación de fuerzas. Muy pocos años atrás hubiera sido sencillamente impensable que se hubieran adoptado sin que los burócratas europeos y otros organismos internacionales se levantaran en armas. Ahora, sin embargo, hasta otros gobiernos más conservadores llegan más lejos en algunas cuestiones relevantes (el francés se dispone a congelar el precio del gas y la electricidad y Alemania se ha gastado una auténtica fortuna en capitalizar a sus empresas y en establecer medidas realmente proteccionistas).

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se acaba de aprobar es también otro ejemplo de ello, por muy moderado que sea todavía.

En primer lugar, es expansivo incluso cuando la economía está creciendo, algo muy contrario a la ortodoxia hasta ahora dominante. Se ha tenido que aceptar que la inversión pública (y la inmensa mayoría del gasto social también lo es) es esencial en estos momentos porque no expulsa a la privada sino que, por el contrario, la estimula y fortalece para generar innovación y aumentar la productividad general de la economía.

En segundo lugar, porque -sin perder de vista que no se puede provocar que se derrumbe de pronto la rentabilidad del capital privado- se han diseñado, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis anterior, evitando que los costes de los problemas económicos que vivimos recaigan casi exclusivamente sobre las espaldas de los grupos sociales más desfavorecidos.

En tercer lugar, porque quizá por primera vez en muchas décadas, estos Presupuestos -aunque sea de nuevo en medida todavía insuficiente- tienen luces largas, es decir, una perspectiva de incidencia y transformación que va más allá de las respuestas a los problemas del día a día.

En cuarto lugar, porque todo ello se hace con una cantidad de recursos que, sin ser quizá toda la deseable o necesaria, es verdaderamente histórica, pues nunca antes se había registrado tanto gasto público ni un aumento tan destacado en las partidas que actúan como motores más potentes para la creación de riqueza y empleo por las empresas.

Frente a las tonterías que dicen los liberales cuando afirman que el dinero público es dinero tirado, la verdad es que, ahora que el capital privado no está en condiciones de afrontar las inversiones multimillonarias que requiere la transformación productiva (digital, ambiental, comercial, industrial...) que se nos viene encima, el gasto público que contemplan estos Presupuestos puede convertirse en un combustible inigualable para el conjunto de la economía si se gestiona bien y las empresas privadas lo aprovechan correctamente.

Desde la cifra récord de inversión pública (unos 40.000 millones de euros) hasta los bonos culturales o las ayudas para la vivienda a los jóvenes, pasando por el también extraordinario presupuesto de gasto social (60% del gasto total), o incluso por el sueldo de los empleados públicos y las pensiones, casi todo ello se va a convertir en ingreso inmediato de las empresas españolas. De ahí que se pueda decir con toda seguridad que el efecto final de todo ese gasto, como se explica en cualquier manual de introducción a la economía, será bastante mayor que el inicial que presupuesta el gobierno. Es un incremento de gasto público convertido en ingreso privado que se va a materializar en creación de empresas, de actividad y empleo en los próximos meses.

Es cierto que todo ese gasto tiene su letra pequeña y que esos cuatro puntos positivos que he mencionado antes quizá puedan matizarse, en el sentido de que no van tan lejos como algunos quisieran y que quedan muchos flancos por cubrir. Pero no creo que, si eso es así, haya sido por falta de voluntad del Ejecutivo en su conjunto, sino por algo esencial que muy a menudo se olvida. Ni el presidente, ni sus ministros tienen ni están en el poder y, además, carecen del apoyo social necesario para poder enfrentarse con éxito a quienes defienden los intereses contrarios a los que hacen suyos los partidos de la coalición.

Pasa algo así en el lado de los ingresos. Es cierto que se da algún paso para avanzar hacia una mayor equidad, por ejemplo, aumentando el tipo del impuesto de sociedades, aunque de un modo que afectará a muy pocas empresas (alrededor del 1%) y en cantidades realmente menguadas. Pero hay que tener en cuenta, por un lado, que se está a la espera del informe de la comisión de expertos sobre reforma fiscal, lo que justifica que ahora no se adopten medidas de calado. Y, por otro, que la solución al mayor problema fiscal de nuestro país seguramente no pase (mientras no se reforme el sistema en su conjunto) por aumentar los tipos impositivos sino por garantizar que todos los obligados paguen lo que le corresponde con los de ahora.

En definitiva, el gobierno acaba de aprobar unos Presupuestos que a mi juicio

constituyen un hito histórico y que van en la buena dirección, por muy moderado que sea el avance que vayan a suponer.

Para finalizar, eso sí, me parece necesario hacer dos consideraciones que me parecen importantes.

Estos Presupuestos y el gasto público realizado desde que comenzó la pandemia han elevado nuestra deuda pública de manera extraordinaria. Es ciertamente lo que se tenía que hacer pero eso es una cosa y otra no ser conscientes de que hay que empezar ya a contemplar alternativas que impidan que el endeudamiento se convierta en una soga en donde perezcan dentro de poco los avances que se están realizando.

En segundo lugar, tampoco se puede olvidar que es materialmente imposible que tengan éxito los proyectos de transformación avanzada y a medio plazo que se propone el gobierno y para los que se destinan recursos en estos Presupuestos si no se forjan acuerdos y compromisos transversales que proporcionen certidumbre, confianza y seguridad basadas en la transparencia, la lealtad y la complicidad.

Dos condicionantes complicados pero que hay que afrontar sin remedio, con decisión e inteligencia y sin aspavientos innecesarios, tal y como ha ocurrido en esta ocasión.

EL BANCO DE SUECIA PONE EN SU SÍTIO A LA DERECHA, LA PATRONAL Y AL BANCO DE ESPAÑA

Publicado en Público.es el 12 de octubre de 2021

La concesión del Premio de Economía del Banco de Suecia (mal llamado Nobel, como explico en mi último libro *Econofakes. Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida*) no puede haber venido en peor momento para la derecha política y económica española.

Los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con el apoyo de la patronal y el Banco de España, no han parado de acusar al gobierno de destruir empleo por subir unos pocos euros el salario mínimo. Sin embargo, el Banco de Suecia acaba de conceder la mitad de su Premio de Economía de este año a David Card, el primero de los economistas que han demostrado empíricamente que después de una subida del salario mínimo no se siguen necesariamente pérdidas de empleo.

El trabajo pionero de Card fue publicado en 1994 en *The American Economic Review* junto a Alan Krueger (fallecido en marzo de 2019) y su interés no radica solamente en sus conclusiones sino en el revuelo que trajo consigo y, sobre todo, en la reacción que provocó en los economistas convencionales.

En 1992, el salario mínimo subió de 4,25 dólares a 5,05 en el estado de Nueva Jersey mientras que no varió en el vecino de Pensilvania. Card y Krueger aprovecharon y compararon lo que sucedió a continuación en 410 restaurantes de comida rápida de los dos estados, descubriendo que el empleo no cayó sino que incluso aumentó un poco más en los restaurantes donde subió el salario

mínimo y que los precios en los comercios afectados subieron en Nueva Jersey en relación con los de Pensilvania, aunque no se encontró evidencia de que subieran en relación con los demás dentro de Nueva Jersey.

Puesto que esos resultados desafiaban lo que había mantenido siempre la teoría económica convencional (subidas en el precio hacen caer la demanda), Card y Krueger trataron de indagar en las causas de esa falta de sintonía entre la teoría y realidad. Lo hicieron en un libro posterior titulado *Myth and Measurement* (Mito y medida) en el que concluyeron que los economistas escribían con un sesgo que les llevaba a preferir los resultados que coincidían con lo establecido por la mayoría de la profesión aunque fueran contrarios a la evidencia.

Las conclusiones de Card y Krueger levantaron entonces ampollas y hasta economistas tan célebres como James Buchanan (Premio del Banco de Suecia en 1986) llegaron a perder los papeles. En una carta a *The Wall Street Journal*, cuyo texto completo traduzco en *Econofakes* (p. 94), decía que lo que habían descubierto Card y Krueger estaba en contra de "una proposición central" de la teoría económica, "la relación inversa entre la cantidad demandada y el precio". Pero "afortunadamente -escribió Buchanan- sólo un puñado de economistas están dispuestos a dejar atrás la enseñanza de dos siglos; todavía no nos hemos convertido en un grupo de putas que siguen al campamento militar (camp-following whores)".

Está claro, pues, que los insultos que hoy día lanzan dirigentes como Pablo Casado o Abascal contra el gobierno que mantiene tesis contrarias a su ideología o intereses, o las barbaridades que dicen los dirigentes de la patronal o grandes empresarios como el presidente de Iberdrola, no son nuevas, ni en las formas, ni en los temas. Ronald Reagan ya había afirmado en su campaña contra Carter en 1980 que nada había creado más miseria y desempleo desde la Gran Depresión que el salario mínimo. A pesar de que nunca se había comprobado que eso ocurriera en la realidad.

Después de Card y Krueger, otros muchos economistas han comprobado que sus tesis eran ciertas. Arindrajit Dube, William Lester y Michael Reich compararon lo ocurrido, de 1990 a 2006, en parejas de condados de Estados Unidos en donde había subido o no el salario mínimo y encontraron la misma evidencia. Y lo mismo se ha comprobado en otros países. Hasta un medio tan conservador como *The Economist* escribió en 2013: "Un salario mínimo que

no sea muy alto podría mejorar los salarios sin efectos negativos en el empleo"⁷⁵.

Naturalmente, hay otros estudios que concluyen con la tesis contraria. Normalmente, los que se centran en el efecto del salario como coste, dejando a un lado el que tiene como impulsor de la demanda, la eficiencia o la productividad, o el poder de las empresas sobre el mercado. Pero, en cualquier caso, ninguna persona honesta puede decir taxativamente que los aumentos del salario mínimo destruyen empleo, como dice en España (y en otros países, ciertamente) la derecha, la patronal y los economistas liberales más extremistas.

Si Buchanan (uno de los arquitectos de la extrema derecha estadounidense) podía decir que quienes encuentran tesis contrarias a las que le conviene defender sobre el salario mínimo son como una pandilla de putas, ¿quién va a impedir que Casado, Abascal, Galán o Garamendi insulten o descalifiquen sin fundamento alguno y como les plazca al presidente del Gobierno y a sus ministras y ministros por aumentarlo?

Quizá este último Premio del Banco de Suecia no servirá de mucho para hacer más constructivo el debate político en España, pues ni las razones ni la realidad sirven para convencer a quien está empeinado en defender su ideología o intereses, como le ocurre a la derecha española, la patronal o al Banco de España. Pero al menos servirá para ponerlos en su sitio cada vez que repitan las mentiras sobre el salario mínimo con las que quieren engañar a los españoles. En beneficio de quién, creo que no hace falta que lo indique; me parece evidente.

⁷⁵ The Economist. The logical floor. En econ.st/3GKyorR

LA GRAN RENUNCIA AL EMPLEO (MALO)

Publicado en Público.es el 15 de octubre de 2021

Un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de la renuncia de millones de trabajadores a seguir trabajando en las condiciones en las que estaban antes del confinamiento.

Los datos son indiscutibles.

En Estados Unidos, el informe de la Secretaría de Trabajo de hace un par de semanas señala que 4,3 millones de personas habían renunciado a sus empleos en agosto. Eso ha hecho que ya pase de 10 millones el número de empleos vacantes en todo el país, a pesar de que hay casi 8,5 millones de personas desempleadas.

En los 38 países que forman parte de la OCDE hay 20 millones de personas menos empleadas que antes del confinamiento y 14 millones ya han dejado de considerarse activas porque ni tienen empleo ni lo buscan. Y, en comparación con 2019, hay 3 millones más de jóvenes sin empleo, ni educación ni formación.

En China, Vietnam y otros países asiáticos también ocurre lo mismo, pues millones de personas que habían vuelto a sus aldeas cuando se produjo el confinamiento no han vuelto a sus empresas. Y en Europa, leemos diariamente noticias sobre la "escasez" de personas para ocupar puestos de trabajo en muchos sectores económicos.

En Alemania se calcula que hay unos 400.000 empleos vacantes, en Francia 300.000 y en España casi 120.000, un 88% de ellos en el sector servicios.

Las causas de este fenómeno global son variadas y no todas ellas se quieren poner sobre la mesa porque el fenómeno supone una especie de enmienda a la totalidad de lo que ha venido pasando en los mercados laborales y en la economía en general durante los últimos 40 años.

Quien quiera engañarse puede creer que el problema se debe a que hay desajustes temporales entre la oferta y la demanda de trabajo. Puede haberlos, sin duda, pero no los suficientes como para explicar toda la magnitud del problema.

Lo curioso, además, es que los mismos economistas liberales que defienden esta tesis (para no tener que enfrentarse a lo que voy a señalar inmediatamente) actúan con bastante incoherencia. Cuando hay paro dicen que se trata tan solo de un exceso de oferta que se resuelve automáticamente en el mercado laboral a poco que bajen los salarios. Pero, ahora que hay escasez de oferta, no dicen que suban los salarios para evitar el desequilibrio. Una muestra más del fraude intelectual y del engaño que hay detrás de las teorías liberales sobre la naturaleza del desempleo y su solución.

La realidad es que el modelo laboral del neoliberalismo ha generalizado no solo los salarios más bajos con la excusa permanente de que eso era imprescindible para crear empleo. Al bajar la masa salarial, han disminuido las ventas de las empresas y eso ha hecho que se genere menos actividad y empleo. Así se ha creado un ejército de parados que ha permitido que los salarios no suban y que las condiciones de trabajo empeoren sin cesar, en beneficio de las grandes empresas (no de todas, porque una gran parte se ve perjudicada por la caída de ventas y actividad que he señalado).

Eso explica que en los últimos años de dominio neoliberal se hayan generalizado condiciones de trabajo extenuantes en donde han florecido la ansiedad, el estrés, el agotamiento, el miedo, la frustración y la renuncia creciente a la vida familiar, la crianza y el bienestar en el más amplio sentido. Muy particularmente, en algunos sectores, grupos sociales o en el caso de las mujeres.

Durante los años 60 y 70 del siglo pasado la rotación en los empleos era alta. Quien se pudiera encontrar insatisfecho con su puesto de trabajo podía cambiar con la seguridad de encontrar otro, más o menos en las mismas condiciones. En los últimos 40 años, por el contrario, los trabajadores no han tenido apenas posibilidad de rotar, sencillamente, porque las posibilidades de encontrar algo

mejor eran mínimas. Con sindicatos debilitados, con la negociación colectiva en entredicho y, sobre todo, con ese ejército de millones de personas necesitadas de emplearse allí donde fuese, se ha podido establecer un modelo laboral en el que o se aceptaba lo que ofrecía la empresa, o se perdía el empleo. Es lo que ocurre cuando en la cola hay cientos de personas dispuestas a aceptar cualquier condición de trabajo. De ahí los falsos autónomos, los contratos sin horas determinadas, las horas extraordinarias no pagadas o el incumplimiento generalizado de las leyes laborales.

El confinamiento ha transformado la situación, tal y como lo ha descrito muy claramente la profesora de Harvard Tsedal Neeley, en un interesante libro publicado el pasado mes de abril (*Remote Work Revolution: Succeeding From Anywhere*): "Hemos cambiado. El trabajo ha cambiado. La forma en que pensamos sobre el tiempo y el espacio ha cambiado (...).

Las encuestas que se están realizando en muchos países muestran claramente que la pandemia ha abierto los ojos a millones de trabajadores en todo el mundo que ahora rechazan la situación laboral anterior y se replantean su vida y, en especial, las condiciones de trabajo. Un informe reciente de McKinsey & Co.⁷⁶ afirma que una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos está pensando en cambiar de empleo o en dejar la actividad laboral debido al Covid-19.

En España, la mayoría de las grandes empresas, con mayor poder de negociación y sobre los mercados, han aprovechado la pandemia para intensificar las jornadas de trabajo y bajar salarios (a veces, hasta un 30% para los mismos puestos de trabajo que se contrataban antes del confinamiento) y el salario medio ha sufrido, no solo en España, una caída sin precedentes.

Por todo esto, es una ingenuidad y un error descomunal creer que lo que se está produciendo es una escasez de trabajo. Como escribía hace unos días Robert Reich, Secretario de Trabajo con Clinton, no es escasez de trabajo sino de salarios dignos, es escasez de cuidado de niños, de licencias por enfermedad pagadas y escasez de atención médica⁷⁷.

⁷⁶ Women in the Workplace 2021. En bit.ly/3IafFWW

⁷⁷ Robert Reich. Is America experiencing an unofficial general strike? En bit.ly/3qFMJQY

Es cierto que Reich se refiere a Estados Unidos y que en otros países, como el nuestro, aún no se está produciendo este fenómeno con la misma magnitud o por las mismas razones. Pero, donde allí se dice escasez de licencias por enfermedad pagadas o de atención médica, pongamos aquí jornadas interminables, salario de miseria y falta de estímulos y autonomía personal.

Lo cierto es que, por primera vez en esas últimas décadas, los trabajadores de todo el mundo se están dando cuenta del poder que tienen frente a una gran clase empresarial que ha querido quedarse con todo, a costa de destruir la economía en su conjunto. Como dice Reich en el artículo que he citado, "se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional no oficial hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales".

No va a haber más remedio que negociar, aceptar que las relaciones laborales deben mantener un imprescindible equilibrio y devolver derechos, salarios y condiciones de empleo dignos a las clases trabajadoras si no se quiere que la economía internacional entre en una nueva crisis de una magnitud y gravedad sin precedentes. Aunque no soy optimista. Se han acostumbrado a ganar tanto con toda facilidad que no será fácil que renuncien ni a uno solo de sus privilegios.

ECONOMÍA MUNDIAL: EL RIESGO DE UNA TORMENTA PERFECTA

Publicado en Eldiario.es el 3 de noviembre de 2021

Cuando las economías se hundieron a causa de la Covid-19, los líderes políticos y los economistas de los grandes organismos internacionales decían que no se sabía cuándo llegaría la recuperación pero que, una vez que comenzara, las economías registrarían una recuperación muy potente y duradera. Otros, por el contrario, dijimos que eso no iba a ocurrir porque la economía internacional no estaba afectada tan solo por los efectos del confinamiento sino también por una crisis muy profunda que se había comenzado a manifestar ya antes de la pandemia.

Los datos macroeconómicos que se han ido conociendo en las últimas semanas nos han dado la razón. Los precios están registrando las mayores subidas de las últimas tres décadas y el crecimiento del PIB es bastante más bajo del estimado tan solo hace unos pocos meses.

En España nos sorprendió la subida de precios interanual a finales de septiembre (5,5%) por haber sido la más elevada de los últimos 29 años, pero es justo el mismo record que la de Alemania (4,5%) y un año menos que la de Estados Unidos (4,4%), la más alta desde 1992, según los datos del Banco Mundial.

Los datos de evolución del Producto Interior Bruto también han mostrado que las economías han perdido ya el fuelle que se disparó con enorme potencia al acabar el confinamiento.

En España, el crecimiento ha estado muy por debajo del previsto. El Instituto

Nacional de Estadística registró una tasa interanual del 17,5% de mayo a junio de este año. Sin embargo, el estimado para el periodo de junio a septiembre solo ha sido del 2,7%, lo que da idea del frenazo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el consumo de los hogares ha caído en el trimestre veraniego (-0,5%), aunque no la inversión (2%), ni las exportaciones (6,4%).

En Alemania ha ocurrido más o menos lo mismo. El PIB solo creció el 1,8% en el tercer trimestre de este año, casi la mitad de lo previsto en abril y dos décimas menos que España.

Quienes antes decían que la recuperación sería potente y sin reservas, ahora señalan que nos encontramos ante problemas "transitorios". Dicen que no hay que preocuparse demasiado por la subida de precios porque se debe a circunstancias pasajeras como el alza en los costes de la energía o los desajustes provocados por la presión de la demanda retenida durante el confinamiento. La ralentización de la actividad parece haberles sorprendido tanto que no terminan de explicarla.

A mi juicio, es un error creer que nos encontramos ante un simple incidente como consecuencia de la pandemia y, por tanto, pasajero y resoluble a poco que todo se vaya normalizando.

Para entender lo que nos está sucediendo hay que poner los datos que ahora se están empezando a registrar en todo el mundo junto a los que teníamos antes de la pandemia.

Al hacerlo, se podrá descubrir que no estamos sufriendo solamente el impacto de un simple trastorno, por muy grave que haya sido el provocado por la Covid-19 y el confinamiento que paralizó a gran parte de la actividad económica.

Sufrimos lo que los médicos llaman "morbilidad asociada". Es decir, la confluencia, no necesariamente al mismo tiempo, de otros males con la enfermedad primaria.

El error es creer que las economías han padecido o siguen padeciendo el efecto de la pandemia como única enfermedad, cuando la realidad es que fue una patología económica asociada a otra -la primaria- que ya se estaba padeciendo con anterioridad.

Es verdad que el confinamiento ha producido un bloqueo en los canales de suministro por diferentes razones: muchas empresas productoras tuvieron que

cerrar y no han tenido capacidad material de recuperar el ritmo de producción anterior, otras compradoras aumentaron sus pedidos excesivamente por prevención mal gestionada, produciendo acaparamiento; y las de logística y transporte se han visto afectadas por los cambios tan imprevistos y rápidos en la oferta y la demanda cuando, además, hay problemas de rotación en los mercados laborales. Y también es verdad que la demanda, en casi todas las economías, rebotó inicialmente con fuerza tras el confinamiento, produciendo una inevitable presión sobre los precios.

Pero la prueba evidente de que no se trata tan solo de problemas de ajuste coyuntural es que afectan de modo muy desigual a diferentes sectores. Y la complejidad del desajuste lo demuestra el hecho de que no se esté resolviendo como dice la economía convencional que debiera resolverse, mediante el mecanismos de los precios. Estamos comprobando, efectivamente, que la subida de precios no solo no reduce el exceso de demanda sino que incluso este aumenta a medida que se van elevando.

Para entender el presente hay que analizar lo que estaba ya sucediendo justo antes de la pandemia.

En primer lugar, un proceso que venía de largo de caída de la tasa de beneficio en la industria como consecuencia del freno en la inversión productiva y de la constante retención de la demanda de consumo a causa de la caída de la masa salarial,

En segundo lugar, el resquebrajamiento de la globalización dominante en las últimas décadas como consecuencia de las asimetrías y brechas cada vez más grandes que ha venido produciendo, no solo entre grupos sociales y naciones sino incluso entre las diferentes franjas del capital, de las empresas.

En tercer lugar, un acortamiento del ciclo económico como consecuencia de la continuada aplicación de políticas económicas inadecuadas que frenan la extensión de las fases expansivas o de recuperación y así impiden que se pueda crear suficiente producción y empleo.

En cuarto lugar, el continuado privilegio de la actividad financiera que ha creado una economía drogo-deuda-dependiente con millones de empresas zombis que han de dedicar todos sus beneficios, si es que llegan, a pagar la deuda, y que paralizan el aumento de la productividad y la innovación. Un estudio de

Bloomberg calculó que así se encuentran 527 de las 3.000 mayores firmas de Estados Unidos y algunas estimaciones señalan que a nivel global podrían estar en esa situación más del 20% de las empresas.

En ese contexto y por esas causas, ya antes de la pandemia se venía produciendo un proceso de relocalización empresarial, de búsqueda de nuevos nichos de aprovisionamiento y ventas y, sobre todo, el inicio de una auténtica revolución en el sistema global de logística.

Esto último es, en realidad, lo que explica (y no la pandemia) la mayor parte de los cuellos de botella que vienen provocando la escasez de suministros que lleva consigo tantas pérdidas (110.000 millones de dólares se calcula que está suponiendo para la industria mundial del automóvil) y que está obligando a muchas empresas a realizar movimientos estratégicos de gran calado para no desaparecer si las perturbaciones prosiguen.

Durante el confinamiento se observaron los primeros síntomas de la perturbación (desacoplamientos, bloqueos de rutas, retraso de contenedores, aumento de tarifas, escasez de transportistas..) Y muchas empresas tuvieron que diversificar rápidamente sus cadenas de aprovisionamiento para evitar riesgos. Eso exacerbó los desajustes, ciertamente, pero si todo ello está resultando tan problemático es porque se estaba produciendo un cambio crucial desde antes. Y la prueba es que las cosas, en lugar de ir a mejor a medida que se han ido recuperando los intercambios, están empeorando.

El sistema global de logística había estado respondiendo a la crisis industrial y de la globalización que he mencionado generando una auténtica revolución tecnológica orientada a automatizar las redes globales mediante la digitalización y la inteligencia artificial, un proceso desarrollado a través de estrategias diferentes y con distintas velocidades y resultados, sobre todo, entre China y Estados Unidos. Y aquí está la clave.

La pandemia ha acelerado el proceso (tal y como ha ocurrido en otros momentos de la historia en que se han producido shock inesperados) pero lo ocurrido con la pandemia no es el proceso mismo.

Lo que está sobre la mesa y genera los problemas que están sufriendo las empresas y las economías en su conjunto no es la normalización del sistema de aprovisionamiento anterior a la crisis de la Covid. Este no va a volver a ser lo que era. Ahora se trata de algo más importante. La globalización ya no se va a

seguir guiando por la misma lógica de competencia anterior. El coste y el precio van a dejar de ser determinantes de la ganancia y pasarán a serlo la inmediatez y la seguridad y las empresas han de modificar sus estrategias de producción, aprovisionamiento y localización. Este es el desorden en el que nos empezamos a mover y el que provoca la escasez y subidas de precios y por eso es ingenuo creer que se va a resolver en cuestión de unos meses.

Lo que está en juego es el rediseño y el control del nuevo sistema logístico global digitalizado y automatizado gracias a la inteligencia artificial que está en proceso de desarrollo y la readaptación productiva y espacial de las empresas para adaptarse al cambio. La nueva guerra fría tendrá allí uno de sus escenarios principales. Quien lo domine, dominará el mundo en la nueva fase de la historia cuyo nacimiento ha acelerado la Covid-19.

Muy pronto vamos a ver cómo este tema pasa a primer plano de las agendas internacionales, aunque de manera cada día más conflictiva entre las dos grandes potencias y sin solución a corto plazo para los bloqueos en el suministro y la subida de precios. Estos van a ir a más porque ni los gobiernos ni los bancos centrales están en condiciones de poner orden para aliviarlos sin quebrar la lógica que guía a un capitalismo neoliberal herido por su fracaso para hacerse sostenible (concentrando la renta y la riqueza ha triunfado plenamente). De hecho, han agudizado el problema al no haber tenido presente el cambio que se estaba produciendo a la hora de inyectar los recursos tan cuantiosos que han proporcionado a las economías. Si se siguen equivocando y desatan una crisis de deuda tendremos la combinación que provocará una tormenta perfecta.

CRIPTOMONEDAS: SOLO ESPECULACIÓN QUE ACELERA EL DESASTRE CLIMÁTICO

Publicado en Público.es el 12 de noviembre de 2021

Las llamadas criptomonedas se están convirtiendo en una de las expresiones más fieles de la lógica y la ética que dominan el capitalismo de nuestros días.

El número de todas las que existen en el mundo es ya impresionante. A última hora del día 10 de este mes de noviembre la web coinmarketcap.com registraba 13.969. Veinticuatro horas más tarde, ya registraba 14.055, 86 más.

El valor de todas ellas en los mercados tampoco para de crecer. En ese mismo periodo de un día, ha pasado de 2,79 billones de dólares a 2,84 billones, según los datos de la misma web. Y hace justo un año el valor total era de 440.000 millones, lo que quiere decir que en estos últimos doce meses se ha multiplicado por 6,4.

Pero si es grande el número y el valor de las criptomonedas que se han creado y circulan por todo el mundo, mayor aún es la confusión que existe sobre su auténtica naturaleza.

Dicho de la forma más elemental posible, las criptomonedas son anotaciones digitales obtenidas por diferentes procedimientos, todos los cuales se basan en la utilización de cifras o códigos muy complejos para crearlas y controlar su circulación de modo descentralizado.

Se dice que esas anotaciones digitales son dinero, lo mismo que lo es la anotación que los bancos hacen en las cuentas de sus clientes, y por eso se denominan criptomonedas. Pero esta es una idea errónea porque no es verdad

que las criptomonedas estén desempeñando las funciones que siempre desempeña cualquier cosa que sea utilizada como dinero: ser medio de pago de aceptación generalizada, unidad de cuenta y depósito de valor.

El dinero es cualquier cosa que es generalizadamente aceptada como medio de pago, para saldar las deudas. Y, al contrario, se puede decir que no es dinero lo que no haya sido aceptado generalizadamente para esa función.

Si yo le debo a mi vecina 500 euros, puedo saldarle la deuda con una moneda del reinado de Isabel II de mi propiedad que para ella tenga el valor de esos 500 euros. Sin embargo, aunque haya saldado una deuda con ella, esa moneda no se puede considerar como dinero si no es aceptada como tal por todas las personas. Ahora bien, si al día siguiente el Estado declarase que esas antiguas monedas de Isabel II pasan a ser de curso legal, es decir, de obligada aceptación para saldar deudas, la moneda que le di a mi vecina sería ya dinero. Por tanto, para que algo se convierta en dinero no basta que alguien lo acepte como pago de una deuda. Es necesario que la aceptación sea generalizada, bien por imposición del Estado o por decisión colectiva (eso es lo que ocurriría en los campos de concentración, donde se aceptaban cigarrillos como medio de pago, convirtiéndose así en dinero en ese espacio).

Las criptomonedas que se han creado hasta la fecha no son dinero por la sencilla razón de que su aceptación no es generalizada para saldar deudas y, además, porque eso no ocurre debido a otras circunstancias quizá todavía más relevantes.

Hoy día, la inmensa mayoría de la gente o de las empresas que necesitan disponer de medios de pago para intervenir en los intercambios normales y corrientes de la vida económica no aceptaría como pago un *axie infinity*, un *quant*, un ardor o un *prometeus*, por poner algunos ejemplos. Sencillamente, porque saben que no es seguro que otras personas o empresas acepten esas criptomonedas como pago en otro momento o intercambio; entre otras cosas, porque no sabrían ni a qué se refieren esos términos.

La segunda razón de por qué las criptomonedas actuales no se pueden considerar dinero es todavía más decisiva: no se usan como medio de pago generalizado sencillamente porque no conviene usarlas para ello. Su valor es tan volátil, incierto e inseguro que resultan materialmente inútiles como dinero. Nadie en su sano juicio utilizaría hoy para pagar sus deudas una "moneda" que

mañana puede tener mucho más valor, ni sabiendo que es posible que, en unas horas, puede perder gran parte de él. Nadie firmaría hoy un contrato suscrito en alguna de esas criptomonedas porque sería como hacerlo a precio indeterminado.

Sea lo que sea que se utilice como medio de pago, para que pueda cumplir esa función debe tener un valor con cierta estabilidad.

La realidad es que el precio de las criptomonedas es muy volátil y esto también impide que puedan desempeñar la otras dos funciones del dinero que he mencionado antes, la de depósito de valor y unidad de cuenta. Usar cualquier de ellas para esto último sería como establecer como unidad de medida un metro de extensión variable que cada vez que se usara tuviese una longitud diferente.

Además, hay que tener en cuenta que la oferta de criptomonedas es fija (de bitcoin se emitirán 21 millones de unidades y ya se han creado 18,6 millones) y, su precio, además, fácilmente manipulable por pocos poseedores (a finales de 2020 los 100 mayores poseedores de bitcoins cash disponían del 13% de los que circulan⁷⁸). Eso hace que no se pueda garantizar ni su disponibilidad en un momento dado, ni su estabilidad, ni su posible utilización para corregir los desequilibrios de la economía, como puede hacer y es necesario que haga la política monetaria.

Por último, el procedimiento tecnológico y algorítmico que ha de seguirse para producir las y controlar su circulación hace que sea prácticamente imposible que alcancen la capacidad que sería necesaria para hacer frente a las transacciones que se realizan en la economía mundial.

El sistema de funcionamiento del bitcoin, por ejemplo, impide que pueda llevar a cabo más de 7 transacciones por segundo, lo que supone un máximo de 220 millones al año. Una cifra ínfima comparada con los 700.000 millones de pagos digitales que se efectúan en el sistema financiero global anualmente. O con las 65.000 operaciones por segundo que puede realizar VISA⁷⁹.

Las criptomonedas son hoy día registros digitales de los que solo conviene o

⁷⁸ bit.ly/3GGgir0

⁷⁹ Visa Fact Sheet. A global payments technology company at a glance. En vi.sa/3nXQaRh

interesa disponer para obtener beneficios gracias a las variaciones de su precio, es decir, para especular con ellas. Pero no porque convenga utilizarlos como medios de pago habituales o unidades de cuenta, es decir, no porque sean dinero.

Esta es la primera razón por la que dije al principio que las criptomonedas se han convertido en una de las expresiones más fieles de la naturaleza del capitalismo de nuestros días, basado preferentemente en la obtención de ganancias a través de la especulación financiera y no del desarrollo de la actividad productiva que crea bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades.

Las criptomonedas no sirven hoy día nada más que para especular con ellas, para ganar dinero comprándolas y vendiéndolas sin realizar ninguna de las actividades productivas que satisfacen necesidades humanas.

Es posible que dentro de un tiempo alguna de las criptomonedas actualmente existentes se haya ganado la confianza de los sujetos económicos, que se utilicen generalizadamente porque su valor se haya estabilizado y que las limitaciones técnicas actuales que he señalado hayan desaparecido. No niego que, entonces, pudieran ser consideradas como dinero. Aunque, en todo caso y si llegaran a serlo, sería a costa de un gasto de energía tan desorbitado que cuesta mucho creer que fuese posible asumirlo.

Es así porque la creación y control de todas estas criptomonedas necesita que haya miles de ordenadores dedicados a realizar continuamente operaciones muy complejas que requieren mucha electricidad y ser renovados, como media, en unos 18 meses. Los datos que lo demuestran producen escalofrío.

Se estima que la huella anual de carbono que genera la producción de bitcoin (más o menos la mitad del valor de todas las criptomonedas) equivale a la de un país como Chile; su consumo de electricidad anual (116,7 twh, según el Índice de Cambridge⁸⁰) está entre el de Países Bajos (111 twh) y el de Argentina (121,1 twh) y es la mitad del que realiza España (233 twh); y los residuos electrónicos que genera equivalen a los producidos por Países Bajos.

⁸⁰ bit.ly/3FE84OI

La ineficiencia de las criptomonedas y el despilfarro que conllevan se perciben todavía más claramente si se considera el gasto de energía que lleva consigo realizar una sola transacción con el bitcoin: produce una huella de carbono equivalente a la de 2 millones de transacciones con tarjetas VISA y requiere la misma cantidad de electricidad que 1,2 millones de esas transacciones. Y el desecho de material electrónico que lleva consigo una sola transacción de bitcoin es el mismo que producen 1,69 iphones de última generación o 0,56 ipads⁸¹.

Hasta ahora y según el cálculo que realiza la Universidad de Cambridge, el 61% de la energía que consume la producción y control de las criptomonedas procede de energías no renovables es decir, de las más costosas y contaminantes.

Es cierto que hay un acuerdo internacional para lograr en 2025 que el 100% de la energía que consuman sea renovable, pero se trata de una previsión que ni es realista, ni positiva⁸². No es realista porque las energías renovables son de provisión normalmente intermitente mientras que las criptomonedas necesitan un suministro constante. Y, por otra parte, es inevitable que su demanda de electricidad siga creciendo exponencialmente para poder suministrar criptomonedas (de 2015 a marzo de 2021, el consumo de energía de Bitcoin aumentó casi 62 veces). Por tanto, aunque toda esa nueva demanda procediera de energías renovables, lo cierto es que supondría un gasto en producción de energía despilfarrador, sobre todo, si se tiene en cuenta que solo sirve para multiplicar la especulación que debilita la actividad económica productiva y destroza los incentivos que pueden hacer que los sujetos se dediquen a crear empleo y riqueza.

En resumen, las criptomonedas solo son una pieza más del "gran casino" financiero, como lo llamaba el gran economista liberal francés Maurice Allais, en que se ha convertido el capitalismo de nuestros días.

Son pura especulación financiera, despilfarro que impulsa el incremento de la deuda y destruye la economía productiva y una de las principales responsables del desastre climático de nuestros días. Además de servir, para colmo, como una vía por la que pueden transitar los grandes criminales del planeta para

⁸¹ Bitcoin Energy Consumption Index. En bit.ly/3qCvpMs

⁸² cryptoclimate.org/

ocultar su dinero y sacar mucha más rentabilidad de lo que roban.

En los años sesenta, viendo venir el desastre que iba a provocar la especulación financiera que se abría paso, James Tobin propuso "echar arena en las ruedas de las finanzas internacionales" para, al menos, frenarla. No se le hizo caso y hemos pagado las consecuencias: casi seis décadas de menos actividad económica, más desempleo, más deuda y crisis económicas y financieras recurrentes. Si no se quiere seguir por ese camino, se debería desinflar cuanto antes la burbuja financiera de las criptomonedas y evitar el gigantesco daño ambiental que están provocando.

¿QUIÉN CREA LOS EMPLEOS Y A QUIÉN HAY QUE PROTEGER PARA CREAMLOS?

Publicado en Público.es el 19 de noviembre de 2021

Uno de los mitos (por no decir mentiras) más extendidos cuando se habla de relaciones laborales es el que defienden muchos empresarios, economistas o dirigentes políticos al afirmar que el empleo lo crean las empresas y que, por tanto, toda la capacidad de decisión relativa a las relaciones y condiciones laborales debe estar en sus manos.

Lo estamos oyendo casi diariamente en los últimos meses cuando reclaman que se dejen bajo su exclusiva responsabilidad los fondos europeos destinados a recuperar la economía tras la pandemia.

La idea, sin embargo, no responde a la realidad y lo que se oculta tras ella es la demanda de un privilegio para algunos propietarios del capital que no necesariamente redundan en creación de puestos de trabajo y ni siquiera en beneficios de todas las empresas y empresarios.

Vaya por delante que las empresas son imprescindibles, no solo en el capitalismo sino en cualquier sistema económico mínimamente complejo, para que se pueda crear empleo y riqueza. Son las organizaciones en donde se conciben, producen o distribuyen los bienes y servicios que los seres humanos necesitamos para garantizar nuestro sustento, de modo que obligadamente han de existir para que podamos satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir.

Y si las empresas son imprescindibles para esa función, es también evidente que los empresarios, las personas capaces de crearlas o dirigir las, lo son igualmente.

Otra cosa es, por supuesto, que pueda haber muy distintas clases de empresas y de dirigentes o directivos empresariales, en función de su forma de propiedad, modo de funcionamiento o tipo de gestión.

Ahora bien, una cosa es esta que acabo de señalar y otra afirmar que son las empresas las que por sí mismas crean los puestos de trabajo y, por tanto, las únicas que garantizan el flujo de ingresos que se necesita para que se desarrolle la vida económica.

En la economía capitalista son efectivamente las empresas, los propietarios del capital privado, quienes llevan la iniciativa en la puesta en marcha de proceso económico y quienes arriesgan su patrimonio cuando realizan las inversiones que son necesarias para generar actividad. La expectativa de obtener beneficio es lo que les mueve a arriesgar y gastar con el propósito de recuperar sobradamente lo invertido. Y en ese proceso es cuando se crean puestos de trabajo que proporcionan los ingresos a los hogares que luego se gastan en adquirir los bienes y servicios que producen las empresas.

Esa es sin duda una de las grandes virtudes del capitalismo: permite que se puedan satisfacer necesidades colectivas simplemente a expensas de que haya individuos que traten de lograr su beneficio particular.

Esa realidad es la que justifica que se facilite o proteja la actividad empresarial y se trate de proporcionar las mejores condiciones para que se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Lo que ocurre, sin embargo, es que, por un lado, resulta materialmente imposible que esa actividad empresarial se lleva cabo con los exclusivos recursos que pueda aportar el capital privado. Y, por otro, que no cualquier tipo de actividad empresarial satisface efectivamente las necesidades sociales en las condiciones más deseables o eficientes.

Sin temor a exagerar, se puede decir que no hay ni una sola actividad empresarial que pueda desarrollarse hoy día sin disponer de recursos colectivos, sin conocimiento elaborado fuera de ella misma, sin infraestructuras públicas, por ejemplo. Ninguna actividad empresarial privada podría obtener beneficio si tuviera que hacer frente a los costes efectivos de todos los recursos que utiliza para llegar a vender cualquier bien o servicio que produzca.

Teniendo esto en cuenta, resulta que la creación de puestos de trabajo no es el resultado, por tanto, de la sola iniciativa o riesgo empresarial.

Más importante todavía es tener en cuenta que la pervivencia del empleo y del beneficio no es el resultado de la mera existencia de la empresa sino de todo el sistema socioeconómico en el que se desenvuelve. Ninguna empresa sobreviviría sin un sistema adecuado de normas, sin una administración eficaz de los recursos colectivos y del capital social que acabo de decir que necesita, sin un buen sistema educativo o de salud, sin seguridad, sin la investigación básica que sólo los estados pueden financiar con carácter general... Y, por supuesto, sin un adecuado equilibrio económico que asegure a las empresas las ventas que necesitan para obtener beneficios y sobrevivir.

De hecho, es una evidencia indiscutible que la gran virtud del sistema empresarial del capitalismo que he mencionado va lamentablemente asociada a un inconveniente insuperable: organizar la producción en función del beneficio privado no garantiza que se satisfagan todas las necesidades humanas, ni que la satisfacción que se pueda alcanzar persiguiendo ese fin se logre de la mejor manera posible. La exclusión y la pobreza tan extendidas, el paro tan numeroso, los fraudes, la deuda y las crisis tan frecuentes... son la prueba evidente de ello.

Para crear empleos, por consiguiente, no basta con conceder libertad de iniciativa a las empresas y poner en sus manos toda la capacidad de decisión en materia de mercados de trabajo porque, para crearlos y mantenerlos, se necesita tomar decisiones para hacer frente a estos últimos riesgos que tienen que ver con recursos que, sencillamente, no son de la exclusiva propiedad del capital privado.

Para crear empleos, incluso para garantizar el beneficio empresarial, es imprescindible gobernar bien recursos comunes y estos, por definición, no pueden quedar sometidos a la decisión o interés exclusivo de un grupo social. Y mucho menos de la "coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en ser destruida por los ataques de los pobres", de la que habló Adam Smith en sus *Lecciones de Jurisprudencia*.

El interés empresarial es muy importante en nuestras sociedad, sin lugar a dudas. Pero no es el único. Es más, muy a menudo es contrario al general, tal y como estamos viendo día a día. Por ejemplo, con el oligopolio eléctrico que sobrecarga al resto de las empresas u hogares, o el farmacéutico que impide que

toda la población mundial disponga de una vacuna contra la Covid-19.

Y, además y esto es muy importante, no es verdad que exista un solo interés empresarial. Es muy fácil de comprobar que los dirigentes empresariales que reclaman para sí la capacidad de decidir en materia laboral ni siquiera representan al conjunto de las empresas.

En España, sin ir más lejos, la patronal que negocia con el gobierno y reclama privilegios y políticas económicas determinadas no lo hace en nombre y en interés de todos los empresarios y empresas. La pequeñas, medianas y micro empresas ni siquiera están formalmente representadas cuando tienen intereses muy diferentes y necesidades distintas a las que defienden para sí las grandes empresas que dominan los mercados.

Estas últimas se garantizan condiciones de privilegio que se traducen, para las más pequeñas, en costes desorbitados, plazos de pago insostenibles, discriminación fiscal, desventajas en la contratación pública, o peores condiciones en materia de flexibilidad laboral, indemnizaciones, tipos de contrato, ayudas públicas o bonificaciones... La realidad es que las condiciones que se guardan para sí las grandes empresas y las que imponen a las medianas, pequeñas o micro representan una losa para estas últimas que frenan la creación de empleo y de riqueza.

Las grandes empresas cuyos representantes negocian con el gobierno y reclaman plena capacidad de decisión con la excusa de son las que crean el empleo son, en realidad, las que más dificultades imponen para que sobrevivan las más pequeñas, en donde se registra mucho mayor volumen de empleo, y las que acaban con la competencia en los mercados que puede proporcionar precios más bajos y condiciones más eficientes y satisfactorias para el resto de las empresas y los consumidores. Es decir, las condiciones que permitirían crear más empleos.

Las últimas reformas laborales que se han llevado a cabo en España no han establecido mejores condiciones para crear empleo, sino privilegios para las empresas más poderosas que han frenado el desarrollo de la productividad y la competencia y desincentivado la innovación al generalizar la devaluación salarial. Es decir, las que impiden que se desarrolle el ecosistema empresarial, institucional, cultural, político e incluso personal más favorable para crear empleo en nuestra economía.

Ahora que se está planteando modificar la anterior reforma laboral es el momento de poner sobre la mesa estas cuestiones, sin dejarnos llevar por los mitos que imponen los poderosos, para dar más voz y poder de decisión a todos los sujetos, instituciones y empresas de quienes de verdad depende que se puedan crear más empleos e ingresos dignos.

LOS HALCONES VUELVEN A VOLAR PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SIEMPRE

Publicado el 3 de diciembre de 2021

Los medios de comunicación europeos están llenos de declaraciones de políticos y economistas alemanes reclamando el recorte del gasto y de las políticas de financiación que viene llevando a cabo el Banco Central Europeo. El próximo ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, pide acabar con la “orgía de la deuda”⁸³ y el influyente economista Hans-Werner Sinn exige el “fin del dinero gratis” en un artículo reciente⁸⁴. Aunque el acuerdo de gobierno tripartito recién firmado contempla algunas propuestas genéricas sobre la necesidad de reformar las reglas europeas de estabilidad fiscal, el clima que se está generando en el país que define el rumbo de las políticas europeas va claramente en la dirección que apuntan estos economistas, sobre todo, cuando la subida de precios está empezando a desbocarse en Alemania. Lindner lo va dejando claro en sus sucesivas declaraciones: la hoja de ruta debe ser contención del gasto, bajada de impuestos, reglas fiscales para no desbocar el déficit público, limitar los programas masivos de compra de deuda pública del BCE y subidas de tipos de interés para frenar la inflación.

Aparentemente, se trata de medidas sensatas y con objetivos loables pero la experiencia ha demostrado, lamentablemente, que detrás de ellas solo hay prejuicios ideológicos, ventajas asimétricas para Alemania en perjuicio de la mayoría de los demás países europeos y que, aplicadas mal y en momentos

⁸³ El Economista. Christian Lindner, el nuevo 'halcón' alemán que vigilará Europa . En bit.ly/3FLunSU

⁸⁴ bit.ly/3FyKi6V

inadecuados, no generan actividad económica ni reducen la deuda en el conjunto de Europa sino justamente todo lo contrario.

Las reglas de estabilidad presupuestaria que defienden los llamados halcones europeos se basan en criterios puramente arbitrarios que no tienen base científica alguna.

El primer gran error de estas reglas es que se mantienen inalterables sea cual sea la fase del ciclo en la que se encuentre la economía. Tienen el mismo efecto que el de un conductor que circula a la misma velocidad y sin mover el volante en cualquier tipo de carretera, subiendo, bajando, con curvas o sin ellas: termina estrellándose.

Las reglas fiscales deben ser "contracíclicas", es decir, cambiantes según la coyuntura, diseñadas para poder impulsar la economía cuando esta se detiene o frenarla cuando se acelera demasiado. Y tampoco pueden ser iguales, como ocurre en Europa, las reglas de estabilidad que se apliquen a los gastos corrientes, del día a día, y a los de inversión.

El segundo error es haber establecido un límite del 3% del PIB a los déficit públicos que, además de lo anterior, es arbitrario y sin fundamento.

En mi libro *Economía para no dejarse engañar por los economistas* (Ediciones Deusto) expongo cómo llegó a establecerse en Europa, según lo reconoció Guy Abeille, uno de los dos funcionarios franceses que inventaron la regla en 1981⁸⁵.

El director de Presupuestos del gobierno francés les pidió que proporcionaran al presidente Mitterand alguna “regla sencilla que suene a economista y que pueda ser utilizada contra los ministros que desfilan por su despacho para pedirle dinero”. Abeille reconoció que ni él ni su compañero de despacho, Roland de Villepin, tenían la más remota idea de qué tipo de regla se podía utilizar con ese fin, porque no existía, y explicó que, por descarte, llegaron a la conclusión de que lo mejor sería una tasa sobre alguna magnitud y que finalmente decidieron que esta fuese el PIB. ¿Por qué el 3% y no otro porcentaje? También lo contó Abeille: “el 1% era magro y de cualquier manera no sostenible... el 2% sería inaceptablemente restrictiva... y entonces, bueno, creímos que esta cifra, el 2% del PIB, tendría algo de plano, casi como fabricado. Mientras que el tres es una figura sólida que tiene detrás de él precedentes

⁸⁵ La historia se cuenta en bit.ly/33mGU21

ilustres (...) un amplio eco en la memoria común: las tres Gracias, la Trinidad, los tres días de la resurrección, los tres órdenes de la alquimia, la triada hegeliana, las tres edades de Augusto Compte, los tres colores fundamentales, el acuerdo perfecto... la lista es infinita...".

La propuesta gustó al ministro de Presupuesto, Laurent Fabius, y a Mitterrand, este la presentó públicamente, los alemanes la hicieron suya... y terminó establecida como una regla objetiva y sensata en los tratados europeos. Más tarde, hasta el presidente del Instituto Monetario Europeo, Alexandre Lamfalussy, reconoció su naturaleza: "Los gobernadores son gente demasiado honesta y que saben que los criterios son arbitrarios. Yo jamás habría aceptado cifras de este género. Pero estoy contento de que los políticos lo hayan hecho".

Tampoco tiene fundamento científico ni empírico alguno la otra regla fiscal numérica, limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100% o cualquier otro. ¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo (100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134%)? El intento de hacer creer que más deuda pública implica menor crecimiento económico ha sido un fiasco. La última vez, se descubrió que los datos que pretendían demostrarlo tenían errores y que se utilizaron los que más convenía para llegar a esa conclusión preestablecida⁸⁶.

El cuarto gran error que hay detrás de la exigencia de los halcones es que se centran en la deuda pública y olvidan la privada y la exterior.

El auténtico problema que viene sufriendo Europa es que la unión monetaria está mal diseñada a propósito, con el fin de que Alemania pueda seguir manteniendo superávits comerciales constantemente. La explicación de por qué es así se entiende fácilmente.

Alemania tiene una economía muy potente y de base exportadora que tradicionalmente genera superávits comerciales con el exterior. Si tuviera moneda propia, su excedente comercial provocaría una apreciación de su divisa,

⁸⁶ Juan Torres. La verdadera cara de la austeridad. En bit.ly/3Aa6iDS

pues habría mucha demanda de ella para comprar los productos alemanes. Pero, al apreciarse, sus exportaciones serían menos competitivas y eso reduciría su superávit. No lo podría mantener constantemente sin un altísimo coste interno. Sin embargo, en una unión monetaria como la del euro, la cotización de la moneda no depende, lógicamente, del exclusivo saldo comercial de cada país, sino del registrado conjuntamente por todas las economías que la componen. En consecuencia, la existencia de déficits (y, por tanto, de deuda pública y privada para pagarlos) de los países del sur no es, en realidad, un inconveniente para Alemania, como nos quieren hacer creer. Todo lo contrario, es lo que le permite compensar sus superávits y poder registrarlos constantemente sin tener que "pagar" los efectos de la apreciación de la moneda que se produciría sin moneda única. Y no solo eso. Los déficits del sur también le proporcionan a Alemania la oportunidad de hacer buenos negocios dedicando sus excedentes a financiarlos, como ocurrió hasta que estalló la crisis de 2007-2008.

Lo trágico es que con la excusa de que los países del sur tienen deuda se les han impuesto políticas de desmantelamiento industrial y de recorte de impulsos de gasto que lo que han producido es justamente una caída de actividad y de ingreso y, por tanto, mayor endeudamiento y déficit... tal y como interesa a Alemania que ocurra.

Los ideólogos de la austeridad reclaman el final de los déficits pero lo que se persigue, en realidad, es que unos países los registren para que otros puedan tener superávits constantes que no podrían mantener en condiciones tan favorables con una moneda propia.

Lógicamente, los responsables de todo esto no van a reconocer ni su verdadero interés ni la arbitrariedad en que se basan las reglas que imponen. Para justificarlas difundan la idea de que en los países del sur trabajamos menos, algo manifiestamente falso, o que tiramos el dinero, endeudándonos sin necesidad.

Yo no voy a defender a los gobiernos que han dilapidado recursos programando inversiones que no interesaban más que a sus constructores y a los bancos que las financiaban. He defendido siempre la mayor moderación posible en el uso de los recursos y en el gasto público y privado, la plena transparencia y el control permanente acompañado de sanciones mucho más efectivas y ejemplares contra la corrupción. Pero esto es una cosa y otra no tener presente que el incremento incesante de la deuda en Europa tiene el fin que acabo de mencionar y otras causas a las que no se suele hacer referencia.

En primer lugar, las políticas de desindustrialización y de frenazo a la actividad que se vienen imponiendo con la excusa de combatir la inflación. Cuando se bloquean las fuentes de generación de ingresos de una economía, como ha ocurrido en la Unión Europea, es normal que los hogares, las empresas y las administraciones se endeuden constantemente. Insisto: como interesa a Alemania y a los bancos.

En segundo lugar, el debilitamiento constante de las políticas de ingresos públicos y consentir la existencia de paraísos fiscales para que las grandes fortunas y grandes corporaciones paguen cada vez menos impuestos.

En tercer lugar, la prohibición de que el banco central financie a los gobiernos, dejando a estos en manos de la que proporcionan, con un coste mucho más elevado, los bancos privados. Los datos de Eurostat muestran que, desde 1995, prácticamente la totalidad del incremento de deuda pública registrado en la eurozona (96,6%) se debe al pago de intereses. Este es el auténtico despilfarro de recursos.

Los halcones dicen que quieren acabar con la deuda pero la realidad es que las políticas que defienden son las que han hecho que se dispare en el conjunto de Europa porque mantenerla como motor de la economía europea es lo que conviene a Alemania y a otras economías excedentarias y a la banca que tiene como negocio su incremento continuo.

Poner fin ahora a los programas de recuperación, dejar de nuevo la financiación de los gobiernos en manos de los fondos especulativos y, sobre todo, subir los tipos de interés cuando los precios están subiendo por bloqueos en la oferta, como defienden los halcones, provocaría una catástrofe económica en Europa. Algo que no es descartable que ocurra porque la ceguera ideológica y la prepotencia hace tiempo que se adueñaron de la derecha que defiende al poder económico y financiero en el viejo continente.

Eso no quiere decir que lo que se esté haciendo sea lo correcto. Se están poniendo en marcha programas de recuperación que vuelven a dar más poder a los oligopolios para reproducir el modelo, generar nuevas burbujas y aumentar la deuda privada. La financiación del Banco Central Europeo es necesaria pero se está haciendo de forma insensata porque está generando un endeudamiento insostenible de los gobiernos. Y no se está haciendo absolutamente nada para evitar que se produzca una espiral inflacionista.

Los halcones europeos levantan de nuevo el vuelo dispuestos a convertir otra vez a Europa en un pato borracho que será arrastrado por la tormenta que se nos viene encima. Pero el resto tampoco está haciendo bien la tarea. Comenzaremos pronto a sufrir las consecuencias.

LOS BANCOS CENTRALES EN EVIDENCIA

Publicado en Público.es el 10 de diciembre de 2021

Los índices de precios están alcanzando los niveles más altos de los últimos treinta años ante la pasividad de las instituciones que nos habían asegurado que son las únicas que podrían evitarlo, los bancos centrales.

A ellos se les encomendó garantizar la estabilidad de los precios y para conseguirlo reclamaron y consiguieron todos los privilegios y competencias posibles: disponen del personal más cualificado y bien retribuido que constantemente nos está diciendo que sabe lo que va a ocurrir en nuestras economías, ahora y en el futuro; son plenamente independientes para diseñar y ejecutar la política monetaria; tienen poder ilimitado para crear dinero y un control prácticamente absoluto sobre todo lo que ocurra en el sistema financiero.

Sin embargo, los bancos centrales no han sido capaces de prever que los precios se iban a disparar. Y, lo que es mucho peor, no pueden hacer nada para evitarlo, salvo subir tipos de interés y dejar de financiar a los gobiernos (directamente o por la puerta de atrás), dos medidas que provocarían un destrozo descomunal en todas las economías sin que sea seguro que frenasen la inflación actual.

La explicación de por qué los bancos centrales están resultando tan incompetentes para evitar un episodio de inflación tan preocupante, por su magnitud y por el momento en que se produce, es bastante fácil: el fundamento de su actuación está plagado de falsedades sobre el funcionamiento real de las economías y la naturaleza de la inflación.

Los bancos centrales asumieron la tesis monetarista y combaten la inflación

como un fenómeno de raíz exclusivamente monetaria, es decir, tan solo provocada por un exceso de dinero en circulación y/o de la demanda de dinero. En consecuencia, suponen que para evitarla simplemente hace falta subir el precio del dinero, los tipos de interés.

Es cierto que esto último podría conseguirse si la inflación está ocasionada por un exceso de demanda pues resulta probable que, con financiación más cara, disminuyan el consumo y la inversión. Pero también lo es que, si se hace eso, se provoca un freno considerable de la actividad económica que trae consigo desempleo, una enorme caída de la inversión y de la vida empresarial y un gran aumento de la deuda. Es lo que han hecho en las últimas cuatro décadas casi todos los bancos centrales (unos, como el Banco Central Europeo, más que otros): tratar de bajar la fiebre del enfermo quitándole la vida.

La realidad es que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, sino que tiene que ver con la pugna entre los sujetos económicos por la percepción de rentas en los mercados de bienes y servicios y por eso no se le puede hacer frente solo con una medida monetaria.

Por otro lado, el propio comportamiento de los bancos centrales multiplicando la oferta monetaria en los últimos trece años sin que subieran los precios desmiente otro supuesto erróneo que sostiene su política monetaria. Aumentar la masa monetaria no tiene por qué provocar inflación si los medios de pago no llegan a las empresas y familias o si, llegando, hay oferta suficiente.

Otro supuesto erróneo que se utilizó para justificar la independencia de los bancos centrales centrados en el objetivo de la estabilidad de precios fue que los gobiernos son, por definición, manirroto e incapaces de llevar a cabo políticas fiscales de contención del gasto. La experiencia también ha demostrado que si alguna institución no ha tenido límite a la hora de gastar dinero en fines que no está del todo claro que hayan sido los convenientes (como salvar a bancos quebrados por su gestión irresponsable o enriquecer sin límite a los grandes propietarios) han sido precisamente los bancos centrales.

E igualmente se ha comprobado que se trataba de una auténtica ingenuidad (por no llamarla directamente mentira) establecer como punto de partida que los mercados financieros son estables y los que han de disciplinar a los gobiernos y empresas que no actúan convenientemente, razón por la cual se estima que deben ser quienes los financien y no los bancos centrales. La evidencia absoluta es que los mercados financieros son justamente lo contrario, muy inestables e

indisciplinados; no los que pueden imponer disciplina sino quienes la pierden constantemente.

Y, por último, es otra auténtica falacia considerar que la política monetaria que llevan a cabo los bancos centrales es una misión técnica y ajena a la controversia política. La realidad también muestra sin lugar a dudas que las medidas que toman tienen un efecto muy desigual sobre el patrimonio y las decisiones económicas de los sujetos, es decir, que son tan políticas como puedan serlo las medidas fiscales que adoptan los gobiernos.

La consecuencia de todos esos errores y falsedades es que los bancos centrales han venido actuando como fuentes de rentas financieras extraordinarias para determinados grupos sociales mientras que frenaban constantemente la actividad productiva de las empresas y el bienestar de los hogares y provocaban el aumento de la deuda. No han conseguido alcanzar ningún objetivo positivo: la subida muy limitada en los precios que se ha producido en las últimas tres décadas no es un tanto que se puedan apuntar como propio los bancos centrales. Se debe, realmente, a la globalización que ha permitido la entrada en el mercado de docenas de millones de trabajadores asiáticos con salarios de miseria, a la desindustrialización y al debilitamiento del poder sindical. Lo que sí provocaron los bancos centrales, como he dicho, fue que las fases de recesión fuesen más acentuadas y eso ha hecho que durante muchos años no hayan tenido que luchar contra la inflación sino contra la deflación, la bajada de precios como consecuencia de la falta de empuje de las economías.

No se trata de simples equivocaciones. Son mentiras porque, como dijo Joseph Stiglitz⁸⁷ *Mentiras graves sobre los bancos centrales* estos asumieron tales principios "justo cuando los testimonios empíricos estaban desacreditando las teorías en que se basaban".

Ahora pagamos las consecuencias. Los bancos centrales están paralizados porque no disponen de medidas eficaces para hacer frente a subidas de precios que están provocadas por desajustes en la economía real y no por causas monetarias. ¿Para qué va a servir que suban los tipos de interés cuando los precios aumentan porque las cadenas de suministro están bloqueadas? ¿Cabe

⁸⁷ Joseph Stiglitz, *Mentiras graves sobre los bancos centrales*. En <https://bit.ly/32dCJoy>

pensar que el aumento de costes financieros provocado por tipos más elevados no se va a trasladar a los precios?

La combinación de la crisis industrial global manifestada ya antes de la pandemia y los efectos de esta última han dejado desnudos a los bancos centrales. El armamento ideológico que los ha pertrechado desde que son independientes les impide enfrentarse con eficacia a la inflación cuando no nos podemos permitir que se aborte la recuperación ya de por sí débil y problemática en la que estamos.

Centrarse ahora en la inflación olvidando la necesidad de crear empleos y de evitar nuevas crisis empresariales es suicida; hacerle frente con medidas exclusivamente monetarias cuando proviene principalmente de un bloqueo de la oferta y del poder sobre el mercado de grandes oligopolios es un dislate; dejar que la imprescindible financiación pública de la inevitable transición eco-digital que se acerca quede en manos de los mercados es dinamitarla; seguir haciendo una política monetaria que concentra la riqueza y aumenta la desigualdad sin cesar es incendiario.

Urge cambiar el estatuto de los bancos centrales y la orientación de la política monetaria para hacer frente a la situación actual y al futuro económico más inmediato. Es imprescindible establecer que no persigan la estabilidad de precios como único objetivo sino también la generación de actividad productiva y el empleo, la sostenibilidad y la equidad; deben asumir la financiación de los gobiernos para frenar el crecimiento de la deuda pública y hacer posible la inevitable transición ecológica y digital que se avecina; han de liderar planes de reestructuración de la deuda acumulada a causa de la pandemia; deben actuar coordinadamente para conseguir el buen funcionamiento del conjunto de las políticas económicas; y han de actuar sometidos al debate y escrutinio público porque no toman decisiones técnicas sino tan políticas como las que adoptan los gobiernos.

LA MAYOR DE LAS MENTIRAS DE NUESTRO TIEMPO

Publicado en Público.es el 17 de diciembre de 2021

El pasado día 7 el Banco Internacional de Pagos publicó los últimos datos disponibles sobre las transacciones financieras registradas en los 27 países o zonas de mayor volumen de todo el mundo, lo que equivale a decir en la práctica totalidad del planeta⁸⁸.

Aunque las cifras no se presentan acumuladas, se pueden sumar con relativa facilidad las correspondientes a cada uno de los diferentes conceptos para obtener el total: 14.937 billones de dólares (billones españoles, es decir, millones de millones).

De esa cantidad, el 26% corresponde a las transacciones registradas en Estados Unidos, el 13% al Reino Unido y el 12% a China. Las de estos tres países suman, por tanto, el 51% del total. Las realizadas en España, 74 billones de dólares (0,5% del total)

La cuantía reseñada por el BIP es ya impresionante pero hay que tener presente que no están incluidas todas las transacciones que se llevan a cabo en los mercados financieros. Falta, por ejemplo, las correspondientes a las 9.549 millones de operaciones que, según sus propios datos⁸⁹, se llevan realizadas en lo que va de año en la OCC (Options Clearing Corporation), una organización

⁸⁸ bit.ly/33mu3gd

⁸⁹ bit.ly/3nBccsR

de compensación de derivados de acciones.

En cualquier caso, esos 14.937 billones de dólares son ya una cifra suficientemente grande como para sacar algunas conclusiones.

La primera es que la economía mundial está total e innecesariamente financiarizada. Según el Banco Mundial, el PIB conjunto de todos los países del mundo fue de 84,6 billones de euros, es decir, 176 veces menor que el volumen de transacciones financieras. Lo cual, sencillamente significa que estas últimas no se realizan como un servicio de la actividad productiva, como debiera ser, sino como un fin en sí mismas. Es la muestra evidente de que la economía de nuestro tiempo dilapida una cantidad ingente de recursos en un verdadero casino que absorbe los que necesita la actividad productiva, provocando al mismo tiempo burbujas y crisis financieras que la desestabilizan continuamente.

En segundo lugar y esto es lo verdaderamente importante, resulta que una minúscula tasa sobre todas esas transacciones sería suficiente para financiar los gastos que sería necesario realizar para cubrir sobradamente las necesidades de todos los seres humanos sin excepción.

Como es bien sabido, en todos los países del mundo se fijan impuestos con tipos que pueden superar, como ocurre en los personales sobre la renta, el 20 al 40 por ciento o más de la cantidad sometida a gravamen. Sin embargo, basta una sencillísima operación para comprobar lo que se podría conseguir con una tasa sobre la totalidad de esas transacciones financieras. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional⁹⁰, los gastos de todos los gobiernos del mundo suman 35,6 billones de euros en 2020, de modo que sería suficiente una tasa del 0,24%, es decir, de 24 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera, para sufragar la totalidad de ese gasto sin necesidad de ningún otro impuesto o cualquier otra financiación adicional.

La maraña de impuestos, tasas, multas y demás fuentes de ingresos que hoy día se utilizan para obtener los 25,2 billones de dólares que, según la misma fuente, obtienen los gobiernos, se podrían generar con una tasa de 17 céntimos por cada 100 dólares de transacciones financieras.

Hasta el momento, se calcula que todos los gobiernos del mundo han gastado unos 17 billones de dólares para hacer frente a la pandemia, lo que se podría

⁹⁰ bit.ly/3GGCYYc

haber sufragado con una tasa de 11 céntimos por cada 100 dólares de transacciones financieras y, por tanto, sin ningún impuesto adicional y sin haber generado deuda alguna.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para conseguir los Objetivos del Milenio⁹¹, destinados a cubrir las necesidades básicas de la población mundial, se necesitarían entre cinco y siete billones de dólares anuales hasta 2030. Si tomamos la cantidad más grande, resulta que se podría conseguir con una ínfima tasa del 0,04%, es decir, de 4 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera.

Un informe de Naciones Unidas estimó en 2015 que serían necesarios 267.000 millones de dólares anuales hasta 2030 para acabar con el hambre que provoca diariamente la muerte de más de 25.000 personas. Si redondeamos hasta 300.000 millones, se podrían financiar con una tasa del 0,002 por ciento, como he dicho, sin necesidad de más impuestos y sin deuda. ¿No es un auténtico crimen contra la humanidad permitir tantas muertes cuando el dinero necesario para evitarlas lo tenemos a nuestra disposición?

Es evidente que una tasa de esta naturaleza necesita grandes acuerdos y nuevas tecnologías para ponerse en marcha pero ¿de verdad que más complicados o inalcanzables que muchas otras de las medidas que toman los gobiernos de los países más avanzados o las empresas más punteras del mundo?

No estoy hablando ahora (aunque deberíamos hacerlo) de acabar con las más peligrosas e innecesarias de las operaciones financieras y ni si quiera de penalizarlas: ¿quién en su sano juicio y con honestidad puede pensar que se frenarían por soportar tasas de esa ínfima cantidad? Y tampoco vale el estúpido argumento de que el coste de esa tasa sería trasladado a los demás sujetos económicos por quienes las llevan a cabo. Son tan pequeñas que incluso así compensaría aplicarlas. Y, por el contrario, lo que está meridianamente claro es que, con esa tasa minúscula, se aliviarían extraordinariamente los costes de las empresas y hogares, pues dejarían de soportar la carga de impuestos directos e indirectos, entre cien o doscientas veces más cuantiosa, que hoy día han de pagar.

⁹¹ bit.ly/3nAUoxT

De hecho, ni siquiera sería necesario gravar la totalidad de las transacciones financieras. Su volumen es tan extraordinario que bastaría con hacerlo sobre una parte de ellas para obtener recursos ingentes con tasas igualmente de insignificantes.

Se perfectamente que he expuesto la idea de esta tasa en bruto y que estas cifras son a título de ejemplo pero lo hago para mostrar que la economía y la política de nuestra época se basan en una gran mentira. ¿Cómo se puede decir constantemente que no hay dinero en el mundo para financiar la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los cuidados, las pensiones, las infraestructuras, la seguridad... que necesitamos todos los seres humanos del planeta cuando se podría obtener todo lo necesario para ello por un procedimiento tan directo y efectivo?

Al menos, seamos sinceros y honestos: no hay escasez de dinero, hay miseria de voluntades y un egoísmo atroz por parte de quienes manejan los resortes del poder en el planeta. Los datos que acabo de presentar muestran que vivimos en un sistema que crea la penuria artificialmente. Y lo hace así porque solo se puede tener dominada a la inmensa mayoría de la población si se la mantiene bajo la esclavitud de la ignorancia, la insatisfacción y la deuda.

LA ECONOMÍA EN 2022: MÁS NUBES QUE CLAROS

Publicado en Público.es el 31 de diciembre de 2021

La mayoría de los economistas y organismos internacionales creyeron que 2022 sería el año de la definitiva normalización de la economía internacional tras la pandemia, después de una recuperación que se presumía potente y sin grandes obstáculos en el que está a punto de finalizar.

A la vista de cómo han ido evolucionando las circunstancias, todo hace indicar que estaban bastante equivocados y que 2022 puede ser otro año lleno de sobresaltos y dificultades económicas.

Como era de esperar desde el momento en que los países ricos acumularon vacunas dejando sin ellas a los más pobres, la pandemia no se acaba. Los sucesivos brotes han supuesto sobresaltos continuos que frenan la actividad económica y aumentan la vulnerabilidad, no solo económica sino también social y política en casi todos los países. Mientras no cambie la estrategia global de vacunación, no habrá recuperación definitiva posible. Las variantes del virus seguirán brotando y las economías volverán a resentirse por la incertidumbre, tensiones y frenazos que ya hemos visto que produce la Covid-19.

Lejos de resolverse en 2022, los desajustes entre oferta y demanda se agudizarán en todas las economías, por tres sencillas razones. Porque no son, como se dice, simplemente coyunturales o producidos por la pandemia sino que venían de antes; porque prácticamente no están recibiendo ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos, mientras que las grandes corporaciones refuerzan los comportamientos que produjeron el problema; y, finalmente, porque se trata de desajustes que se autoalimentan, al provocar incertidumbres y costes que

obligan a modificar constantemente las previsiones y expectativas y dificultan la consolidación de estrategias a medio y largo plazo, y porque incentivan -como mecanismo de defensa- la concentración empresarial que desarticula los mercados.

Lo que está ocurriendo, en realidad, es que la globalización de los últimos cuarenta años hace aguas y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato: China cambia su modelo y estrategia para garantizar su autonomía y Estados Unidos trata de consolidar y reforzar su dominio imperial cuando se debilita su hegemonía económica; mientras que el Reino Unido, Japón, la Unión Europea o Rusia tratan de no verse arrastrados por el vendaval. Todo parece indicar que 2022 puede ser el inicio definitivo de una nueva etapa de guerra fría, uno de cuyos efectos será inevitablemente la creciente tensión geopolítica que perturbará y debilitará cada día más a las economías de todo el mundo.

La industria mundial se encuentra en crisis desde antes de la pandemia; los sistemas logísticos y de aprovisionamiento se estaban empezando a reestructurar cuando los confinamientos y sus secuelas los han envuelto en un auténtico caos; los mercados de materias primas siguen siendo coto de la especulación, exacerbada cuando la situación se hace, como ahora, más inestable; los precios de la energía se disparan a causa del agotamiento secular de la oferta, de los conflictos políticos y del gran poder concedido a los oligopolios que dominan la producción y distribución; y el cambio climático, las catástrofes y las amenazas de shocks sistémicos cada vez más presentes y graves, obligarán a asumir costes extraordinarios, se quiera o no, para paliar sus efectos.

Por todas esas razones, los precios no se van a moderar en 2022 y eso va a suponer otra fuente añadida de dificultades económicas. No se va a detener su crecimiento, en primer lugar, porque no va a desaparecer el conflicto de intereses y la asimetría de poder en los mercados que está produciendo su subida en medio de los desajustes y tensiones de todo tipo que acabo de mencionar; en segundo lugar, porque los bancos centrales no tienen instrumentos para combatir el tipo de inflación que se está disparando; y, finalmente, porque una vez abierta la espoleta y creadas expectativas de inflación, al no haberse combatido de raíz, las subidas de precios se autoalimentan sin remedio. Cuando los precios industriales están subiendo en algunos países en torno al 35%, es una quimera pensar que la subida podrá detenerse en unos pocos meses, como nos quieren hacer creer los desnortados responsables de los bancos centrales.

Por otro lado, es muy difícil que las economías mejoren sustancialmente en el

próximo año cuando ni los gobiernos, ni los bancos centrales que aplican las políticas, ni los economistas de la corriente mayoritaria que las inspiran o proporcionan doctrina, tienen claro qué se debe hacer, ni por qué están haciendo lo que hacen.

A las políticas fiscal y monetaria de nuestro tiempo se les puede decir lo de la copla: ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Como ha escrito hace unos días Robert Skildesky⁹², la política monetaria funciona en teoría, pero no en la práctica, y la política fiscal funciona en la práctica, pero no en teoría. El resultado es la improvisación, choques entre unas y otras y respuestas puramente cortoplacistas, aunque con un doble efecto seguro: aumento de la deuda en favor de la banca y la mayor concentración de riqueza en pocas manos de la historia.

Quienes gobiernan las economías lo están haciendo con instrumentos cuyo manual de funcionamiento desconocen o que responde a modelos, situaciones o problemas anteriores, y sería otro auténtico milagro que así se pueda disponer de respuestas y estrategias que garanticen estabilidad, ni siquiera a corto plazo, y la seguridad o certidumbre que precisa la vida económica para desenvolverse sin caídas constantes.

A todo ello cabe unir el viejo problema de la vulnerabilidad extrema del sistema financiero internacional, cada vez más concentrado y expuesto a niveles de riesgo sistémico extraordinarios que trasvasa al aparato productivo, a las empresas y los hogares en forma de sobre costes, endeudamiento innecesario y falta de asistencia financiera. Un proceso que no sólo no se frena sino que se permite, se financia e incluso se incentiva y que será otro lastre que impedirá la recuperación económica generalizada en 2022.

No se piense que hago un análisis pesimista. Sucede que el mundo es pésimo, como decía José Saramago, de cuyo nacimiento, por cierto, hará un siglo en noviembre del año que empieza.

Es pésimo porque ni aprendemos ni parece que estemos dispuesto a hacerlo.

Por si no lo teníamos claro, la pandemia ha puesto sobre la mesa que la vida en

⁹² Robert Skildesky. La macroéconomie face à l'incertitude. En <https://bit.ly/3GjpMBY>

el planeta es frágil, que alterar las leyes naturales tiene consecuencias trágicas y que ni los mercados ni el afán de lucro como único objetivo de la actividad económica pueden proporcionar soluciones adecuadas a los problemas verdaderamente graves de la humanidad.

Hemos podido comprobar fehacientemente que la cooperación, la solidaridad y la salvaguarda prioritaria del interés común no son una mera opción moral sino la estrategia más pragmática para la supervivencia. Se ha demostrado que la intervención del Estado, el conocimiento compartido y la financiación adecuada de los servicios públicos esenciales son la única forma de garantizar el bienestar humano y también la eficiencia o incluso la propia vida de las empresas y el capital privado.

Y estamos comprobando con la sexta ola del coronavirus que no actuar conforme a esos principios vuelve a hacernos frágiles y a exponernos a nuevos riesgos.

Pero ni siquiera tener esas evidencias delante de nuestros ojos nos ha servido para hacer bien las cosas.

Seguimos dejando las manos libres a quienes siembran el desorden. Es verdad que los gobiernos y las grandes instituciones utilizan mayor munición, incluso negando sus propias doctrinas previas, como he dicho, pero no dejan de empujar a las economías por el mismo carril que destroza el planeta y multiplica la desigualdad. Se permite que las instituciones que deben defendernos se degraden y -¡seamos claros de una vez!- se fomenta el uso de la mentira y la confrontación civil como un instrumento más para consolidar el poder económico y financiero que domina el mundo.

Puesto que las cosas nunca son completamente blancas o negras, tendremos tendencias económicas contrarias y complejas en 2022, pues ni todos los gobiernos son iguales ni todos los sujetos o grupos sociales con más o menos poder económico se mueven en la misma dirección, o tienen el mismo interés. Pero me temo que la degradación paulatina, la inestabilidad, el desconcierto y el agravamiento de los problemas es lo que más probablemente puede ocurrir cuando no cambian los principios ni el encuadre general en que se mueve la economía.

ACERCA DEL AUTOR

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y autor de numerosas publicaciones y libros científicos y de divulgación, algunos auténticos bestsellers.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde 1981, durante toda su vida académica ha combinado la actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios como director de departamento, vicedecano, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. También ha ocupado el cargo de secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía y colabora con plena independencia con todas las organizaciones, partidos o colectivos sociales que se lo piden.

Es autor de numerosos libros, entre los que destacan manuales de economía para universidad y bachillerato y obras pioneras en España como *Análisis Económico del Derecho. Panorama doctrinal* (Tecnos, 1987) o *La economía del delito y de las penas*, con Alberto Montero (Comares, 1998). Más recientemente ha publicado, *Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera*, con Lina Gálvez (Icaria, 2010); *Hay alternativas* (Séquitur, 2011), *Lo que España necesita* (Deusto, 2012), *Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero* (Espasa, 2103) y *Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión* (Espasa, 2015) con Vicenç Navarro; *Hablando se entiende la gente* (Deusto, 2015); *El capitalismo en crisis: del crac de 1929 a la actualidad* (Anaya, 2015); *Economía para no dejarse engañar por los economistas* (Deusto, 2016); *La renta básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?* (Deusto, 2019); *El crash de la COVID-19* (Pirámide, 2020); y *Econofakes. Las 10 grandes mentiras de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida* (Deusto).

www.juantorreslopez.com
[@juantorreslopez](https://twitter.com/juantorreslopez)

